

Doble Grado Universitario Derecho y Administración y
Dirección de Empresas
2017-2018

Trabajo Fin de Grado

“LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS ONG: CREACIÓN DE UNA ONG UNIVERSITARIA PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO”

David Leño Calleja

Tutora

Remedios Aranda Rodríguez

Getafe (Madrid), 2018



Esta obra se encuentra sujeta a la licencia Creative Commons **Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada**

RESUMEN

“La personalidad jurídica de las ONG: creación de una ONG universitaria para el fomento del emprendimiento” constituye una investigación jurídica *ad argumentandum tantum* que busca explorar las diferentes alternativas de personalidad jurídica de las ONG en el sistema legal español, para elegir la forma de persona jurídica más adecuada a los fines de emprendimiento social de la entidad sin ánimo de lucro que motiva este TFG.

En particular, se pretende descubrir la opción más ventajosa para la creación de una ONG cuyo objetivo sea conectar estudiantes universitarios (en calidad de mentores) con estudiantes de institutos y colegios (en calidad de aprendices), para ayudar a estos últimos a conocer las herramientas existentes en la creación y desarrollo de aquellos proyectos que les apasionen; con un fuerte énfasis en emprendimiento social y empresarial.

El análisis jurídico de la investigación aborda la constitución legal de las ONG. Más concretamente, las alternativas de personalidad jurídica existentes en nuestro Derecho, esto es, la asociación y fundación, y también las consecuencias civiles que conllevan. Todo ello con el propósito de discernir la mejor modalidad de personalidad jurídica aplicable a la ONG universitaria que justifica el trabajo de fin de grado.

La línea discursiva se inicia describiendo el encuadramiento de las ONG desde una perspectiva social y tangencialmente jurídica para después adentrarse en la naturaleza de la personalidad jurídica y sus particularidades en relación con las entidades sin ánimo de lucro. A continuación, se analizan las modalidades de personalidad jurídica de asociación y fundación para así contrastar cuales son las ventajas e inconvenientes de ambas alternativas. Finalmente, se discute y argumenta la persona jurídica apropiada para la ONG universitaria de emprendimiento social concluyendo, tras el análisis jurídico-legal realizado, que la asociación resulta ser la forma de personalidad jurídica idónea.

Palabras clave

Personalidad jurídica; Tercer Sector; ONG; asociación; fundación

DEDICATORIA

A *Remedios Aranda Rodríguez*, mi tutora a lo largo de este TFG, por haberme acompañado durante estos meses de investigación con la mejor predisposición posible. Numerosos han sido las sesiones de trabajo, llamadas y *emails* que hemos intercambiado, y puedo decir estar realmente agradecido por la guía y los consejos que has compartido conmigo durante todas y cada una de estas interacciones. Gracias por tu generosidad.

A los miembros de *Start UC3M* y estudiantes de la UC3M, por todos estos años de gran pasión y trabajo. Como resultado os brindo este trabajo de investigación para el fomento de la educación emprendedora por universitarios para universitarios. Espero sirva para que juntos continuemos desarrollando un entorno estudiantil innovador y ambicioso. Gracias Universidad Carlos III de Madrid por estos 6 años de entrega, aprendizaje y satisfacción; gracias a ti he comprendido el valor del esfuerzo y la constancia.

A *Sergio Mañez Galán, Víctor Gumier Aranda, Gonzalo Romo de Antonio, Patricia López Andérez, David Fernandes Afonso y Marta Martín González* por ser mis hermanos de vida. Con vosotros he crecido, he cometido errores y he aprendido de ellos. Pero más importante aún, gracias a vosotros he comprendido el valor incalculable de la amistad pura y desinteresada.

A *Alisa Zöller*, mi novia, por el apoyo incondicional que me has dado en la elaboración de este TFG durante todo este tiempo que hemos estado viviendo en Alemania. Gracias por hacerme creer que somos capaces de todo y merecedores de nada. Gracias por remar conmigo cada segundo con toda la fuerza y determinación del mundo. Gracias por reír y hacerme reír. Gracias por ser como eres. Gracias por compartir tu vida conmigo. *Du bist die Beste, mein Schatzi: Ich liebe dich für immer.*

Y, por supuesto, a mi familia, pero especialmente a *Victoria Calleja Matas* y a *Juan Antonio Leño Tapia-Ruano*, mis padres, por haber creído siempre en mí en todo momento, por haberme motivado durante toda esta aventura universitaria de 6 años y por hacerme sentir orgulloso de mis apellidos cada día. Me siento extremadamente feliz de haber podido crecer de vuestra mano hasta llegar a ser la persona que soy a día de hoy. Sin lugar a dudas, soy quien soy por vuestro amor y lucha. Gracias por haber hecho todo lo que estaba en vuestras manos para que yo pudiera cumplir mis sueños. Os quiero.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN GENERAL	5
1. Justificación	5
2. Breve exposición sobre el contenido de la investigación	5
3. Objetivos de la investigación	7
4. Preguntas de la investigación	7
Capítulo 1. ENCUADRAMIENTO DE LAS ONG	8
1.1. Concepto y fin de las ONG	8
1.2. El Tercer Sector y su relación con la ONG	9
1.2.1. Concepto de Tercer Sector	9
1.2.2. Elementos del Tercer Sector	10
1.3. Personalidad jurídica de las ONG en el Tercer Sector español	11
1.4. Configuración legal de las ONG en España	16
Capítulo 2. LA ONG COMO ASOCIACIÓN	18
2.1. El derecho fundamental de asociación	18
2.2. El derecho de asociación en el Código Civil.....	21
2.3. La vigente Ley de Asociaciones	23
Capítulo 3. LA ONG COMO FUNDACIÓN	33
3.1. El derecho fundamental de fundación	33
3.2. El derecho de fundación en el Código Civil	34
3.3. La vigente Ley de Fundaciones	34
Capítulo 4. COMPARACIÓN ENTRE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES	47
4.1. Ventajas competitivas e inconvenientes de la Asociación como ONG	47
4.2. Ventajas competitivas e inconvenientes de la Fundación como ONG	50
CONCLUSIONES	53
1. Conclusiones específicas en relación con los objetivos	53
2. Futuras líneas de investigación	57
BIBLIOGRAFÍA	59
Bibliografía	59
Portales de Derecho y buscadores de jurisprudencia	69
ANEXO	
Índice de abreviaturas	
Normativa	
Jurisprudencia	
Misceláneo	

INTRODUCCIÓN GENERAL

1. Justificación

En 2012 el autor de este TFG comenzó el doble grado en Derecho y ADE en la UC3M deseando aprender todo aquello que le sirviera para ejecutar los proyectos que le apasionaban en un futuro. Durante su bachillerato ya tenía claro que quería emprender y mejorar la vida de las personas que le rodearan. Por esta razón, siempre se centró en realizar actividades (extra)curriculares que le ayudaran a cumplir sus sueños.

Fruto de las colaboraciones realizadas en entidades del Tercer Sector como *Start UC3M*, la asociación universitaria de emprendimiento, y *En Plenas Facultades*, la ONG de salud del campus de Getafe, ha sido descubridor de necesidades latentes en el entorno universitario. Sobre todo, en *Start UC3M*, donde ha trabajado durante los tres últimos años como voluntario y tesorero, y donde ha comprendido la importancia del trabajo social comunitario además del desarrollo del espíritu emprendedor.

En líneas generales, considera que existe todavía margen de mejora en el ecosistema emprendedor universitario. La propia experiencia personal le hace pensar que no se debe a la falta de talento sino más bien a la carencia de fomento. Sin embargo, no le cabe duda de que pronto empezarán a emerger proyectos universitarios dentro del campus gracias al incansable esfuerzo de los alumnos-emprendedores y al apoyo de la Universidad.

El planteamiento fundamental de esta investigación se centra en el descubrimiento de la modalidad de personalidad jurídica más adecuada para que las ONG puedan cumplir sus cometidos sociales. Concretamente, se estudia el caso de una ONG para el fomento del emprendimiento juvenil y así reflejar unos resultados detallados de aplicación práctica. Para ello se abordan, las siguientes materias del doble grado de Derecho y ADE: Derecho Civil, Derecho Constitucional, Derecho Tributario, y Sociología jurídica.

2. Breve exposición sobre el contenido de la investigación

Este TFG versa sobre la investigación pormenorizada de la influencia que tiene la elección de la personalidad jurídica adecuada en la constitución de una ONG universitaria para el fomento del emprendimiento desde una perspectiva jurídico-civil. En concreto, esta ONG tiene como fin principal conectar estudiantes universitarios (en calidad de mentores) con estudiantes de institutos y colegios (en calidad de aprendices), para ayudar a estos últimos a construir sus propios proyectos de una manera efectiva y educada. La relevancia educacional de esta ONG desembocaría en la incorporación laboral de numerosos estudiantes preuniversitarios como autónomos o gestores de pymes, abriendo a su vez nuevos caminos profesionales a la comunidad estudiantil.

Este TFG comienza examinando el fenómeno de las ONG y el Tercer Sector, dentro del cual se circunscribe. Posteriormente, se profundiza en la personalidad jurídica en el

sistema jurídico español desde una óptica histórica, constitucional y civil para comprender la esencia de las ONG y las modalidades que existen para su creación y gestión.

El estudio de las modalidades de personalidad jurídica para las ONG en general y para la ONG universitaria de emprendimiento en particular, núcleo duro del TFG, tiene como propósito teórico analizar cuáles son los factores que recomiendan el uso de un tipo u otro de persona jurídica considerando las características constitutivas y fines de la propia organización. Por ello, y a colación de la relevancia teórica del trabajo, se utiliza primordialmente la legislación nacional de asociaciones y fundaciones estatales para examinar cuál sería el tipo de personalidad jurídica más acertado. Así, se enfrentan los elementos de cada una de estas dos personalidades jurídicas, piénsese a modo de ejemplo en el acta fundacional o los estatutos, para discernir cual es la opción de persona jurídica más ventajosa para la ONG universitaria de emprendimiento.

La relevancia del TFG es eminentemente práctica puesto que pretende inspirar y ayudar a aquellos lectores, que deseen constituir ONG universitarias para el fomento de fines educativos, a tomar la decisión correcta en cuanto a la elección de la personalidad jurídica de la organización sin ánimo de lucro. El objetivo último de optar por la personalidad jurídica idónea es la obtención de una entidad del Tercer Sector capaz de lograr un beneficio pragmático bífido: por un lado, se lograría que los estudiantes o voluntarios de otros tipos que se integren en las ONG desarrollen habilidades personales y profesionales de diferentes carices que les sean de provecho y, por otro lado, favorecer la educación emprendedora de los estudiantes preuniversitarios para ayudarles a materializar sus ideas de negocio y/o abrirles nuevos horizontes que les sirvan para elegir los estudios universitarios o de formación profesionales que les resulten más útiles y fascinantes. El resultado en cualquiera de los dos casos es que tanto mentores como aprendices se incorporen al mercado laboral con grandes competencias y habilidades.

Este tema no ha sido ampliamente abordado por la literatura académica. El estado de la cuestión se centra en el análisis de la normativa de asociaciones y fundaciones en comparación con la legislación anterior o la de otros países (Derecho Comparativo Transnacional) para dar recomendaciones al legislador. Dichas recomendaciones doctrinales están diseñadas para satisfacer al conjunto heterogéneo de asociaciones y fundaciones, por lo que las ONG educativas de rango universitario no son específicamente abordadas. Por esta razón, los dos objetivos concretos que plantea el autor en este proyecto de investigación son: explorar la hipótesis de qué persona jurídica es la más adecuada a los intereses de una ONG universitaria para la promoción del emprendimiento entre alumnos preuniversitarios, y descubrir cuáles son los elementos legales cruciales de la normativa española vigente para optar por la modalidad de asociación o fundación de la ONG.

El TFG está estructurado en cinco bloques temáticos que integran a su vez subtemas de interés. El primero de los cinco capítulos, el encuadramiento de las ONG, examina la

literatura más destacada sobre el concepto teórico de ONG y sus fines; el Tercer Sector y sus elementos además de la personalidad jurídica de las entidades que lo conforman; y, finalmente reflexiona sobre la configuración legal de las ONG en España. En segundo término, se estudia la ONG en su forma de asociación investigando el derecho fundamental de asociación, su regulación en el Código Civil y su desarrollo legislativo en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (LA). En tercer lugar, se estudia la ONG como fundación profundizando en el derecho fundamental de fundación, su regulación en el Código Civil y su desarrollo legislativo en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (LF). El cuarto de los capítulos se centra en el análisis binario de las ventajas e inconvenientes que tienen una y otra forma de personalidad jurídica, asociación y fundación, para luego poder llegar, en último término, a una conclusión específica para la ONG universitaria de emprendimiento dentro del sistema normativo español. El TFG, finalmente, lo cierran las futuras líneas de investigación que podrían suceder a este TFG en un TFM e incluso en una Tesis Doctoral.

3. Objetivos de la investigación

- I. Entender las dimensiones constitucional y civil de la personalidad jurídica en el Tercer Sector.
- II. Explorar el valor de la personalidad jurídica asociativa en el contexto de las ONG.
- III. Explorar el valor de la personalidad jurídica fundacional en el contexto de las ONG.
- IV. Sugerir la modalidad de personalidad jurídica idónea para constituir una ONG universitaria que fomente el emprendimiento entre estudiantes preuniversitarios.

4. Preguntas de la investigación

- I. ¿Qué es la personalidad jurídica y cuál es su relevancia a la hora de constituir los diferentes tipos de personas jurídicas existentes en el Tercer Sector?
- II. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de constituir una ONG en forma de asociación?
- III. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de constituir una ONG en forma de fundación?
- IV. ¿Cuál es la personalidad jurídica que mejor se adapta a las necesidades de la ONG que motiva este trabajo de fin de grado? ¿Por qué?

Capítulo 1. ENCUADRAMIENTO DE LAS ONG

1.1. Concepto y fin de las ONG

Sin lugar a dudas, el protagonista de este proyecto de investigación es la ONG (Organización No Gubernamental) en sí misma. La definición que arroja la Real Academia de la Lengua Española (RAE) sostiene que esta variedad de agrupación colectiva de Derecho Privado es una “*Organización de iniciativa social, independiente de la Administración pública, que se dedica a actividades humanitarias, sin fines lucrativos*” (Asociación de Academias de la Lengua Española, 2014). Desde esta perspectiva, y siguiendo a Ruiz, V. (2004), se puede entender que los fines de estas instituciones se incardinan en los objetivos de mejora de la sociedad. Su único afán es el de cubrir aquellas necesidades de salud y educación, entre otras, en las personas que integran el lugar de actuación de la ONG.

Desde los albores de las ONG, situados “*al final de la Segunda Guerra Mundial*” (Gil, C. G., 2005), se ha reconocido una especial relevancia a tales instituciones. Su efectividad, probada a lo largo de estas últimas décadas, ha contribuido a sedimentar y consolidar estas modalidades de organización ciudadana; como se vislumbra en la continuada expansión y el sostenido desarrollo de las ONG tanto dentro como fuera del territorio español. Muestra de ello es la asentada clasificación por géneros de las ONG en función del fin que se plantean como cometido organizacional. Theunis, S. (1992) esclarece que las ONG pueden ser religiosas, políticas, sindicales, internacionales, solidarias y universitarias en función del agente social que las constituye; y, de acción directa, de acción intermediaria, de defensa de los derechos humanos y de estudio a tenor de la tipicidad de las actividades que llevan a cabo (ver anexo A).

Fruto de estas realidades, “*las generaciones o grupos de ONG tradicionales (asistencialistas, desarrollistas, críticas y de empoderamiento) han dado paso a otras nuevas, relacionadas con las funciones que cumplen en las sociedades neoliberales (subsidiarias, instrumentales, de oportunidad y altermundialistas)*” (Gil, C. G., 2005), y es precisamente por este fenómeno sociológico que el criterio legal para considerar determinadas agrupaciones como ONG ha devengado más laxo y abierto que antaño. No obstante, como establecía Weber, M. (1964), existe consenso en que el núcleo duro de las ONG se sigue basando estrictamente en el orden burocrático y la autoridad gestora como estándares administrativos para diferenciarlas de cualquier otro tipo de agrupación social espontánea menos orquestada; como así lo regula la legislación española en sus leyes especiales de asociaciones y fundaciones.

Volviendo a la actualidad, debe destacarse que el componente lucrativo se deja de lado en este tipo de instituciones sociales pues en el objeto social de estas instituciones no tienen cabida las actuaciones que busquen contraprestaciones económicas para enriquecerse como fin último (Dibós, B. B., 1988). Las actuaciones han de ser

desinteresadas y salvaguardar realidades sociales a las que no siempre se les otorga protagonismo. O lo que es lo mismo, *“las entidades sin ánimo de lucro nacen para realizar una actividad de reivindicación o de defensa de unos intereses que no son reconocidos o no reciben la suficiente atención por parte de la sociedad en el momento de su nacimiento”* (Vidal I., 2006). En este particular, hay que advertir al lector en este punto de que el término ONG es utilizado indistintamente, por la literatura académica y la jerga cotidiana, para referirse a aquellas instituciones que no se incardinan dentro de las estructuras administrativas estatales y para hablar de aquellas otras que carecen de ánimo de lucro; siendo esta última paradójicamente la calificación predominante. De esta suerte, como señalan Pérez Ortega, G., Arango Serna, M. D., & Sepulveda Atehortua, L. Y. (2011), el concepto de ONG ha ido absorbiendo paulatinamente el término de OSAL (Organización Sin Ánimo de Lucro) hasta situarse como el concepto comodín, utilizado de igual modo por académicos que por la sociedad en su conjunto, que engloba a todas las organizaciones, estatales o privadas destinadas a velar por el interés general sin ánimo alguno de recibir contraprestaciones económicas (ver anexo B).

1.2. El Tercer Sector y su relación con la ONG

1.2.1. Concepto de Tercer Sector

Muy en línea con los conceptos de ONG y de organización sin ánimo lucro aparece el denominado Tercer Sector (Sector Social o Sector No Lucrativo). Se llama Tercer Sector a aquel rango de actividades que se desmarcan de los sectores mercantil-privado y público. Para definir al Tercer Sector hay que sobrepasar varios impedimentos de heterogeneidad ya que es un concepto realmente complejo que viene explicándose en contraposición a otras definiciones como se puede apreciar en varios trabajos de la tradición académica española (De Luna, M. A. C., & De Lorenzo García, R., 2005).

A pesar de ello, resulta pertinente exponer una definición del Tercer Sector en términos positivos y de manera concisa: *“El concepto de Tercer Sector define el espacio de acción entre la autoridad pública y las empresas privadas: hace referencia al desarrollo de formas de organización y actuación de actores privados con fines públicos”* (De Luna, M. A. C., & De Lorenzo García, R., 2005). Con el propósito de ayudar al lector a comprender más acertadamente el amplio significado que tiene el Tercer Sector o Sector Social el autor propone pensar en las siguientes palabras clave para identificar el marco espacial y los agentes que pueden tomar parte del mismo (ver anexo C): *“Voluntariado, filantropía, no monetario, no mercado, no lucro, principio de no distribución de beneficios, solidaridad, altruismo, interés social y general”* (Sajardo Moreno, A., & Chaves, R., 2006).

El concepto de Tercer Sector en la literatura científica se origina alrededor *“del año 1975 escrita por Burton Weisbrod titulada Toward a theory of the voluntary nonprofit sector in a three-sector economy (Weisbrod, B. A., 1975) cuya finalidad era intentar explicar desde la teoría económica neoclásica las razones por las cuales existe este tipo de instituciones en una economía capitalista”* (Roitter, M. M., 2005). Como se puede intuir, la llana traducción del inglés al español de *Third Sector* constituye lo que hoy se llama en

España y Latinoamérica Tercer Sector. Valga decir que no fue hasta la década de los años noventa cuando el término que da título a esta sección empieza a asentarse por la doctrina económica no-lucrativa. Esto se debe en gran parte a Steinberg, R. (1997) dado que fue capaz de aglutinar en uno de sus artículos más célebres una vasta bibliografía de ensayos que contenían el binomio Tercer Sector en sus títulos. En España, por otra parte, fue la famosa STC 18/1984 de 7 de febrero la que se aventuró tajantemente a explicar que “*es propio del Estado Social de Derecho la existencia de entes de carácter social, no públicos, que cumplen fines de relevancia constitucional o de interés general*”, estableciendo de este modo la existencia de una dimensión social diferente apartada de los ámbitos estatal y económico o productivo. Esta nueva esfera social del Tercer Sector también llega a consolidarse doctrinalmente cuando autores como Piñar Mañas, J.L. (1992) disertan que el Sector Social supone la culminación de la evolución del hecho de que determinados fines de interés general no serán necesariamente absorbidos por el Estado, dejando de este modo margen a la iniciativa privada no lucrativa.

Finalmente, merece destacarse que la extraordinaria relevancia institucional del Tercer Sector hoy día cobra una fuerza tremenda, aunque ya empezó a ser significativa en 1992 cuando se pasó de la *International Research Society for Voluntary Associations, Nonprofit Organizations and Philanthropy* (creada en 1991) a la *International Society for Third-Sector Research* (ISTR) (creada en 1992)¹. Dichas instituciones ayudan a sedimentar el Tercer Sector y las organizaciones que lo componen, por esta razón considero que se deberían crear semejantes entidades con fuerza real para superar los tres principales obstáculos existentes en el marco social español: “*el primero tiene que ver con la gran heterogeneidad y diversidad del sector; el segundo con la escasa capacidad del mismo para generar recursos autónomos (por tanto, con la dependencia financiera del Estado); y el tercero con la débil articulación interna de las entidades que lo componen*” (Villarroya, A. A., 2008).

1.2.2. Elementos del Tercer Sector

La definición del concepto de Tercer Sector suele contener los siguientes elementos: “1. [*¿Quién las promueve?*] Actores sociales; organizaciones voluntarias; de carácter privado. Remite al carácter «no gubernamental» de sus acciones.
2. [*¿Con qué fines?*] Que no se mueven en la lógica de obtención de beneficios económicos; altruistas; solidarias. Remite a su carácter «no lucrativo»” (Jerez, A., & Blanco, M. R., 2010).

Los agentes sociales se sitúan como el prominente elemento diferenciador del concepto de Tercer Sector. Son precisamente las personas y grupos de la sociedad civil las principales abanderadas a este respecto. Conforme a lo dicho anteriormente, este conjunto de agentes sociales del tercer sector se debe concebir también utilizando a los actores de lo público y de lo privado. Tanto es así que los agentes asociativos del tercer sector “*comparten con las empresas su condición de organizaciones privadas y con el Estado*

¹ *International Society for the Third Sector*, <http://www.istr.org/?page=Vision>, a 11 de noviembre de 2017.

el interés por temáticas que encuentran alguna referencia directa o indirecta, y a veces casi imperceptible, con lo público” (Roitter, M. M., 2005). Entendiendo por lo público ese bien general que favorece el bienestar global y holístico de la comunidad en la que se desarrolle.

Adicionalmente, “*la condición de no gubernamental (de los grupos asociativos del Tercer Sector) las distancia del Estado y la no lucratividad de las empresas*” (Roitter, M. M., 2005). Si bien parte de la doctrina más influyente dentro de la categoría de las entidades sin ánimo de lucro, véase L. M. Salamon (1993), considera que el mero cariz no lucrativo complementado por la no-gubernamentalidad no supone *per se* que la asociación o fundación de la que se esté hablando haya de ser considerada inmediatamente como parte del Tercer Sector. L. M. Salamon (1996) esgrime además que el componente ideológico es determinante para incluir a ciertas personas jurídicas en el Tercer Sector. La ideología que debe subyacer es la que aboga por el altruismo desinteresado en pos de contribuir al desarrollo social del área en el que el agente asociativo despliegue su acción. Este componente ideológico es conocido, en palabras de L. M. Salamon, como “*la visión mítica de las entidades no lucrativas*”.

De lo anterior, se puede comprobar que los actores sociales, el carácter no lucrativo y la carga ideológica constituyen los tres pilares fundamentales sobre los que se asientan las instituciones que forman el Tercer Sector. No obstante, Campetella, A., Bombal, I. G., & Roitter, M. (1998), consideran que la auto-organización y auto-gobierno junto a la voluntariedad de afiliación han de posicionarse adicionalmente como elementos característicos del Tercer Sector. Así, la STC 218/1988, de 22 de noviembre en relación con el derecho de asociación del art.22 CE. Entienden los autores citados, del mismo modo, que la capacidad de organizarse y gobernarse a sí mismas más la libertad de adhesión, delimitan la esfera del Tercer Sector en mayor medida puesto que son estos conjuntamente con los tres pilares fundamentales los elementos que distinguen el ámbito del Tercer Sector.

1.3. Personalidad jurídica de las ONG en el Tercer Sector español

Dos de los pilares fundamentales que integran el Tercer Sector son las asociaciones y fundaciones. Ambas clases de personalidad se regulan en el ordenamiento jurídico español. Las asociaciones constituyen grupos de personas que se asocian para lograr la consecución de un mismo fin de interés general². El carácter desinteresado, voluntario y democrático predomina en sus organizaciones estructurales y personas que forman parte de ellas. Existen numerosas asociaciones nacionales, actualmente están registradas 37.327 en el Registro Nacional de Asociaciones³, lo que destaca la popularidad de esta modalidad del Tercer Sector. Las fundaciones son otra alternativa de impulsar iniciativas

² Los intereses de las mismas van desde la promoción de la investigación sanitaria hasta el fomento de actividades culturales; el espectro de posibilidades es ciertamente amplio en este sentido.

³ Ministerio del Interior, Registro Nacional de Asociaciones, <https://sede.mir.gob.es/nfrontal/webasocia2.html>, a 9 de junio de 2017.

privadas que incidan en causas sociales sin intención de lucro⁴. Su principal particularidad es la afectación prolongada que tienen a un patrimonio que busca promover actividades de interés general⁵. A nivel estatal hay 4.282 registradas en el Registro Nacional de Fundaciones⁶, y su relevancia es incuestionable en España como lo es en Europa gracias al carácter transfronterizo de ciertas fundaciones (Mato Pacín, M. N., 2012).

Tanto las asociaciones como las fundaciones poseen personalidad jurídica. ¿Pero qué es la personalidad jurídica dentro del Estado de Derecho español?

En primera instancia, y como señala Ferrara, F. (1929), es complejo responder insoslayablemente a tal cuestión puesto que las personas jurídicas se caracterizan precisamente por ser intangibles -en contraposición a las personas físicas- y en cierto modo abstractas. Tal es la dificultad de este concepto, que a lo largo de la historia reciente, numerosos estudiosos del Derecho no han logrado un acuerdo en cuanto al empleo del binomio “*persona jurídica*”. Por ello no es de extrañar que desde la Edad Media hasta finales del s. XX se vienen discutiendo teorías antagónicas en cuanto a la realidad de las personas jurídicas -teorías de la ficción, de la personalidad real, de la entequeia jurídica, y negativa-, y también en lo referente a la esencia de la personalidad jurídica -persona jurídica entendida como sujeto de derechos, sustrato humano, propiedad, y estructura- (De Castro y Bravo, F., 1972).

El art.35 CC establece que “*son personas jurídicas las corporaciones, fundaciones y asociaciones de interés público legalmente reconocidas, al igual que a las asociaciones de interés particular que la Ley dicte*”. Tal definición, según considera Caffarena Laporta, J. (1993), resulta exigua y “*debe ser completada con otras muchas disposiciones a las que, por otra parte, acaban remitiéndose los arts.35 y ss CC*”; en este sentido se han de contemplar la LA y la LF para comprender cuando se consolida la personalidad jurídica en cada caso. Las implicaciones inmediatas de la personalidad jurídica son “*el reconocimiento de cierta capacidad jurídica y de obrar y de autonomía patrimonial*” (Paz-Ares Rodríguez, C. et al., 1993), que variarán en concordancia con el tipo específico de personalidad jurídica.

A pesar de la complejidad percibida, Caffarena Laporta, J. (1991) prosigue con la identificación de los factores mínimos esenciales para denominar a una colectividad como persona jurídica, arrojando de este modo una definición técnica para todas las personas jurídicas, diferenciando entre perfectas: “*conforme a los modelos de acuerdo a los cuales se construyó la figura*” (De Castro y Bravo, F., 1972), e imperfectas: aquellas que cumplen con ciertos requisitos que satisfacen las personas jurídicas perfectas, pero no con todos (De Castro y Bravo, F., 1972). Para nuestro estudio debemos profundizar en el término de “*persona jurídica perfecta*” considerando sus inmediatas consecuencias

⁴ Nuevamente, se puede apreciar que los intereses defendidos por las fundaciones son muy similares a los de las asociaciones puesto que ansían cubrir una necesidad social latente sin precisar de lucros.

⁵ El art.1 de la Ley 50/2002 de Fundaciones (LF) prevé expresamente que “*Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general*”.

⁶ Ministerio de Justicia, Registro Nacional de Fundaciones, <http://www.mecd.es/fundacionesportal/UI/fundaciones/default.aspx>, a 9 de junio de 2017.

teóricas y prácticas. Señala Cossío, A. D. (1954) que entre las más notorias personalidades jurídicas perfectas destacan las asociaciones como colectividad de individuos, y las fundaciones como estructura organizada. La persona jurídica perfecta, explica desde el punto de vista dogmático De Castro y Bravo, F. (1972), se configura por analogía a la persona física. Lo que significa, según Martín, D. (1984), que la personalidad de este tipo de entidades jurídicas es propia y distinta a la de las personas físicas que puedan integrarla. En cuestiones patrimoniales esgrime Capilla Roncero, F. (1984), sucede exactamente lo mismo, ya que el patrimonio de la persona jurídica perfecta se encuentra separado del de las personas humanas que participan de ella. Además, la capacidad de obrar y actuar será semejante a la de la persona física con la única salvedad de la carestía de corporeidad tangible tan propia de la persona humana (Galgano, F., 2004).

Las asociaciones, consideradas como paradigmas de la personalidad jurídica perfecta tienen incluso subtipos en función de su interés concreto (Lluís y Navas, J., 1967). Tal es el grado de profundidad de la personalidad jurídica en esta categoría⁷. En este trabajo buscamos el estudio de las primeras, las asociaciones de interés público encuadradas dentro del denominado Tercer Sector⁸. Una vez aclarado, se puede comenzar el estudio de los elementos materiales y formales que distinguen a la persona jurídica tipo asociación. Por un lado, recalca Caffarena Laporta, J. (1991), existen los elementos materiales que caracterizan a las asociaciones. Éstos, concibe De Castro y Bravo, F. (1972) son esencialmente tres: pluralidad de individuos, bienes y propósito de la asociación.

I. La pluralidad de individuos es el origen mismo de la asociación puesto que son los sujetos, que se agrupan en un colectivo con una misma misión, los cuales constituyen la esencia de esta modalidad de personalidad jurídica; subraya De Salas Murillo, S. (1996). Por pluralidad se entiende que se requerirá más de una persona para conformar la asociación (Paz-Ares Rodríguez, C. et al., 1993), sin embargo, la letra de la Ley establece en el art.5 LA que será necesario contar con un mínimo de tres personas físicas y/o jurídicas para constituir dicha agrupación⁹.

II. Los bienes han de ser entendidos como el patrimonio personal de la asociación (Carpíó Mateos, F., 1972). El art.38 CC dispone que *“las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución”*, remitiendo así al art.7 LA

⁷ A grandes rasgos, el art.35 del Código Civil (CC) dicta que las asociaciones pueden ser de interés público o, por el contrario, de interés privado (piénsese en las sociedades mercantiles o las asociaciones civiles como meros ejemplos).

⁸ Dejando de lado, como recalca el art.1 LA, a: partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, iglesias, confesiones, comunidades religiosas, federaciones deportivas, asociaciones de consumidores y usuarios, comunidades de bienes y propietarios, entidades mercantiles, cooperativas y mutualidades, uniones temporales de empresas y agrupaciones de interés económico.

⁹ Esta decisión emanada del poder legislativo se deriva del Derecho Romano dado que, refiriéndose a los *collegia*, exigía el número de tres (*tria fiunt collegia*); como mínimo para que pudiera existir una mayoría de votantes. Valga decir que no se establece un número máximo de personas para acordar la creación de la asociación.

que esclarece que el patrimonio inicial deberá estar presente en los Estatutos así como el “*régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la fecha de cierre del ejercicio asociativo*”. Goza de especial relevancia para las instituciones jurídicas, acuñadas como “*perfectas*”, el facto de que el patrimonio esté presente en la persona jurídica desde su surgimiento¹⁰ (Lucas Murillo De La Cueva, E., 1996).

III. El propósito de la asociación ha de ser compartido por todos los asociados, puesto que es éste, siguiendo a Roca Sastre, R. M. (1976), el nexo de unión. Así, el art.1.2 LA indica que el fin de las asociaciones ha de ser altruista y desinteresado puesto que el ánimo de lucro no tendrá cabida. De hecho, en el art.13.2 se clarifica que aquellos beneficios obtenidos por la actividad económica o productiva de la asociación deberán reinvertirse en esta misma para continuar con el fin que le dio origen y personalidad jurídica; en ningún caso podrá procederse a la distribución o cualesquiera otros de los beneficios entre los asociados. Y, paralelamente, continua el art.2 LA estableciendo que el fin tendrá que ser lícito para poder asociarse.

Por otro lado, aparecen los elementos formales que caracterizan a las asociaciones. Son de vital importancia pues en el tráfico jurídico otorgan fácticamente personalidad jurídica a la asociación. Los elementos formales, dice De Castro y Bravo, F. (1972), suponen *conditio sine qua non* para que una asociación sea legalmente reconocida con validez legítima, y son dos: Estatutos y publicidad.

I. Los Estatutos acuerdan el “*concierto de las voluntades de sus miembros (pactum associationis) y ley para las relaciones sociales (lex societatis)*” (Castro y Bravo, F., 1972). Éstos en sí mismos sólo tienen valor legal en tanto se supedita a la regulación específica, y se cerciore que es coherente con los fines inspiradores de la asociación (Fernández Farreres, G., 1987). De ahí que el art.7 LA sea ciertamente relevante pues determina los extremos que tendrán que cubrirse estatutariamente de manera obligatoria, sin perjuicio de normas supletorias ante eventuales vacíos¹¹.

II. La publicidad se logra mediante la inscripción en el Registro estatal de asociaciones estatal (actualmente adscrito al Ministerio del Interior), Registro de la comunidad autónoma o Registro provincial en el que se desee desarrollar la actividad de la asociación (Paz-Ares Rodríguez, C. et al., 1993). Una vez se hayan registrado todos los datos necesarios se podrá considerar que el Registro ha dado fe de lo entregado por la asociación y, consecuentemente, constituirá prueba legal de la efectiva existencia de la asociación. El valor constitutivo reside precisamente en el conocimiento por terceros del nacimiento y estructura de la asociación (López-Nieto y Mallo, F., 2000).

¹⁰ Debido a que “*es la única garantía de los acreedores; dado que los asociados (...) no responden de las deudas*” (Castro y Bravo, F., 1972) con su patrimonio personal.

¹¹ Aspectos tan cruciales como la responsabilidad patrimonial, la responsabilidad jurídica de los asociados y la protección de acreedores se recogen en los Estatutos para eliminar toda incertidumbre en lo referente a estos relevantes temas para el negocio jurídico.

Las fundaciones son también consideradas por la doctrina, como claro ejemplo de la personalidad jurídica perfecta (Caffarena Laporta, J., & España, 1991). El Código Civil habla en múltiples artículos de las fundaciones¹² y su personalidad jurídica, pero en ningún momento da una definición de este tipo de persona jurídica perfecta. Por ello hay que acudir a la legislación específica de fundaciones. El art.2 LF afirma que: “1. Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general. 2. Las fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, por sus Estatutos y, en todo caso, por la Ley”. Paz-Ares Rodríguez, C. et al. (1993) complementando a la LF, y a la vista del art.35 CC, consideran que la fundación “se caracteriza por ser un negocio jurídico unilateral y sui generis dirigido a crear una persona jurídica mediante la adscripción de un conjunto de bienes a un determinado fin”¹³. La fundación puede tomar diferentes variantes en función de su modalidad de constitución y sus características particulares. Cabe mencionar que son dos las modalidades de constitución de la fundación: “inter vivos” y “mortis causa”¹⁴.

Al igual que sucedía con las asociaciones, las fundaciones también poseen elementos materiales y formales que las hacen únicas. Así, sigue De Castro y Bravo, F. (1972) en relación con los elementos materiales de las fundaciones, se puede decir que la base de la razón de ser de la fundación se sustenta en la voluntad de la persona fundadora de cumplir un objetivo benéfico asignando su propio patrimonio. En este sentido, la dotación del patrimonio supone una liberalidad del fundador en pos de la constitución de la fundación¹⁵. La fundación, explica Durán Rivacoba, R. (1996), ha de esclarecer cuál será el fin de interés general al que dedicará todos sus esfuerzos, además de señalar los medios organizativos que utilizará para ello. Los Estatutos fundacionales se encargarán de recoger esta información y, la dotación aportada por los fundadores representará la viabilidad mínima que el art.12 LF determina como adecuada y suficiente para hacer frente a las tareas necesarias que desembocarán en el cumplimiento de las finalidades fundacionales previstas de interés general¹⁶.

Ahora bien, ¿cuáles son los elementos formales que conceptualizan las fundaciones? Son los mismos que para las asociaciones: los Estatutos y la publicidad.

I. Los Estatutos, defiende De Prada González, J.M^a. (1996), suponen el pacto interno de los fundadores para acometer la tarea que se asignaron, aunque éstos también serán complementados por la escritura de constitución. El art.11 LF menciona una serie de

¹² Véanse art.28, arts.35-39, art.4.1.

¹³ De lo que se deriva, según De Castro y Bravo, F. (1972), que la fundación supone la personificación de una agrupación organizada y reglada por el fundador con el objetivo no lucrativo de cubrir una necesidad social aportando el patrimonio propio para ello.

¹⁴ La diferencia es que la primera de ellas se constituye por escritura pública a instancia del interesado, mientras que la segunda modalidad se constituye testamentariamente, como así lo señala el art.9 LF

¹⁵ No ha de entenderse por ello que esta liberalidad sin contraprestación alguna supone una donación, puesta que ésta es propia del negocio privado destinado a un fin que no tiene que ser necesariamente público (como así sucede en las fundaciones; recuérdese el art.2 LF) y porque la dotación del patrimonio del fundador supone una acción constitutiva, suceso que no acaece con la mera donación.

¹⁶ El umbral general mínimo que establece la LF para la dotación es de 30.000€ para la masa de bienes y derechos aportados. La aportación, establece el art.12.2 LF, podrá ser tanto dineraria como no dineraria.

contenidos que se han de tener presentes en los Estatutos para que estos tengan la validez necesaria y puedan satisfacer el requisito de formalidad de las fundaciones¹⁷, entre ellos la denominación o la composición del Patronato, entre otros.

II. En relación con la publicidad, aparece la escritura de constitución, recogida en el art.10 LF¹⁸ haciendo referencia a la formalidad necesaria para la inscripción de la fundación en el registro de fundaciones correspondiente¹⁹. Esta escritura incorpora los Estatutos además de otros contenidos de interés como el nombre de los fundadores o la voluntad fundacional. Al igual que sucedía con las asociaciones, prosiguen De Priego Fernández, V., Pérez de Vargas Muñoz, J. & Universidad Rey Juan Carlos (2004), una vez se hayan registrado todos los datos necesarios se podrá considerar que el Registro ha dado fe de lo entregado por la fundación y constituirá prueba legal de la efectiva existencia de esta entidad legal sin ánimo de lucro. El valor constitutivo reside precisamente en el conocimiento por terceros del nacimiento y estructura de la fundación (Paz-Ares Rodríguez, C. et al., 1993).

Pues bien, volviendo a la pregunta inicial: ¿qué es la personalidad jurídica dentro del Estado de Derecho español? Se puede concluir que la personalidad jurídica es aquella atribución que se hace a ciertos organismos de derechos y obligaciones para tomar parte en el negocio jurídico de una manera eficiente. Es por esta razón que, en cuanto a las asociaciones y fundaciones se refiere, “*el ordenamiento jurídico reconoce o atribuye individualidad propia, distinta de sus miembros componentes, y a las que trata como sujetos de derechos y deberes, con una capacidad de obrar en el tráfico por medio de sus órganos o representantes*” (Díez-Picazo, L. y Gullón, A., 2013). Entiéndase la capacidad de obrar como potestad que les permite “*adquirir y poseer toda clase de bienes, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución*”; como se recoge en el artículo 38. 1.º CC.

1.4. Configuración legal de las ONG en España

En España, las entidades sin ánimo de lucro y ONG acostumbran a adoptar las modalidades de personalidad jurídica de asociación o fundación para constituirse legalmente. Estas dos figuras jurídicas presentan similitudes que las hacen categorizarse

¹⁷ “a) La denominación de la entidad. b) Los fines fundacionales. c) El domicilio de la fundación y el ámbito territorial en que haya de desarrollar principalmente sus actividades. d) Las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la determinación de los beneficiarios. e) La composición del Patronato, las reglas para la designación y sustitución de sus miembros, las causas de su cese, sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos. f) Cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que el fundador o fundadores tengan a bien establecer”. Como matización final la LF explica en este mismo art.11 que en los Estatutos se podrán incluir otras disposiciones relativas al funcionamiento de la fundación siempre y cuando no sean opuestas a la letra de la Ley, y si esto llega a suceder, no se tendrán en cuenta a no ser que estos puntos contrarios a la Ley afecten la validez constitutiva de la fundación. “En este último caso, no procederá la inscripción de la fundación en el correspondiente Registro de Fundaciones”.

¹⁸ ART.10 LF: “a) El nombre, apellidos, edad y estado civil del fundador o fundadores, si son personas físicas, y su denominación o razón social, si son personas jurídicas, y, en ambos casos, su nacionalidad y domicilio y número de identificación fiscal. b) La voluntad de constituir una fundación. c) La dotación, su valoración y la forma y realidad de su aportación. d) Los Estatutos de la fundación, cuyo contenido se ajustará a las prescripciones del artículo siguiente. e) La identificación de las personas que integran el Patronato, así como su aceptación si se efectúa en el momento fundacional”.

¹⁹ El Registro de estatal de fundaciones se circunscribe al Ministerio de Justicia del Gobierno de España.

dentro del Tercer Sector, delimitando de este modo su área de influencia y sus modos de actuación dentro del negocio jurídico (Barea, J., & Pulido, A., 2001). Consecuencia de ello, entidades como las siguientes: “- *Asociaciones que tengan fin de lucro.* - *Comunidades de Bienes y Propietarios.* - *Entidades que se rijan por disposiciones referentes al contrato de Sociedad.* - *Cooperativas.* - *Mutualidades.* - *Uniones Temporales de Empresas.* - *Agrupaciones de Interés Económico*” (De Luna, M. A. C., & De Lorenzo García, R., 2005) se encuentran fuera del plano de las ONG y de las entidades sin ánimo de lucro y, no se engloban dentro de las instituciones jurídicas que en este trabajo interesan. El proceso de creación y constitución es diferente para las asociaciones y para las fundaciones. Así acaece, debido a que la personificación de las realidades sociales que dan origen a su existencia precisa de diferentes aproximaciones en función de cada caso (ver Anexo D).

En primer término, se sitúan las asociaciones como instituciones de Derecho para la organización de un conjunto determinado de personas que buscan la consecución de un mismo objetivo. Para que una asociación esté constituida legalmente se necesita cumplir una serie de criterios dentro de la LA (Díez-Picazo, L. y Gullón, A., 2013), destacándose: la capacidad de los constituyentes (Anguita Villanueva, L. A., 2016), el acuerdo de constitución (Gluck, D. G., 2010), el acta fundacional (Nistal, T. A., & De Juana Mínguez, A., 2003) y los Estatutos de la asociación (De Prada González, J.M^a, 1996). Y, en segundo término, se encuentran las fundaciones. Éstas surgen de necesidades latentes de la sociedad y buscan promover iniciativas que favorezcan el interés general. La LF señala los aspectos exigibles para constituir una fundación. De entre ellos, destacaremos los siguientes: la capacidad para crear fundaciones (Díez-Picazo, L. y Gullón, A., 2013), el negocio jurídico fundacional (Márquez Márquez, A., 2003), los Estatutos de la fundación (Durán Rivacoba, R., 1996), y la dotación (Díaz-Aguado Jalón, C., 2006).

Capítulo 2. LA ONG COMO ASOCIACIÓN

2.1. El derecho fundamental de asociación

La Constitución Española (CE) de 1978 recoge en el Título I. De los derechos y deberes fundamentales, capítulo segundo, dentro de la Sección 1.^a De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, el derecho de asociación. El art.22 CE concretamente, declara implícitamente que el propio derecho de asociación es considerado en el sistema jurídico español como un derecho fundamental -obligatoriedad de desarrollo mediante Ley Orgánica: art.81.1 CE- (Marín López, J. J., 2005). Como señala la exposición de motivos de la LA, *“El derecho de asociación proyecta su protección desde una doble perspectiva; por un lado, como derecho de las personas en el ámbito de la vida social, y, por otro lado, como capacidad de las propias asociaciones para su funcionamiento”*, siendo ambas ópticas igualmente válidas para considerarse como derechos fundamentales dentro del mismo asociacionismo (STS 894/2011, facetas del derecho de asociación). Además, conforme a este artículo serán ilegales las asociaciones que persigan o utilicen medios ilícitos que entren en la categoría de delitos, así como aquellas asociaciones que sean secretas o paramilitares que serán prohibidas²⁰ (Aguiar de Luque, L. & Elvira Perales, A., 1996-1999). Adicionalmente, este precepto constitucional ordena que se le de publicidad mediante la inscripción en el Registro a todas aquellas asociaciones que se hayan constituido amparándose en este artículo.

A modo de apunte histórico es necesario subrayar, como indica la STC 67/1985, que existía cierta animadversión por el Estado Liberal hacia el asociacionismo puesto que recordaba en gran medida a regímenes anteriores opuestos a los valores del ideal liberal. De ahí que la consolidación del derecho de asociación como derecho fundamental no aparezca hasta 1869 con la *“Carta de 1869”* cuando se promulgó por primera vez el derecho de asociación. El asociacionismo fue desarrollado popularmente en un principio por vías de la Constitución Española de 1876, la Ley 12 de julio de 1887, la Constitución de 1931, la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, y finalmente por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. Como señalan Canosa Usera, R. y González Escudero, A. (2011), en relación con el art.22 CE: *“El Tribunal Constitucional (STC 67/1985 y STC 173/1998, de 23 de julio) aunque la consideró vigente en aquello en lo que no padeciera inconstitucionalidad material sobrevenida, ya advirtió que no era desarrollo cabal del artículo 22 de la Constitución por cuanto respondía a principios opuestos al pluralismo actual”*.

El legislador constitucional estima oportuno regular las manifestaciones del derecho de asociación más controvertidas como los sindicatos o los colegios profesionales, pero en ningún momento menciona directamente el tipo de asociaciones a las que hoy en día se conoce popularmente por el nombre de ONG (Fernández Farreres, G., 1987). Por esta

²⁰ Muy relacionado con las dos matizaciones anteriores aparece la resolución judicial motivada como instrumento de resolución o suspensión de semejantes asociaciones.

razón, el artículo 22 CE recoge de manera general y subsidiaria, en carencia de otro artículo constitucional más específico, las asociaciones que no recaen en las siguientes categorías: partidos políticos (art.6 CE), sindicatos (artículos 7 y 28 CE), confesiones religiosas (artículo 16 CE), asociaciones de consumidores y usuarios (artículo 51 CE) y las organizaciones profesionales (artículo 52 CE). De manera que las asociaciones que carezcan de interés de lucro y que busquen la consecución de una necesidad social latente de modo desinteresado, voluntario y democrático recaerán en el art.22 CE si tuvieran carácter general. Ahora bien, si estas asociaciones responden a las características principales de las asociaciones más especiales que regula la CE de manera directa, en ese caso se tendría que acudir en primera instancia al artículo que lo regula específicamente y, secundariamente, al artículo 22 CE para comprender el ámbito más genérico de su regulación constitucional (Santamaría Pastor, J. A., 2001).

El interés de lucro de la asociación es un factor determinante para incluirse o no en el art.22 CE como confirma la STC 5/1996 al recordar que el derecho fundamental de asociación posee referencias materiales. En este sentido, entiende Ruiz Olabuénaga, J. I. (2006) que aquellas asociaciones o, mejor dicho, sociedades que ostenten ánimo de lucro -piénsese en aquellas que responden al art.1965 CC y en el art.116 del CCom- no formarán parte del derecho de asociación que establece el art.22 CE²¹. Para esta modalidad de sociedades la CE reserva el art.38 bajo el derecho de la libertad de empresa. Así, el carácter lucrativo o altruista delimita las fronteras de las asociaciones del art.22 CE con respecto al resto de personas jurídicas que colindan el denominado Tercer Sector, esto es, aquellas que se enmarcan dentro del sector económico privado o estatal/público (López-Nieto y Mallo, F., 2000).

Especial significatividad tiene la doble vertiente del derecho de asociación (STS 7323/2011). Por supuesto, que ha de entenderse este derecho fundamental de manera positiva ya que está permitido asociarse y tomar parte de este tipo de personas jurídicas, pero al mismo tiempo ha de tenerse en cuenta que la libertad de “no” asociarse también se incluirá dentro de las prerrogativas constitucionales que arroja el art.22 CE (Berenguer Martínez, J. F., & Reverte Martínez, F. M., 1997). Es decir, no existe obligatoriedad alguna para los individuos en cuanto a participar de cualquier asociación. Este derecho fundamental de asociación es un derecho y no podrá ser considerado como una obligación; como así lo ratifica la STC 5/1981. Aunque en dos supuestos muy concretos, como son los de los arts.36 y 52 CE a propósito de los colegios profesionales y de las organizaciones profesionales respectivamente (Martín-Retortillo Baquer, L., 1996), existen excepciones para que la vertiente negativa del derecho de asociación no se aplique puesto que en estos casos la iniciativa de creación de tales entidades es legal, puesto que se impone a todos aquellos sujetos que desempeñan una concreta actividad económica que tenga repercusión pública directa sobre bienes jurídicos que precisan de mayor protección

²¹ A pesar de que estas sociedades puedan compartir con las asociaciones varios elementos del carácter asociacionista como son la voluntariedad de adhesión, la persecución de una meta en concreto y la auto-organización/gobernación de la propia entidad; siempre y cuando sea de manera democrática como apunta la STC 104/1999. Es decir, siempre que el libre principio democrático rija de manera interna.

y que por lo tanto están sujetos a estrictas medidas legales²² (Sánchez Saudinós, J. M., 1996).

Paralelamente, la vertiente positiva del derecho de asociación también se puede ver coartada (Mora Alarcón, J. A., 2005), y es que cuando las asociaciones persigan fines o utilicen medios ilegales que se califiquen como delito (art.22.2 CE) o cuando las asociaciones sean secretas o de carácter paramilitar (art.22.4 CE) no podrá satisfacerse legalmente el derecho fundamental de asociación por el que vela el art.22 CE. Al tratarse de delitos tipificados como tal en el art.515 del Código Penal (CP) se está cometiendo un acto ilícito que no tiene encaje dentro del asociacionismo legal²³. Obsérvese además que las asociaciones de carácter secreto o clandestinas habrán de ser disueltas, pero no serán punibles penalmente. En palabras de Canosa Usera, R. y González Escudero, A. (2011) *“se despenalizan las asociaciones clandestinas como las denominaba el apartado 3º del viejo artículo 173. Esta despenalización no supone legalización de las asociaciones secretas cuya inconstitucionalidad e ilegalidad deriva respectivamente del artículo 22.4 CE y del artículo 2.8 de la Ley Orgánica 1/2002”*. No obstante, y en lo concerniente a la cualidad de secreto, es necesario aclarar que cuando una asociación no se haya inscrito en el registro correspondiente no se la podrá tachar de secreta, sino que esta cualidad de clandestinidad vendrá dada por su opacidad de propósitos y actividades²⁴. Otro de los últimos aspectos que suscitan interés en cuanto al derecho de asociación en la CE, explican Alberich, T., Juana Minguez, A., Trías, C., Coordinadora de Asociaciones Culturales de Madrid, & Federación Española de Municipios y Provincias (2006), es el requisito de democracia interna en su funcionamiento. Los partidos políticos (art.6 CE), sindicatos (art.7 CE), colegios profesionales (art.36 CE) y organizaciones profesionales (art.52 CE) están obligados por la Constitución a gobernarse y organizarse según los estándares democráticos como consecuencia directa de la importancia social de la que gozan.

Ahora bien, ¿qué sucede con el resto de las asociaciones que no recaen en los tipos asociativos mentados? A *priori*, se podría concluir que la democracia interna no se aplica al resto de asociaciones en general como ha reiterado el Tribunal Constitucional (TC) en las STC 85/1986, de 25 de junio y STC 56/1995, de 6 de marzo. Sin embargo, a la luz del art.9.2 CE sobre el ejercicio de la libertad e igualdad de los individuos y los grupos parece razonable asumir que tales prerrogativas constitucionales gozaran de mayor flexibilidad en entornos asociativos democráticos (STS 6576/2011). Por último, la LA también enfatiza en el principio democrático para gobernar y organizar las asociaciones: “La LA

²² A modo de ejemplo, imagínese el caso de los profesionales de salud, quienes velan por bienes jurídicos de la mayor relevancia como podrían ser la integridad física y la vida en su quehacer diario debido a la actividad económica que ejercen.

²³ Art.515 CP: “Son punibles las asociaciones ilícitas teniendo tal consideración: 1º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promueva su comisión. 2º Las bandas armadas, organizaciones y grupos terroristas. 3º Las que, aun teniendo por objeto un fin ilícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad. 4º Las organizaciones de paramilitares. 5º Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de algunos de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad minusvalía, o inciten a ello”.

²⁴ En otras palabras, la formalidad de publicidad no determinará secreto alguno, sino que es el requisito material de los fines de la asociación el que condenará a la asociación como secreta.

encuadra el derecho del asociado a participar en la vida asociativa (artículo 21.a)) y el correlativo deber de la asociación de organizarse democráticamente para permitirlo. A este derecho básico de los asociados, el art. 21 acompaña el derecho del socio a ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno, de las cuentas y del desarrollo de la actividad asociativa, así como del derecho a ser oído y a defenderse en los procedimientos disciplinarios internos” (Canosa Usera, R. y González Escudero, A., 2011).

2.2. El derecho de asociación en el Código Civil

El CC también hace referencia a las asociaciones y fundaciones en varios preceptos. El art.28 CC se encarga de determinar la nacionalidad que el Derecho Privado estatal, conjuntamente con las normas supranacionales, otorga a este tipo de personas jurídicas²⁵. La doctrina, véanse Bustos Gómez-Rico, M., & España (2012), entiende que la nacionalidad de las personalidades jurídicas ha de ser entendida de manera analógica ya que, al contrario de lo que efectivamente sucede con las personas físicas, el propio factor de la nacionalidad no es un elemento integrable en el estado civil y, como consecuencia de ello, no es inscribible en el Registro Civil (Aranda Rodríguez, R. et al., 2013). Así, compréndase que *“El determinar que las personas jurídicas reconocidas por la ley y domiciliadas en España gocen de la nacionalidad española, es una consecuencia lógica del acto de la autorización, ya que no puede pensarse que una Autoridad española tenga atribuciones para dar nacimiento legal a una sociedad extranjera, ni siquiera fijando su domicilio en territorio español”* (Vázquez Iruzubieta, C., 2016). Y, en cuanto al desplazamiento de domicilio más allá de los confines del territorio español, Salas Carceller, A. (2009) defiende que mientras que la persona jurídica matriz siga estando domiciliada en España el domicilio de las subsidiarias no afectará a la nacionalidad española de la entidad. *“El principio que rige sus relaciones jurídicas es el de la territorialidad, basado en el domicilio”* (Vázquez Iruzubieta, C., 2016).

El art.35 CC recoge la identidad de las personas jurídicas en general (incluyendo a las asociaciones y fundaciones en tal categoría), y el nacimiento de su personalidad²⁶. La literatura sobre la tipicidad de personas jurídicas concluye que existen dos grandes tipos: personas jurídicas de existencia necesaria y personas jurídicas de existencia contingente. Tal distinción aparece expresada en el art.35 CC de manera implícita (Bercovitz Rodríguez-Cano, R., & España, 2013). En este contexto, las personas jurídicas necesarias son aquellas que tienen una especial relación con la actividad pública y la satisfacción de intereses eminentemente sociales y generales, puesto que entre ellas han de contarse tanto *“al Estado, como la principal, y luego las Comunidades Autónomas, las Cortes*

²⁵ *“Las corporaciones, fundaciones y asociaciones, reconocidas por la ley y domiciliadas en España, gozarán de la nacionalidad española, siempre que tengan el concepto de personas jurídicas con arreglo a las disposiciones del presente Código. Las asociaciones domiciliadas en el extranjero tendrán en España la consideración y los derechos que determinen los tratados o leyes especiales”.*

²⁶ *“Son personas jurídicas: 1.o Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas. 2.o Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados”.*

Generales, el Poder Judicial, el Gobierno y sus entidades dependientes con mayor o menor autarquía, la Iglesia, las Universidades, las Provincias, los Municipios y toda otra entidad estatal que por su finalidad o actividad propia tenga una existencia necesaria para cumplir con la finalidad global del Estado” (Vázquez Iruzubieta, C., 2016).

Ahora bien, en lo referente a las fundaciones y asociaciones privadas (no constituidas por el poder público) habrá de referirse a las denominadas personas jurídicas de existencia contingente; es decir, a *“las asociaciones que pueden tener carácter civil, mercantil o industrial, dice la ley, como si esta última especie ostentara una cualidad jurídica en el Derecho español. Su personalidad es independiente de la de los socios que la integran, como también su patrimonio, nombre y domicilio. Se rigen por sus Estatutos dados voluntariamente por sus creadores, y pueden o no perseguir finalidades lucrativas, salvo la simple asociación civil sin fines de lucro, que requiere para su constitución procedimientos especiales”* (Vázquez Iruzubieta, C., 2016). A su vez, el art.37 CC²⁷ se remite a las normas específicas con rango de ley para regular en detalle la capacidad legal de tales personas jurídicas. En esta línea, Paz-Ares Rodríguez, C. et al., 1993 apuntan que *“conforme al art.37 CC será la voluntad de los asociados o del fundador, debidamente manifestada, la que determina la capacidad de la asociación o de la fundación”*. Vázquez Iruzubieta, C. (2016) prosigue en este punto explicando que *“La capacidad civil a que el artículo hace referencia no indica solamente y ante todo la capacidad de goce sino la de ejercicio, indicando en cada caso el instituto jurídico donde radica el conjunto de atribuciones posibles de ejercicio que en el mundo de relación tienen”*.

Por su parte, en el art.38 CC²⁸, siguiendo a Díez-Picazo, L. y Gullón, A. (2013), se comprueba que las personas jurídicas se asimilan a las naturales en cuanto que pueden ser dueñas de derechos y obligaciones que han de satisfacer. Vázquez Iruzubieta, C. (2016) concluye que *“puesto que las personas jurídicas, sean legales o convencionales, están limitadas por los instrumentos propios de su creación, su actividad jurídica en la vida de relación debe adecuarse a estos Estatutos y reglamentos. Pero por principio, pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, contraer obligaciones y ejercitar todas las acciones civiles o criminales conforme a las leyes generales del país y especiales de su constitución”*. Expandiendo horizontes hacia otros derechos de la personalidad como el nombre o el honor entre muchos otros, Paz-Ares Rodríguez, C. et al. (1993) alertan de que *“si bien el art.38 CC refiere dicha capacidad fundamentalmente al ámbito patrimonial se entiende que en principio la capacidad de las personas jurídicas se extiende también a otros sectores, quedando excluidos aquellos derechos y relaciones que presuponen la existencia de una persona física”*.

²⁷ *“La capacidad civil de las corporaciones se regulará por las leyes que las hayan creado o reconocido; la de las asociaciones por sus Estatutos, y las de las fundaciones por las reglas de su institución, debidamente aprobadas por disposición administrativa, cuando este requisito fuere necesario”*.

²⁸ Clama que *“las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución. La Iglesia se regirá en este punto por lo concordado entre ambas potestades, y los establecimientos de instrucción y beneficencia por lo que dispongan las leyes especiales”*.

El art.39 es el penúltimo de los artículos del Código Civil que alude directamente a las asociaciones y fundaciones. Su contenido habla de la destinación de los bienes en un escenario muy concreto: la extinción de la personalidad jurídica²⁹. Las personas jurídicas del art.35.1 CC son las protagonistas de este precepto dado que se explica cuál es el destino que se le ha de dar a sus bienes una vez que la asociación o fundación en cuestión quede extinguida (Domínguez Luelmo, A., 2010). Así es que procede enumerar el trinomio que da lugar a la extinción de estas personas jurídicas (Paz-Ares Rodríguez, C. et al., 1993): “1) *Expiración del término para el que fue constituida, aunque tratándose de personas jurídicas de interés público es difícil que se dé esta circunstancia más, no imposible.* 2) *Realización del fin para el que fue creada porque en ese caso carece de interés el mantenerla en vigencia, como si se hubiera constituido para extinguir una enfermedad endémica que, con el tiempo, desaparece.* 3) *Por imposibilidad de alcanzar el fin para el que fue creada, como si se hubiera constituido para luchar contra el tráfico de una droga que luego se legaliza su consumo y venta*” (Vázquez Iruzubieta, C., 2016).

Y, finalmente, el art.41 CC (Título III: del domicilio) al decir que “*cuando ni la ley que las haya creado o reconocido ni los Estatutos o las reglas de fundación fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar en que se halle establecida su representación legal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto*” quiere demostrar que “*el domicilio de las personas jurídicas se determina del modo siguiente: 1) Por el lugar fijado en la ley de creación o en las reglas de sus Estatutos.* 2) *A falta de ello, por el lugar donde se halle establecida la representación legal (Dirección, Junta o Consejo).* 3) *En su defecto, por el lugar donde ejerzan sus principales actividades*” (Vázquez Iruzubieta, C., 2016).

2.3. La vigente Ley de Asociaciones

Hoy, la ley especial vigente en materia de asociaciones es la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (LA), sin olvidar la larga historia de este derecho desde 1869 hasta su regulación como derecho fundamental reconocido en el art.22 CE³⁰ (Gómez-Montoro, Á. J., 2004). A pesar de su antigüedad, nos se ha fomentado desde el poder legislativo la creación de asociaciones para contribuir al avance social del país. Es más, siempre se ha percibido cierta incomodidad desde los poderes estatales en cuanto a los movimientos asociativos se refiere (González Pérez, J., Fernández Farreres, G., & España, 2002). En palabras de Marín López, J. J. (1994), siempre ha existido un anhelo o incluso una obsesión desde los poderes públicos a la hora de tratar de controlar y tutelar el régimen asociativo y su campo de actuación. Como apunta Reverte Martínez, F. M. (2004) en relación a ese afán de control y tutela, la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones recogía preceptos que subrayaban la especial potestad de la

²⁹ Art.39 CC: “*Si por haber expirado el plazo durante el cual funcionaban legalmente o por haber realizado el fin para el cual se constituyeron, o por ser ya imposible aplicar a éste la actividad y los medios de que disponían, dejasen de funcionar las corporaciones, asociaciones y fundaciones, se dará a sus bienes la aplicación que las leyes, o los Estatutos, o las cláusulas fundacionales, les hubiesen en esta previsión asignado. Si nada se hubiere establecido previamente, se aplicarán esos bienes a la realización de fines análogos, en interés de la región, provincia o municipio que principalmente debieran recoger los beneficios de las instituciones extinguidas*”.

³⁰ Derecho fundamental de asociación protegido por recurso de amparo dado lugar en la CE.

administración pública para inmiscuirse en los ámbitos en los que juega el derecho de asociación³¹.

Volviendo a la actual LA, merece mencionarse su articulación: 42 preceptos, 4 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 4 disposiciones finales. Adicionalmente, y a título de peculiaridad jurídica, la LA integra “una dualidad de contenido material” (Reverte Martínez, F. M., 2004) dado que incluye por un lado los rasgos que definen al derecho fundamental de asociación, mientras que por otro lado también se preocupa de regular el régimen jurídico de las propias asociaciones como personas jurídicas (Anguita Villanueva, L. A., 2016). Delimitar donde empieza y acaba cada uno de estos elementos materiales en el binomio legislativo que supone la LA es tarea compleja; como el TC así lo constata³². Los artículos que configuran la LA se organizan en los siguientes apartados temáticos, como también así lo estipula Reverte Martínez, F. M. (2004) en su análisis de la cuestión: (i) Objeto, principios y ámbito de aplicación, (ii) Ámbito subjetivo de aplicación de la ley, (iii) La constitución de las asociaciones y su inscripción registral, (iv) Funcionamiento y órganos. Régimen de actividades y extinción de la asociación, y (v) Derechos y deberes de los asociados.

I. Objeto, principios y ámbito de aplicación

Los objetivos que contempla esta ley son: regular el derecho fundamental de asociación recogido en el art.22 CE y, plasmar los preceptos que han de ser aplicados a las asociaciones como personas jurídicas. El art.1 en sus apartados 2 y 3 esclarece el ámbito en el que se despliega la LA³³. De este ámbito de aplicación se sacan las siguientes conclusiones: en primer lugar, que el concepto de asociación será aquel en el que no haya fines lucrativos al que no aplique una ley específica (López, J., & de la Serrana, G., 2003). No obstante, hay que matizar que, aunque se aplique la ley específica a determinada asociación la LA suplirá las plausibles lagunas legislativas que puedan surgir; así lo establece la Disposición Final Primera. Y, en segundo lugar, que el trasfondo que se esconde detrás del ánimo lucrativo es ciertamente ambiguo puesto que no se especifica de manera clara lo que ello conlleva (Muro, I. T., 1999). Sin embargo, el art.13.2 LA

³¹ Véase: “1) La exigencia de autorización administrativa previa para la constitución de la asociación: ...“corresponderá al Gobernador, previos los informes que según la índole de la asociación sean preceptivos en cada caso, dictar por escrito resolución motivada decidiendo acerca de la licitud y determinación de los fines...”. 2) El control previo gubernativo para las reuniones de la Asociación: “Las Asociaciones regidas por esta Ley deberán comunicar al Gobernador Civil de la provincia, con setenta y dos horas de antelación, la fecha y hora en que hayan de celebrarse las sesiones generales”. 3) El acceso de los representantes de la autoridad a las reuniones y libros de la asociación: “...la autoridad gubernativa tendrá acceso, por representantes especialmente designados, al local en que se celebren las reuniones y a los libros que se lleven en las Asociaciones...”. 4) El derecho de la Administración a suspender las actividades de la asociación, e incluso a disolverlas: “Las mismas autoridades podrán decretar la suspensión de las Asociaciones sometidas al ámbito de esta ley, por plazo no superior a tres meses, cuando no atemperen su funcionamiento a lo dispuesto en la misma”.

³² Ejemplo de ello es la STC 173/1998, de 23 de julio de 1998 sobre la Ley de Asociaciones Vasca.

³³ “2. El derecho de asociación se regirá con carácter general por lo dispuesto en la presente Ley Orgánica, dentro de cuyo ámbito de aplicación se incluyen todas las asociaciones que no tengan fin de lucro y que no estén sometidas a un régimen asociativo específico. 3. Se regirán por su legislación específica los partidos políticos; los sindicatos y las organizaciones empresariales; las iglesias, confesiones y comunidades religiosas; las federaciones deportivas; las asociaciones de consumidores y usuarios; así como cualesquiera otras reguladas por leyes especiales. Las asociaciones (...) religiosas por las iglesias, confesiones y comunidades religiosas se regirán por lo dispuesto en los tratados internacionales y en las leyes específicas, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las disposiciones de la presente Ley”.

concreta que el ánimo no lucrativo significa que: *“Los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de actividades económicas, (...) deberán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados (...), ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo”*.

El art.1.4 LA matiza en consecuencia que todas las asociaciones de personas cuyo objetivo sea el lucro económico (las personas jurídicas mercantiles) estarán fuera del ámbito de aplicación estipulado en la LA (Villarroya, A. A., 2008). En este sentido, la STC 5/1996 explica las disparidades *“entre las sociedades civiles y mercantiles, sometidas, según su particular forma jurídica, a regímenes jurídicos diversos, de aquellas otras asociaciones –como la ahora actora– que persiguen fines extra commercium y cuya naturaleza es completamente distinta”*. Por su parte, la STC 218/1989 ya citada diserta que cuando un sujeto se adhiere a los Estatutos de una asociación también está acordando implícitamente su conformidad con la moralidad de la misma. Y, en este sentido, el ánimo de lucro es un factor ciertamente diferencial (García Inda, A., 2003). Finalmente, respecto a las similitudes y diferencias entre las asociaciones sin ánimo de lucro (LA) y las personas jurídicas de carácter mercantilista (Gómez Gil, C., 2005) hay que subrayar que la Exposición de Motivos de la LA ayuda a comprender *“que el art.22 de la Constitución puede proyectar, tangencialmente, su ámbito protector cuando en este tipo de entidades se contemplen derechos que no tengan carácter patrimonial”*. A colación de este art.22 CE, Reverte Martínez, F. M. (2004) considera que es *“interesante reseñar que otros ordenamientos jurídicos han reconocido esta (...) extensión de algunos aspectos de los efectos protectores del derecho de asociación a entidades mercantiles”*³⁴.

Los principios que se aplican a la LA se desarrollan en su art.2, que regula el contenido del derecho fundamental recogido en el art.22 CE. De esta suerte se esclarece el doble sentido del derecho de asociación (Font, J., Gibert, J. R. M., & Lorient, M. T., 2006): en primer término, se puede definir como el derecho de asociación libre y voluntario en sentido positivo, pero también en sentido negativo. Esto es, se reconoce el derecho de asociación positivo en los arts.2.1 y 2.2 LA clamando la libertad de *“asociarse o crear asociaciones, sin necesidad de autorización previa”* siempre que se anhele *“la consecución de fines lícitos”*. Y, el art.2.3 LA representa la faceta complementaria de este derecho: la potestad y libertad *“a constituir una asociación, a integrarse en ella o a permanecer en su seno, ni a declarar su pertenencia a una asociación legalmente constituida”*. Desde la perspectiva de Reverte Martínez, F. M. (2004), existen unos principios necesarios dentro de la LA en lo referente a la constitución, organización y funcionamiento de las asociaciones que pueden ser categorizados en dos bloques: *“(i) Para el ejercicio del derecho de asociación, la Constitución, la Ley Orgánica y el resto*

³⁴ Así, en Italia, la doctrina dominante considera que el art.18 de su Constitución (análogo al 22 nuestro) es aplicable a las sociedades mercantiles y en la República Federal Alemana, en base a su Ley Fundamental, tanto la doctrina como el Tribunal Constitucional Federal han considerado en diversos aspectos aplicable a las sociedades mercantiles la Ley de Asociaciones. En referencia a esto último véase STC 148/1987 en la que el Tribunal Constitucional reconoce tal escenario en función que caso.

del O. Jurídico, como marco legal. (ii) Para la organización y funcionamiento interno, que se inspirarán en el principio de la democracia y el pleno respeto al pluralismo, los Estatutos plasmarán el derecho de autoorganización de las asociaciones y no podrán desconocer los aspectos esenciales del derecho fundamental de asociación". En este segundo bloque se puede hacer remisión a la STC 104/1999 para reflejar la importancia de que la asociación sea acorde a la CE, pero también al resto de leyes que desarrollen el derecho de asociación³⁵ (Cabrero, G. R., & Carpio, C. C., 2003).

II. Ámbito subjetivo de aplicación de la ley

¿Quién puede crear asociaciones y ser parte de las mismas? La respuesta a esta pregunta es realmente amplia puesto que tanto las personas físicas como las personas jurídicas tendrán tal capacidad (De Salas Murillo, S., 1996). Sin embargo, existen ciertas limitaciones para estas personas. Así, las personas físicas deberán tener la completa capacidad de obrar (arts.30 y 322 CC); con la excepción de los menores de edad en las asociaciones infantiles, juveniles o de alumnos (Berenguer Martínez, J. F., & Reverte Martínez, F. M., 1997) del art.7.2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor³⁶. Además, ciertas personalidades del Estado que gozan de especial relevancia (Aguiar de Luque, L. & Elvira Perales, A., 1996-1999), como pueden ser los miembros de las fuerzas armadas, los jueces y magistrados o los fiscales también tendrán que atenerse a la regulación específica que las regula³⁷.

Por otro lado, las personas jurídicas también tienen ciertas limitaciones en cuanto al derecho fundamental del art.22 CE se refiere (Bustos Gómez-Rico, M., & España, 2012). Quizá el obstáculo principal sea la necesidad de que los órganos internos que componen el organismo asociativo se pongan de acuerdo para crear la asociación o tomar decisiones que la involucren. De lo expuesto en el art.7.1.h LA se deduce que los Estatutos suponen la llave obligatoria para abrir la puerta de las decisiones que afecten a la asociación³⁸. En cuanto al organismo asociativo responsable de tales decisiones, Reverte Martínez, F. M. (2004) considera que *"inicialmente la Asamblea General será el órgano competente para la adopción de acuerdos para constituir asociaciones, o vincularse a federaciones, aunque en nuestra opinión cabe la posibilidad de que el órgano competente para adoptar este tipo de acuerdos fuera el órgano de representación previsto en el art.11.4 (LA), si los Estatutos así lo contemplan"*. Este art.11.4 LA habla del funcionamiento interno de las asociaciones y de la representación y gestión de sus intereses³⁹. Al respecto, merece

³⁵ Como establece el art.22 de la C.E., serán ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios delictivos (art.2.7), estando prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar (art.2.8).

³⁶ "a) El derecho a formar parte de asociaciones y organizaciones juveniles de los partidos políticos y sindicatos, de acuerdo con la Ley y los Estatutos. b) El derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles e inscribirlas de conformidad con la Ley. Los menores podrán formar parte de los órganos directivos de estas asociaciones".

³⁷ Ej: Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, LOPD, Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

³⁸ Piénsese en la creación de personas jurídicas o en decisiones similares.

³⁹ Art.11.4 LA: "Existirá un órgano de representación que gestione y represente los intereses de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Sólo podrán formar parte del órgano de representación los asociados. Para ser miembro de los órganos de representación de una asociación, sin perjuicio de lo que establezcan sus respectivos Estatutos, serán requisitos indispensables: ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente".

mencionarse el particular caso de las fundaciones (Alli Turrillas, J., 2010), para las que habrá que tenerse como Asamblea General u órgano de representación al Patronato en su conjunto. En el art.22.3 LF se recoge que la decisión individual de un patrono de manera individual carecerá de fuerza suficiente; habrá de ser el Patronato en su conjunto quien se pronuncie para que la decisión goce de la fuerza suficiente que se requiere para crear otra persona jurídica. Y, como última referencia, valga decir que las personas jurídicas de cariz administrativo (entidades públicas) también podrán tener el derecho de asociación del art.22 CE siempre y cuando este se permita en sus leyes especiales de creación y desarrollo (De Salas Murillo, S., 1996). El art.3.g) LA dicta que *“Las personas jurídico-públicas serán titulares del derecho de asociación en los términos del artículo 2.6 de la presente Ley, salvo que establezcan lo contrario sus normas constitutivas y reguladoras”*. Si bien debe haber un necesario equilibrio entre personas jurídicas públicas y personas físicas particulares (art.2.6 LA).

III. La constitución de las asociaciones y su inscripción registral

A la hora de crear una asociación según la normativa española vigente es necesario elaborar el Acuerdo de Constitución, el Acuerdo Fundacional (ver anexo E), los Estatutos que se quieren registrar (ver anexo F) y, finalmente la inscripción de la asociación (ver anexo G) en el Registro de Asociaciones oportuno (Perales, A., & Elvira, A., 2008). En primer lugar, el Acuerdo de Constitución supone, según el art.5.1 LA: *“acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular, y se dotan de los Estatutos que rigen el funcionamiento de la asociación”*. Además, será pertinente que este Acuerdo de Constitución recoja los Estatutos ya aprobados y que se formalice *“mediante acta fundacional, en documento público o privado”* (véase el art 5.2 LA). Tras este último paso se puede considerar que la asociación goza de personalidad sin necesidad de registro previo (López Noguero, F., 2002). Ahora bien, siguiendo los art.10.1 y 10.2 LA, la inscripción es obligatoria a meros efectos de publicidad y también para garantía con respecto a sus miembros y terceras partes con las que la asociación se relaciona. De lo expuesto en este párrafo se entiende que *“El nacimiento de la asociación arranca con el otorgamiento del Acta Fundacional, sin perjuicio de la responsabilidad de inscripción de los promotores de la asociación”* (Reverte Martínez, F. M., 2004). En segundo término, el Acuerdo Fundacional ya tratado habrá de incorporar los datos básicos del art.6.1 LA⁴⁰ para justificar la veracidad de la asociación como personalidad jurídica real. El Acta Fundacional, recuerda España (2013), tendrá que entregarse con la *“certificación del acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente”* para las personas jurídicas; y, para el supuesto de las personas físicas será pertinente adjuntar la mera *“acreditación de su identidad”* (art.6.2 LA).

⁴⁰ “a) El nombre y apellidos de los promotores de la asociación si son personas físicas, la denominación o razón social si son personas jurídicas, y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio. b) La voluntad de los promotores de constituir una asociación, los pactos que, en su caso, hubiesen establecido y la denominación de ésta. c) Los Estatutos aprobados que regirán el funcionamiento de la asociación, cuyo contenido se ajustará a las prescripciones del artículo siguiente. d) Lugar y fecha de otorgamiento del acta, y firma de los promotores, o de sus representantes en el caso de personas jurídicas. e) La designación de los integrantes de los órganos provisionales de gobierno”.

Por otro lado, los Estatutos son un elemento crucial para constituir y registrar la personalidad jurídica puesto que representan la *norma normarum* de auto-organización interna de la asociación (Orozco, J. D., & Núñez, C. R., 2013). Los arts.7, 8 y 9 LA indican los extremos mínimos que habrán de ser incluidos en los Estatutos. Dichos preceptos recopilan un conglomerado de datos que pueden ser categorizadas en cuatro bloques principales: “a) *Datos básicos de identidad de la asociación: denominación (art.8), domicilio (art.9), ámbito territorial, duración y actividades (detallados de forma precisa).* b) *Sobre los asociados: Será contenido necesario de los Estatutos, los requisitos de admisión y baja, procedimientos de sanción y separación, y derechos y obligaciones de los asociados. También podrán incluir, en su caso, posibles clases de asociados, y consecuencias del impago de las cuotas.* c) *Organización y funcionamiento: criterios democráticos; órganos de gobierno y representación; reglas electorales; cargos, funciones, atribuciones, y formas de adopción y ejecución de acuerdos.* d) *Administración y Patrimonio: Contabilidad, documentación y administración; cierre del ejercicio asociativo; patrimonio inicial y previsión de recursos; causas de disolución y destino del patrimonio*” (Reverte Martínez, F. M., 2004). Además de estos extremos mínimos, Durán Rivacoba, R., & Reina Tartièrre, G. (2004) esclarecen que los Estatutos de la asociación tendrán que recoger una “*válvula de escape*” (art.7.2 LA) para otorgar mayor libertad y flexibilidad al contenido que puede ser incluido en los Estatutos⁴¹. Percátase, en última instancia, que los Estatutos podrán ser modificados como así lo establece el art.16 LA, mediante dos vías diferentes: una más rigurosa y controlada que cuando se pretenda modificar los datos previstos en el art.7 LA (extremos mínimos obligatorios) y, una más flexible que se aplica al resto de modificaciones estatutarias.

Una vez constituida la asociación es el momento de acudir al Registro de Asociaciones que corresponda y proceder con la inscripción (ver anexo H). En el art.10 se desarrolla la necesidad de inscripción registral para las asociaciones⁴² y se señalan las consecuencias (Pallarés Rodríguez, R., 2004):

- Publicidad: el art.10.1 LA permite obtener el efecto de publicidad a todas aquellas asociaciones que se registren. Esto es, se concede seguridad jurídica de las situaciones y relaciones jurídicas de la asociación que ha sido inscrita en el Registro de Asociaciones (perspectiva estática) y una seguridad en el tráfico jurídico de la asociación (perspectiva dinámica) justificada por su inscripción.
- Garantía: el art.10.2 LA explica que la inscripción sirve de garantía para terceros y también para los miembros de la asociación porque, si no se procede a inscribir la asociación (art.10.3) la responsabilidad de los actos de las asociaciones no inscritas recaerá sobre los miembros de la misma asociación de modo personal y solidario⁴³.

⁴¹ “Los Estatutos también podrán contener cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que los promotores consideren convenientes, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores de la asociación”.

⁴² Nótese que existe la salvedad de los arts.30.3 y 30.4 LA para las asociaciones que no satisfagan los mínimos necesarios de la LA.

⁴³ “En tal caso, los asociados responderán solidariamente por las obligaciones contraídas por cualquiera de ellos frente a terceros, siempre que manifestasen actuar en nombre de la asociación” (art.10.4 LA).

Aparte de estos dos efectos, la inscripción registral acarrea otras consecuencias en virtud del art.30 LA que merecen ser desarrolladas: “– *El efecto positivo del silencio administrativo en este caso, ya que si no hay respuesta transcurridos 3 meses desde la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro, se entenderá estimada la solicitud.* – *La limitación de la actividad de la Administración a la verificación del cumplimiento de los requisitos del acta fundacional y Estatutos.* – *Cuando se adviertan defectos formales en la solicitud o documentación, o coincidencia en la denominación, se suspenderá el plazo para proceder a la inscripción y se abrirá el de subsanación de los defectos advertidos*” (Reverte Martínez, F. M., 2004).

No se puede cerrar este epígrafe sin antes hablar sobre el Registro Nacional de Asociaciones (Cabanas Trejo, R., Prats Albentosa, L., & Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, 2009). El art.25 LA⁴⁴ esclarece cuáles son las asociaciones que habrán de ser inscritas en el mismo en detrimento de los registros autonómicos⁴⁵ y también se preocupa de llevar un “*fichero de denominaciones*” (art.25.3 LA) para evitar semejanzas y/o duplicidades de asociaciones en los diferentes niveles de la organización territorial estatal: Registro Nacional vs. Registros Autonómicos (Martos, J. A. M., 1996).

IV. Funcionamiento y órganos. Régimen de actividades y disolución de la asociación

Como ya se ha dicho, existen unos órganos encargados de gestionar y normativizar el funcionamiento de la asociación (STS 663/2013)⁴⁶. Los órganos que se ven envueltos en el funcionamiento de la asociación, dice el art.11 LA, son principalmente dos: la Asamblea General y el órgano de representación y gestión (ver anexo I). La Asamblea General continua el art.11.3 LA “*es el órgano supremo de gobierno de la asociación, integrado por los asociados, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna y deberá reunirse, al menos, una vez al año*”. En este sentido, no se establece una lista *numerus clausus* de las funciones de la Asamblea General, como tampoco se detallan las tareas principales que el órgano de gestión y representación habrá de desempeñar. Los Estatutos serán los encargados de recoger las actividades y funciones que correspondan a estos dos órganos. No obstante, se puede asegurar que incluso sin la precisión de contenido que puedan aportar los Estatutos sí que existen una serie de funciones que corresponderán de manera inevitable y compulsoria a la Asamblea General (Anguita Villanueva, L. A., 2016): la aprobación de las cuentas anuales del art.14.3 LA, la modificación estatutaria que afecte al contenido mínimo de los Estatutos recogidos en el art.7 LA (art.16.1 LA), las retribuciones de los miembros del órgano de gestión y representación del art.11.5 LA que tendrán que ser incluidas en las cuentas anuales aprobadas a la par que en los Estatutos y, en último término, la disolución de la asociación por las causas previstas en los Estatutos, acuerdo de los asociados, causas del art.39 CC y por sentencia judicial firme (art.17.1 LA). Consecuencia directa de la disolución de la

⁴⁴ “a) *Asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito estatal y todas aquéllas que no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma.* b) *Asociaciones extranjeras que desarrollen actividades en España, de forma estable o duradera, que deberán establecer una delegación en territorio español*”.

⁴⁵ En este sentido véase el art.27 LA sobre cooperación y colaboración entre Registros.

⁴⁶ Recuérdese el principio de auto-organización interna.

asociación, continua el art.17.2 LA, se determinará el destino del patrimonio conforme a los Estatutos. Tal tarea, rescata Guerrero, E. C. (2015), corresponderá de igual manera a la Asamblea General mediante acuerdo por mayoría cualificada (art.12.d).

La actual regulación sobre los organismos de las asociaciones es algo parca a la vez que simplista a los ojos de parte de la doctrina dado que cuando se estudia en paralelo la normativa autonómica se dejan ver imprecisiones y generalidades que deberían ser atajadas (Elvira Perales, A., 2008). Tanto es así que, a modo de ejemplo, la Ley catalana de asociaciones detalla detenidamente las funciones y competencias de la Asamblea General, mientras que en la LA no se precisa tan detalladamente la regulación de este organismo dentro de la asociación (STC 135/2006). Por otra parte, el régimen de actividades que pueden ser desempeñadas por la asociación viene de manera genérica determinado por el art.13.1 LA: *“las asociaciones deberán realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de sus fines”*. Lo que significa que las actividades de la asociación, recogidas en los Estatutos de manera precisa (art.7.d LA) tenderán siempre a la consecución de los objetivos que dan sentido a la propia asociación (González Pérez, J., Fernández Farreres, G., & España., 2002). En relación con el rango de actividades disponible para la asociación hay recalcar que podrán ser de carácter económico. Aunque de primeras esta idea pueda parecer contra-intuitiva, las asociaciones que realicen actividades de carácter económico para lograr la culminación de sus fines estatutarios estarán legitimadas siempre que no se proceda a la división de ganancias derivada de la actividad económica en cuestión (Senent Vidal, M. J., & Fajardo García, G., 2006). El art.13.2 LA se encarga de desarrollar el especial perfil de estas actividades económicas: *“Los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados, (...) ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo”*. Estas actividades económicas deberán incluirse en lo que el art.14 LA denomina *“obligaciones documentales y contables”*. Además, otras facetas de la asociación deberán compilarse en estas obligaciones documentales y contables⁴⁷. La principal característica, desde un ángulo de transparencia, es que *“Los socios podrán acceder a toda la documentación de la Asociación, a través de los órganos de representación, en los términos previstos en la Ley de Protección de Datos de carácter personal”* (Reverte Martínez, F. M., 2004).

Finalmente, hemos de hablar sobre el posible escenario de disolución de las asociaciones (ver anexo J). El art.17.1 LA dispone las causas para la disolución de las asociaciones⁴⁸. El precepto desarrolla una lista de causas, empezando con los Estatutos y el acuerdo expreso de la Asamblea General; manifestación clara del principio de la autonomía de la voluntad. Y, por otro lado, la norma habla de *“Si por haber expirado el plazo durante el*

⁴⁷ - Lista actualizada de los miembros de la asociación o asociados. - Inventario de bienes afectos a la asociación y sus actividades. - Actas de las reuniones de la Asamblea General y de los órganos de representación y gestión. - Contabilidad que refleje fielmente el patrimonio, los resultados y las actividades con sus partidas de gastos. Estas cuentas habrán de ser aprobadas anualmente en la Asamblea General.

⁴⁸ *“Las asociaciones se disolverán por las causas previstas en los Estatutos y, en su defecto, por la voluntad de los asociados expresada en Asamblea General convocada al efecto, así como por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil y por sentencia judicial firme”*.

cual funcionaban legalmente o por haber realizado el fin para el cual se constituyeron, o por ser ya imposible aplicar a éste la actividad y los medios de que disponían, dejasen de funcionar” como potenciales causas de disolución de carácter finalista haciendo referencia al art.39 CC. Como ultima causa de disolución se nombra la sentencia judicial firme que pueda recaer en tal sentido; esta es una causa externa a diferencia de las anteriores. Una vez se decide disolver la asociación el art.18.1 LA declara la necesidad de proceder con la liquidación; el *iter* establecido para terminar definitivamente con la personalidad jurídica de la asociación. Hasta que la asociación no quede completamente liquidada mantendrá la personalidad jurídica, solo cuando la liquidación haya sido completada la personalidad jurídica se desvanecerá (Arguedas, R., González, J., & Oliver, M., 2001). Los ejecutores de la liquidación (“*liquidadores*”) serán los miembros del órgano de representación⁴⁹ sus funciones son eminentemente financieras según el art.18.3 LA⁵⁰. En el peor de los casos ante la insolvencia de la asociación, destaca Anguita Villanueva, L. A. (2016), los liquidadores “*promoverán (...) el oportuno procedimiento concursal ante el juez competente*” (art.18.4 LA).

V. Derechos y deberes de los asociados

El derecho primordial de los individuos que se asocian es el de integración en la propia asociación del art.19 LA. Este derecho de integración en la asociación ha de ser libre y voluntario respetando los requisitos que marquen los Estatutos (González Pérez, J., Fernández Farreres, G., & España, 2002). La otra cara del derecho de integración es el derecho de separación de la asociación del art.23 LA⁵¹ con igual carácter libre, voluntario (STS 2168/2012, libertad de expresión) y en el momento que se desee (Martín Huertas, A., & España, 2009).

Entre estos dos extremos, que ponen comienzo y fin a la relación del asociado con la asociación, aparecen derechos que pueden ser ejercitados por los asociados. Tales derechos son los del art.21 LA y pueden ser organizados “*en cuatro grandes áreas, que serían: derecho de participación activa, de información, de garantías disciplinarias y de impugnación*” (Reverte Martínez, F. M., 2004).

- Participación activa (art.21.1 LA): “*en las actividades de la asociación y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, y a asistir a la Asamblea General, de acuerdo con los Estatutos*” (STS 1641/2017, anula de acuerdos sin particip.).
- Información (art.21.2 LA): “*composición de los órganos de gobierno y representación de la asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad*”.
- Garantías disciplinarias (art.21.3 LA): “*ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias y ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción*” (STS 967/2016).

⁴⁹ A no ser que, como dicta el art.18.2 LA, “*los Estatutos establezcan otra cosa o bien los designe la Asamblea General o el juez que, en su caso, acuerde la disolución*”.

⁵⁰ “*a) Velar por la integridad del patrimonio de la asociación. b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas, que sean precisas para la liquidación. c) Cobrar los créditos de la asociación. d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores. e) Aplicar los bienes sobrantes de la asociación a los fines previstos por los Estatutos. f) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro*”.

⁵¹ El asociado tendrá derecho a percibir sus aportaciones económicas del mismo modo que establezcan los Estatutos (art.23.2 LA).

- Garantías de impugnación (art.21.4 LA): “*impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estime contrarios a la ley o a los Estatutos*” (STS 116/2017, *status socio*). Paralelamente, el art.22 LA reconoce los deberes a cumplir por los miembros de la asociación. Éste recoge unas obligaciones generales que, en palabras de Reverte Martínez, F. M. (2004), “*básicamente son los (deberes/obligaciones) de compartir los fines y objetivos de la asociación, y cumplir las obligaciones fijadas por la entidad en los Estatutos o en otros acuerdos válidamente adoptados*” (STS 2137/2016).

Capítulo 3. LA ONG COMO FUNDACIÓN

3.1. El derecho fundamental de fundación

La Constitución Española (CE) de 1978 menciona en el Título I. De los derechos y deberes fundamentales, capítulo segundo, Sección 2.^a De los derechos y deberes de los ciudadanos varias consideraciones sobre el concepto de derecho de fundación. El artículo 34 CE reconoce el derecho a constituir fundaciones que tengan como objetivo lograr la consecución de fines de interés general (De Luna, M. A. C., 2003). Este derecho ciudadano viene regulado por la LF, una norma de rango legal. La propia CE reconoce en el segundo apartado del art.34 CE que los apartados 2 y 4 del artículo 22 sobre asociaciones se aplicarán de igual manera a las fundaciones⁵². Este artículo es considerablemente disruptivo ya que no venía regulado en ningún texto constitucional español anterior a 1978. Como explican Ruiz-Navarro, J.L., Sieira, S. y Rastrollo, A. (2017), *“Hasta ese momento, la fundación venía recogida en el artículo 35 del Código Civil como una prolongación de la libertad individual, por la que los particulares tienen la posibilidad de vincular bienes, constituyendo una organización a la que el ordenamiento jurídico reconoce una personalidad independiente, en atención al patrimonio que la conforma”*. Al contrario de lo que sucedía con el derecho de asociación del art.22 CE, el derecho de fundación no tiene aparejado el recurso de amparo en cuanto al ejercicio de la tutela judicial efectiva se refiere, a pesar de que también sea considerado como un derecho fundamental perfecto (Piñar Mañas, J. L., 1996). La incursión del derecho de fundación en la batería de derechos constitucionales denominados como fundamentales supone una *“garantía de instituto”*, apodado por la doctrina más activa en esta cuestión (entre los autores destacados aparecen Aguiar de Luque, L., Bilbao Ubillos, J. M., Elvira Perales, A., Gómez Montoro, A. J., Lucas Murillo de la Cueva, E., y Martín Huertas, Ascensión). Lo cual quiere decir que el legislador tendrá la facultad de hacer las modificaciones que estime adecuadas para actualizar el derecho en función de las necesidades sociales que surjan, pero sin poder modificar el contenido básico del derecho debido al art.53.1 CE (García-Andrade Gómez, J., 2001).

La definición de fundación que otorga la CE deja de lado a todas aquellas fundaciones que no persigan fines de interés general. De este modo, se excluyen *“figuras como la fundación-empresa que en sus distintas modalidades constituye una de tantas importaciones de la doctrina alemana a nuestro derecho y que no encaja en el concepto de fundación protegido por este artículo 34”* (Ruiz-Navarro, J.L., Sieira, S. y Rastrollo, A., 2017). Para mayor nivel de detalle, veamos la definición que elabora el TC en la STC 49/1988, donde se afirma que el origen de la fundación debe ser la destinación de ciertos bienes por parte del sujeto fundador para ayudar a cubrir un fin de interés general para la sociedad. Para ello, es necesaria la actuación de la acción administrativa, mediante el denominado *“Protectorado”* para garantizar que dicha dotación se emplea

⁵² Recuérdese que estos dos apartados hablan de los fines y medios ilícitos, y de la disolución o suspensión por resolución judicial motivada, respectivamente.

efectivamente en la consecución del fin de interés general que dio origen a la fundación y que además se satisfacen las constricciones legales atribuibles al régimen fundacional (Alli Turrillas, J., 2010). Es por ello que la STC 49/1988 continúa: la fundación *"es una manifestación más de la autonomía de la voluntad respecto de los bienes, por cuya virtud una persona puede disponer de su patrimonio libremente, dentro de los límites y con las condiciones legalmente establecidas"*⁵³. Siguen Ruiz-Navarro, J.L., Sieira, S. y Rastrollo, A. (2017) confirmando que *"la jurisprudencia del Tribunal Constitucional afirma que, el hecho de que esta materia (derecho de fundación) no figure en los listados competenciales de los arts.148.1 y 149.1 CE, no puede llevar a considerar el art.34 CE como una norma atributiva de competencias. En cambio, las fundaciones sí se recogieron desde fecha temprana en varios Estatutos de Autonomía, que proclamaron la competencia sobre las mismas de las respectivas Comunidades Autónomas"*.

A pesar de todo ello, el Estado ostenta ciertas competencias en la materia fundacional gracias a las coberturas que otorgan los arts.149.1.1º, 149.1.6º, 149.1.8º y 149.1.14º en lo concerniente a las condiciones básicas de igualdad, legislación procesal, legislación civil y régimen fiscal; respectivamente (García-Andrade, J., 1997). Significa que las Comunidades Autónomas podrán legislar el régimen fundacional en su territorio siempre y cuando se atengan a las competencias exclusivamente estatales ya nombradas. Finalmente, y siguiendo con el Estado como protagonista, hay que resaltar que las AAPP ostentan también el derecho de crear fundaciones en virtud del artículo 103.1 CE para cumplir con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación para el desarrollo de sus actividades y el gobierno de su organización (Moreno Fuentes, R., 2000). El art.34 no les es de aplicación en este contexto a las administraciones públicas. *"Las fundaciones del sector público constituyen, pues, personificaciones instrumentales que adoptan dicha forma fundacional para la tutela de los intereses públicos que la Administración tiene normativamente encomendados"* (Ruiz-Navarro, J.L., Sieira, S. y Rastrollo, A., 2017)., prueba de ello es la STC 120/2011.

3.2. El derecho de fundación en el Código Civil

El derecho de fundación se regula en el Código Civil de manera análoga al derecho de asociación. Por esta razón, hay que remitirse al capítulo *"2.2. El derecho de asociación en el Código Civil"* de este trabajo⁵⁴.

3.3. La vigente Ley de Fundaciones

A día de hoy, la ley especial vigente es la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (LF), aunque el derecho de fundación goza de larga historia en el sistema jurídico español. A modo de apunte, cabe destacar que los primeros trazos datan de finales siglo XIX y principios del siglo XX (Alli Turrillas, J., 2010). No obstante, tales normas resultaron vagas e incluso contradictorias puesto que el propio concepto de fundación aún

⁵³ La jurisprudencia constitucional prosigue con el mismo racional en reiteradas ocasiones como se vislumbra en las STC 341/2005, STC 120/2011, y STC 98/2013.

⁵⁴ Es decir, los arts.28, 35, 37-39 y 41 CC normativizan simultáneamente el derecho de fundación y asociación.

no estaba del todo definido y por ello tuvo que esperarse hasta la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general para entender armonizada y unilateralmente el concepto de fundación. Dicha ley da lugar a un consenso doctrinal más asentado; valga nombrar a Díez-Picazo, L., & Gullón, A. (2001) y su caracterización jurídica de la fundación: “*una organización creada libremente, con un patrimonio propio y distinto del de su fundador, destinado por voluntad de éste a la consecución de fines de interés general. La afectación patrimonial ha de ser duradera, es decir, estable, pero no se impone la perpetuidad*”. El TC reconoce la relevancia de la opinión doctrinal al establecer en su STC 49/1988 “(el art.34 CE) se refiere sin duda al concepto de fundación admitido de forma generalizada entre los juristas y que considera la Fundación como la persona jurídica constituida por una masa de bienes vinculados por el fundador o fundadores a un fin de interés general”⁵⁵.

Volviendo a la actual LF actual en vigor, merece mencionarse su articulación: 46 preceptos, 8 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 5 disposiciones finales. Los extremos que configuran la LF se organizan de manera comprensible en los siguientes apartados temáticos: (i) Objeto y concepto de fundación, (ii) Ámbito subjetivo de aplicación de la ley, (iii) La constitución de las fundaciones y su inscripción registral, (iv) Dotación y patrimonio de la fundación, y (v) Funcionamiento y órganos. Régimen de actividades y extinción de la fundación.

I. Objeto y concepto de fundación

El objeto que motiva esta ley es regular el derecho fundamental de fundación del art.34 CE, y señalar los preceptos que han de aplicarse a las fundaciones como personas jurídicas, además de regular específicamente las fundaciones de competencia estatal. Así queda establecido en el art.1 LF. A colación de esto último, Tomás y Valiente, F. (1995) reflexiona sobre lo que el legislador deseó comunicar en relación a las fundaciones de competencia estatal: “*No entiendo bien qué se quiere significar con la expresión (Los restantes preceptos de la ley serán de aplicación a las fundaciones de competencia estatal). (...) en ciertos aspectos de su regulación, por ejemplo, los comprendidos en el título competencial del 149.1.1, todas las fundaciones son de competencia estatal y del mismo modo para todos los españoles o en todo el Estado. Los otros títulos competenciales estatales invocados por el legislador demuestran que (...) también son de competencia estatal todas las fundaciones (...) Más bien habrá querido referirse el legislador a que los restantes preceptos, esto es, los no protegidos por títulos competenciales estatales específicos, sólo serán aplicables a las fundaciones respecto a las cuales no tengan títulos competenciales ninguna Comunidad Autónoma*”.

Otro punto de extraordinaria relevancia es el concepto de fundación, recogido en el art.2 LF, pues será el que condicionará la aplicación de la LF a las personalidades jurídicas que caigan dentro de este concepto. Más concretamente, el art.2.1 LF esclarece la definición

⁵⁵ Antes de continuar con el análisis legislativo, merece recordarse que el derecho de fundación supone desde 1978 un derecho fundamental reconocido en el art.34 CE.

de fundación dictando que: “1. Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general”. El acto que da sentido a esta definición es el negocio jurídico fundacional, entendido como “la declaración o acuerdo de voluntades, con que los particulares se proponen conseguir un resultado, que el Derecho estima digno de especial tutela, sea en base sólo a dicha declaración o acuerdo, sea completado con otros hechos o actos” (De Castro y Bravo, F., 1985) o “la declaración de voluntad no recepticia e irrevocable de constituir una fundación, dotándola bienes con que cumplirá su fin” (Raposo Arceo, J.J., 1999).

El concepto de fundación posee tres características propias en la LF: “sin fin de lucro”, “afectación de patrimonio”, y “fin de interés general”.

- “Sin fin de lucro”: las fundaciones tienen permitido realizar actividades económicas que las permitan subsistir (art.26 LF)⁵⁶. Esto quiere decir que si existiesen beneficios al final de cada ejercicio fiscal los socios de la fundación no tendrán la potestad de proceder a la división y consecuente reparto de ganancias. Esta postura es también defendida por la doctrina, como vemos en García Añoveros, J. (1997) cuando explica que “la actuación de las entidades sin fin de lucro se produce no sin lucro, sino sin fin de lucro o de modo que éste no sea destinado a ningún tipo de satisfacción personal”. Siguiendo este mismo razonamiento, el art.27 LF destina las rentas e ingresos que pudiera tener la fundación a la consecución de los fines de interés general que dan sentido a la existencia de la fundación y, también, al aumento de reservas o de la dotación.

- “Afectación de patrimonio”: una lectura rápida de la LF podría traer la duda de si el patrimonio de la persona jurídica de tipo fundación constituye la propia fundación o es sólo una parte afecta a la misma. Conviene enfatizar que *ab initio*, debe insistirse en que la ley se refiere al patrimonio como el elemento de la organización en que consiste la fundación, que se afecta a un fin de interés general. “El patrimonio es de la fundación, no es la fundación” (Cuscó, M., 2004). Cuando determinadas personas, ya sean naturales o jurídicas, deciden afectar un patrimonio de manera permanente a una fundación se han de asumir una serie de consecuencias puesto que “quien constituye una fundación opta de manera definitiva y perpetua por el impuesto total y absoluto de los capitales con los capitales con los que la dota, al afectarlos a fines solidarios” (Giménez-Reyna, E., 1995). En este sentido, y enlazando con los arts.26 y 27 LF, merece entender la afectación patrimonial y el carente ánimo de lucro de las fundaciones como dos caras de la misma moneda porque “la LF si bien parece referir al fundador la ausencia de ánimo de lucro, en realidad caracteriza el talante no lucrativo por la reinversión, ya mediata (recapitalización patrimonial) ya inmediata (actividades), de los beneficios que se obtengan en el cumplimiento de las finalidades de interés general (...) una de las condiciones sine qua non” (Del Campo, J.A., 2000).

- “Fin de interés general”: es un elemento ineludible por la estrecha conexión que tiene con el propio derecho fundamental de fundación. Los fines que reconoce la LF como de

⁵⁶ “Las fundaciones podrán obtener ingresos por sus actividades siempre que ello no implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios”.

interés general son, entre otros, los que enumera el art.3.1 LF⁵⁷. Dado que los intereses generales que tratan de satisfacer las fundaciones ostentan un cariz público o estatal, “*Las fundaciones deben entenderse no solamente desde su perspectiva de personas jurídico-privadas, sino también como coadyuvantes sociales, es decir, como instituciones que cooperan con los poderes públicos para la consecución de fines de interés general*” (Cuscó, M., 2004). Los poderes estatales no pueden velar completamente por la vasta amplitud de fines de interés general existentes en la sociedad y precisa de la ayuda de terceras partes. Así, en la STC 18/1984 se desarrolla la idea de que “*es propio del Estado social de derecho la existencia de entes de carácter social, no público, que cumplen fines de relevancia constitucional o de interés general. La configuración del Estado como social de Derecho, viene así a culminar una evolución en la que la consecución de los fines de interés general no es absorbida por el Estado, sino que se armoniza en una acción mutua Estado-sociedad*”⁵⁸.

II. Ámbito subjetivo de aplicación de la ley

En virtud del art.8.1 LF “*Podrán constituir fundaciones las personas físicas y las personas jurídicas, sean éstas públicas o privadas*”. No obstante, se exigen en los arts.8.2 a 8.4 LF ciertos requisitos para poder crear fundaciones de manera válida, dependiendo de si se trata de personas naturales o jurídicas. Para las personas físicas, se exige como premisa general poseer la capacidad de “*disponer gratuitamente, inter vivos o mortis causa, de los bienes y derechos en que consista la dotación*” (art.8.1). La potestad de disponer *inter vivos* a través de donaciones se otorga, como indica el art.624 CC, a “*todos los que puedan contratar y disponer de sus bienes*”. Serán capaces de contratar, en virtud del art.1263 CC, “*todas las personas excepto los menores no emancipados y los incapacitados*”. Paralelamente, la capacidad de disponer gratuitamente de bienes y derechos *mortis causa* queda restringida a “*los menores de catorce años, y a los que habitual o accidentalmente no se hallaren en su cabal juicio*”, (art .663 CC). Como matización en este caso, valga decir que si se trata de una disposición *mortis causa* mediante testamento ológrafo, véase el art.688 CC, sólo podrá tener validez tal dotación para el caso de los mayores de dieciocho años (Olavarría Iglesia, J., Cuñat Edo, V., & España, 2008). A su vez, existe una serie de impedimentos a la capacidad que pueda tener una persona natural, a la hora de destinar bienes o derechos a título gratuito a la dotación de una fundación, en forma de prohibiciones dado que habrán de ser probados por quien esté interesado (González Cueto, T., & España, 2003).

⁵⁷ “*Defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente, y de fomento de la economía social, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación científica y desarrollo tecnológico*”.

⁵⁸ La función social de las fundaciones y su interrelación con el Estado social español tienen también su reflejo en la exposición de motivos de la LF: “*También nuestro Tribunal Constitucional (STC 18/1984, de 7 de febrero, entre otras) ha apuntado que una de las notas características del Estado social de Derecho es que los intereses generales se definen a través de una interacción entre el Estado y los agentes sociales, y que esta interpenetración entre lo público y lo privado trasciende también al campo de lo organizativo, en donde, como es fácil entender, las fundaciones desempeñan un papel de primera magnitud*”.

Las principales prohibiciones que deniegan el derecho a otorgar dotación y crear fundaciones son las siguientes:

- Ser menor de edad: en las fundaciones no se aplica la salvedad prevista a propósito del régimen previsto para las asociaciones infantiles, juveniles o de alumnos en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Ni tampoco podrá darse poder a padres o tutores legales para disponer gratuitamente de los bienes o derechos del menor de edad a la vista del art.166 CC (Díez Picazo, L., 1980).
- Incapacidad declarada: este impedimento habrá de ser reconocido judicialmente para que el incapacitado no pueda constituir fundación alguna por sí mismo, mas podrá hacerlo a través de su tutor legal y mediando autorización judicial para realizar la dotación correspondiente. Lo cual resulta coherente a la vista de Morillo González, F. (1999) para proteger los intereses del incapacitado que, muy frecuentemente, son tutelados por la misma fundación de nueva creación a la que el incapacitado pretende otorgar dotación.
- Otras: la reserva de bienes (art.634 CC), el matrimonio (régimen de gananciales), los sujetos en proceso de concurso o quiebra (art.1914 CC y art.878 CCom, respectivamente), los herederos fiduciarios (art.781 CC), y los herederos del ausente (art.196 CC).

En el plano de las personas jurídicas, sean privadas o públicas, se requiere un acuerdo grupal. Así, el art.8.3 LF establece que *“Las personas jurídicas privadas de índole asociativa requerirán el acuerdo expreso del órgano competente para disponer gratuitamente de sus bienes, con arreglo a sus Estatutos o a la legislación que les resulte aplicable”*. Al hablar de *“órgano competente”* hay que entender como tal *“el órgano decisorio, así en las asociaciones será la Asamblea de socios, y en las sociedades mercantiles la Junta General”* (Cuscó, M., 2004)⁹⁹. Las principales personas jurídicas privadas de índole asociativa son las siguientes:

- Asociaciones: tanto las que se rigen por la LA como las demás, y las sociedades civiles.
- Sociedades mercantiles: éstas persiguen un claro fin lucrativo y distributivo de dividendos que no encajan con los trazos característicos de las fundaciones. A pesar de ello, se admite que las sociedades mercantiles tienen derecho a constituir fundaciones ya que *“Incluso en el supuesto de que entendamos que el ánimo de lucro debe estar presente en todas (...) las actividades que desarrollen las sociedades mercantiles, es un hecho contrastado que aquél también se logra a través de inversiones y (...) la creación de una fundación, debido a la publicidad favorable que lleva aparejada y el régimen de incentivos fiscales (...) puede ser considerada como tal. Lo cual no deja de suponer un lucro indirecto para la sociedad fundadora”* (Petitbò, A., 2017).

Junto a las personas jurídicas privadas de carácter asociativo, aparecen las de índole institucional en el art.8.3: *“Las de índole institucional deberán contar con el acuerdo de su órgano rector”*. Este caso se contempla en la LF para exponer la posibilidad de que una fundación cree a su vez otra fundación. Es oportuno reflexionar sobre lo que el

⁹⁹ El nombre concreto que se le dé a este órgano dependerá del género de personalidad jurídica de la que se trate variando en función de cada caso.

legislador quiere expresar con el término “*persona jurídica privada de índole institucional*”. Para García de Enterría, E. y Fernández T. R. (1995) “*Las instituciones son una creación de un fundador (...) que propone un fin a cumplir por el ente que crea (...) es el propio fundador el que dispone los medios materiales y personales que quedan afectos al cumplimiento de este fin, así como el que decide con su voluntad la constitución de los órganos propios del ente*”. Así, se asimila más fácilmente la idea de que una fundación pueda constituir otra fundación y se puede entender por qué ciertos autores sugieren el establecimiento de cotas fundacionales para dar coherencia a este escenario y evitar actuaciones arbitrarias y convenientes. En esta línea está De Prada González, J.M^a. (1994) al plantear la necesidad de que las fundaciones declaren en sus Estatutos la posibilidad de crear otras fundaciones y al defender la significatividad del art.21 LF dado el papel crucial del Protectorado para autorizar esta decisión. Finalmente, dentro de las personas jurídicas que pueden constituir fundaciones se desmarca el art.8.4 LF al fijar que “*Las personas jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir fundaciones, salvo que sus normas reguladoras establezcan lo contrario*”. Presenta una cuestión polémica debido a que el hecho de que las AAPP puedan crear fundaciones supone, según la doctrina ha venido denominando, una huida desde el Derecho Administrativo hacia el Derecho Privado: “*en determinados ámbitos (...) es (...) deseable la participación de los poderes públicos en las fundaciones, caso por ejemplo de (...) las instituciones tutelares, la protección jurídica del menor, la defensa de los derechos de autor, la protección civil del derecho al honor, la intimidad o la imagen de las personas fallecidas (...) no es menos cierto que en otros carece de razón de ser, cual es el caso de articular fundaciones como un nuevo marco de organización administrativo que en la práctica determine la constitución de una Administración fiduciaria*” (Raposo Arceo J.J., 1999).

III. La constitución de las fundaciones y su inscripción registral

A tenor del art.9.1 LF existen dos modalidades de constitución de fundaciones: *inter vivos* y *mortis causa*. La primera de estas modalidades ha de realizarse mediante escritura pública (art.9.2 LF), mientras que la segunda precisa de testamento (art.9.3 LF). En este último caso, el art.9.4 LF⁶⁰ establece el orden de prelación para el otorgamiento de la escritura pública cuando el testador haya expresado su voluntad de crear una fundación de manera genérica.

La escritura pública es el comienzo del proceso de creación de las fundaciones de tipo *inter vivos* (Olavarría Iglesia, J., Cuñat Edo, V., & España, 2008). Este es el documento crucial que otorga la validez legal que precisan las fundaciones para constituirse, dado que “*Es un requisito ad solemnitatem y su ausencia impide la existencia legal de la fundación. Aun cuando la LF expresamente no lo determina, se desprende (...) que la declaración de voluntad de constituir una fundación sólo tiene efectos y adquiere relevancia (...) mediante escritura pública cuando se trata de constitución inter vivos, o*

⁶⁰ “*Si en la constitución de una fundación por acto mortis causa el testador se hubiera limitado a establecer su voluntad de crear una fundación y de disponer de los bienes y derechos de la dotación, la escritura pública en la que se contengan los demás requisitos exigidos por esta Ley se otorgará por el albacea testamentario y, en su defecto, por los herederos testamentarios. En caso de que éstos no existieran, o incumplieran esta obligación, la escritura se otorgará por el Protectorado, previa autorización judicial*”.

mediante testamento cuando se trata de constitución mortis causa” (Cuscó, M., 2004). La escritura pública fundacional habrá de contener de manera obligatoria para ser efectiva, enumerados en el art.10 LF⁶¹, a los cuales se podrán sumar todos aquellos que se entiendan como apropiados siempre y cuando no entre en contradicción con la letra de la Ley (González Cueto, T., & España, 2003). Por otra parte, aparecen los Estatutos (ver anexo K) como elemento esencial a tener en cuenta para constituir y registrar la personalidad jurídica de la fundación puesto que representan *“el contenido normativo del negocio fundacional, las normas por las que se regirá la actividad de la fundación (...) Estructuran la organización en la que se sustenta la fundación y (...) los medios a la realización de los fines”* (Cuscó, M., 2004). También aquí existen unos contenidos mínimos que habrán de ser satisfechos por los Estatutos, a la luz del art.11 LF⁶². Se podrán incluir otros extremos que los fundadores deseen siempre que se respete la Ley y no se afecte a la voluntad constitutiva de la fundación (art.11.2 LF).

Antes de proceder a examinar la inscripción registral de las fundaciones, es interesante observar las fundaciones en proceso de formación del art.13 LF. Se dice de estas fundaciones que son aquellas que ya han completado la escritura pública fundacional, pero que aún no han sido dadas de alta en el Registro de fundaciones. Éste es un caso polémico donde la doctrina está dividida en cuanto al momento a partir del cual la fundación tiene plena existencia. Autores como Ferrer Riba, J. (1984) creen que la escritura pública de constitución ha sido completada, mientras que otra parte de la literatura de la mano de Vaittier Fuenzalida, C. (1997) consideran que la escritura pública inicia la existencia de la fundación, la cual queda congelada en el tiempo vinculando a los fundadores a inscribirse en el Registro de fundaciones que se quiera para gozar de plena existencia. En último término, se encuentra la línea doctrinal más convincente expuesta por Durán Rivacoba, R. (1996), entre otros, que clama que hasta la inscripción de la fundación en el Registro ésta no poseerá existencia legal alguna⁶³.

La inscripción en el Registro Único de Fundaciones (ver anexo L), aparece regulada en los arts.36 y 37 LF (bajo la jerarquía del Ministerio de Justicia). Es éste un organismo público que refleja en sus asientos las fundaciones inscritas en él para cumplir así con el principio de publicidad registral. La LF no especifica la tipología del Registro, pudiendo

⁶¹ “a) El nombre, apellidos, edad y estado civil del fundador o fundadores, si son personas físicas, y su denominación o razón social, si son personas jurídicas, y, en ambos casos, su nacionalidad y domicilio y número de identificación fiscal. b) La voluntad de constituir una fundación. c) La dotación, su valoración y la forma y realidad de su aportación. d) Los Estatutos de la fundación, cuyo contenido se ajustará a las prescripciones del artículo siguiente. e) La identificación de las personas que integran el Patronato, así como su aceptación si se efectúa en el momento fundacional”.

⁶² “a) La denominación de la entidad (art.5 LF). b) Los fines fundacionales (art.3 LF). c) El domicilio de la fundación y el ámbito territorial en que haya de desarrollar principalmente sus actividades (art.6 LF). d) Las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la determinación de los beneficiarios (art.12 LF). e) La composición del Patronato, las reglas para la designación y sustitución de sus miembros, las causas de su cese, sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos (arts.14, 15, 16, 17 y 18 LF). f) Cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que el fundador o fundadores tengan a bien establecer (válvula de escape)”.

⁶³ Adicionalmente, es ciertamente interesante comentar que a pesar de que estas tres perspectivas tan distintas no se pongan de acuerdo en la cuestión de la existencia de la fundación, sí que concuerdan en lo referente al comienzo de la personalidad jurídica puesto que piensan que hasta que la fundación no quede inscrita esta no dará comienzo.

ser este de carácter administrativo, jurídico (ej. Registro mercantil y Registro Civil) o de ambos tipos (opinión mayoritaria; véase Palma Fernández, J.L. (1999)). Por ello, parte de la doctrina defiende que se trata de un Registro administrativo puesto que solo aporta estadísticas y evidencias de existencia de las fundaciones (ver anexo M) con valor probatorio (Piñar Mañas, J.L., 1995). En cambio, autores como Pau Padrón, A. (1997) señalan que la seguridad jurídica que aporta el Registro de fundaciones enmarca a tal institución dentro de los registros de carácter jurídica por su especial relevancia en el tráfico jurídico. Una vez se ha inscrito la fundación en el Registro de Fundaciones que corresponda surgen una serie de efectos de los que se pueden beneficiar estas personas jurídicas (art.37 LF):

- Publicidad: los arts.37.1 y 2 LF permiten obtener este efecto a todas aquellas fundaciones que se registren. Esto es, se concede seguridad jurídica de las situaciones y relaciones jurídicas de la fundación que ha sido inscrita en el Registro de Fundaciones y una seguridad en el tráfico jurídico de la fundación justificada por su inscripción. Exactamente igual que lo que sucedía con las asociaciones.
- Garantía: en el art.37.3 LF se dice que la inscripción sirve de garantía para terceros y también para los miembros de la fundación porque, si no se procede con los actos necesarios para inscribir la fundación, la responsabilidad de los actos de las fundaciones no inscritas no podrá perjudicar a terceros de buena fe. De manera similar al caso de las asociaciones de la LA.

Aparte de los efectos de publicidad y garantía, la inscripción registral conlleva otro efecto relevante como es la adquisición de la personalidad jurídica por la fundación constituida (art.4.1 LF)⁶⁴. Por lo tanto, y en contraposición a lo establecido para las asociaciones, la personalidad jurídica solo podrá ser adquirida por las fundaciones una vez se inscriban en el correspondiente Registro de Fundaciones. En último lugar, ha de remarcarse que en el Registro estatal de Fundaciones “*Se inscribirán las fundaciones de ámbito estatal, así como la constitución y extinción de las fundaciones de ámbito autonómico y las delegaciones de fundaciones extranjeras que realicen, de forma estable, actividades en España*” (Cuscó, M., 2004).

IV. Dotación y patrimonio de la fundación

La dotación del art.12 LF hace referencia, como señala Morillo González, F. (1999), al conjunto de bienes y/o derechos entregados a la actividad fundacional desde la constitución de la persona jurídica. Esta masa, la dotación, pasa a pertenecer de manera duradera en el tiempo a la propia fundación para que sea capaz de perseguir sus fines⁶⁵. El patrimonio fundacional, en cambio, es aquel conglomerado total de bienes y derechos adscritos a la consecución de los fines de interés general que motivan a la fundación. Para entender más claramente la dicotomía existente entre dotación (ver anexo N) y patrimonio puede ayudar ver a la dotación como una parte integrante del conjunto global de bienes y

⁶⁴ “*Las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública de su constitución en el correspondiente Registro de Fundaciones*”.

⁶⁵ Los ingresos operativos de cada ejercicio que no se quieran emplear a los fines de la fundación serán considerados también como dotación, a la vista del art.12.4 LF.

derechos económicos al que llamamos patrimonio fundacional (Serrano Chamorro, M.E., 2000). Rebollo Álvarez-Amandi, A. (1994) estima que la actual LF ha sabido establecer tal distinción frente a su predecesora. Dada la importancia de la dotación inicial, es comprensible que el art.12.1 LF estime imprescindible esta aportación de bienes y/o derechos para considerar a la fundación como existente, puesto que este caudal económico es el que soportará el coste de las actividades necesarias para perseguir el fin fundacional⁶⁶. El montante mínimo y suficiente es de 30.000€ para cubrir la dotación inicial. Se acepta tanto la entrega en el momento de esta suma como su entrega progresiva (art.12.2 LF). El hecho de que exista una dotación mínima en la LF es visto con buenos ojos por estudiosos del Derecho como Del Campo Arbulo, J.A. (1995) dado que contribuye a asegurar de algún modo que la personalidad jurídica, que se va a constituir y que perseguirá unos fines de interés general, tendrá cierto grado de compromiso y estabilidad en el tiempo. Empero, otros juristas españoles entienden que no se tendría que fijar un umbral mínimo monetario para poder constituir fundaciones. En esta línea se posiciona Cobo Gálvez, P. (1995) quien argumenta la impertinencia de una dotación mínima debido a que las fundaciones pueden llegar a ser muy heterogéneas en cuanto a magnitudes y propósitos y, en consecuencia, requerir de patrimonios iniciales diferentes. En relación a esto último, la LF contiene una válvula de escape para justificar dotaciones iniciales inferiores a 30.000€ en bienes y/o derechos en su art.12.1 LF⁶⁷, que aun así es criticado dada la restricción que supone al derecho de fundación (Díaz Brito, F.J., 1996).

La LF hace varias referencias a la dotación, pero también menciona frecuentemente al patrimonio fundacional como clave para el correcto funcionamiento de la fundación. El art.19.1 LF deja claro que el patrimonio fundacional es el global de bienes y derechos susceptibles de valoración económica que engloba a la dotación inicial y a las aportaciones posteriores que no se integren en ella. Tal patrimonio habrá de ser administrado y gestionado diligentemente para lograr los fines de interés general que motiven a la causa fundacional reflejada en los Estatutos (art.12.2 LF). Dada la relevancia del patrimonio para el porvenir de la fundación existe un claro consenso en cuanto a la necesidad inexcusable de que la fundación se pueda constituir como tal siempre que cumpla con el requisito patrimonial (Valero Agúndez, U., 1969). Los bienes han de ser entendidos a la luz del art.333 CC, es decir, como cosas muebles o inmuebles que pueden ser sujeto de apropiación. Mientras que los derechos, se corresponden con “*los derechos de crédito, los (...) derechos sobre bienes inmateriales, y el derecho hereditario entre otros, por cuanto todos ellos pueden formar parte del patrimonio de la persona*” (Cuscó, M., 2004). Siguiendo este mismo razonamiento se encuentra Puig Ferriol, L. (1983) al mencionar que el requisito que valida a cualquier derecho para incorporarse al patrimonio fundacional es primordialmente la susceptibilidad de tasación económica que ostente.

⁶⁶ Este es el parecer del TS a tenor de su jurisprudencia más relevante en este aspecto, la STS 1288/1983.

⁶⁷ “*Cuando la dotación sea de inferior valor, el fundador deberá justificar su adecuación y suficiencia a los fines fundacionales mediante la presentación del primer programa de actuación, junto con un estudio económico que acredite su viabilidad utilizando exclusivamente dichos recursos*”.

El art.21 LF se preocupa de los actos de enajenación (onerosa o gratuita) y gravamen que pueden afectar a los derechos y bienes del patrimonio. El papel protagonista del Protectorado es claro al ser la figura institucional pública que aprueba y apoya los actos dispositivos de bienes y derechos efectuados por la fundación⁶⁸ (Carballeira Rivera, M. T., 2009). En determinados casos se precisa de la autorización preceptiva del Protectorado para el consentimiento de las acciones de gravamen y enajenación que se pretendan llevar a cabo sobre *“bienes y derechos que formen parte de la dotación, o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales”* (art.21.1 LF), comprobando si tales acciones están justificadas por los fines de la fundación. De otro lado, el Protectorado tendrá que ser informado cuando la fundación desee realizar actos de disposición sobre *“(bienes) distintos de los que forman parte de la dotación o estén vinculados directamente al cumplimiento de los fines fundacionales”* (art.21.3 LF) que supongan una suma superior al 20% del activo registrado en el último balance que fuera aprobado. Finalmente, las herencias y donaciones también son contempladas por la LF como una posibilidad de ampliar el conglomerado patrimonial de la fundación (Serrano Chamorro, M.E., 2000). Más concretamente, el art.22.1 LF establece la obligatoriedad de aceptar estas liberalidades económicas a beneficio de inventario. Por el contrario, *“La aceptación de legados con cargas o donaciones onerosas o remuneratorias y la repudiación de herencias, donaciones o legados sin cargas”* (art.22.2 LF) habrá de ser reportada al Patronato para su conocimiento.

V. Funcionamiento y órganos. Régimen de actividades y extinción de la fundación

La fundación como persona jurídica precisa estrictamente de una dotación y de un patrimonio que la permita perseguir los fines de interés general que fijo en sus Estatutos, pero además necesita una estructura que la haga funcionar (Nart, I., 1955). Así, la STC 49/1988, establece que *“la fundación implica que el fundador puede imponer las normas por las que ha de regirse la persona jurídica que él crea”*. Por lo que el fundador es dueño de las decisiones organizativas de la fundación con la preceptiva actuación del Protectorado en los casos exigidos. A la luz del art.14 LF, el cuerpo organizativo de la fundación, que gestiona los bienes y derechos patrimoniales, se denomina Patronato (ver anexo Ñ) y es de obligada existencia. Las funciones del Patronato son, por un lado, la representación colectiva de la fundación incluyendo los procesos judiciales (STS 4397/2012) y, a su vez, la leal administración patrimonial de la fundación conjuntamente con el Protectorado cuando se realicen actos de disposición (García, M. F., & Carrasco, J. M. R., 2017). También se podría destacar una responsabilidad esporádica del Patronato como entidad responsable de realizar los actos de constitución de la fundación cuando todavía no se ha procedido a su inscripción en el Registro de Fundaciones (art.13 LF). A pesar de que estas funciones correspondan de manera inherente al Patronato, el art.16 LF permite realizar delegaciones y apoderamientos de facultades a terceros miembros de la fundación⁶⁹. Existen distintas modalidades de apoderamiento y delegación, como: el

⁶⁸ Esta postura se aleja acertadamente de la anterior LF de 1994 al tomar el Protectorado una posición menos autoritaria y más colaboradora con los intereses de la propia fundación.

⁶⁹ Con la única salvedad de *“la aprobación de las cuentas y del plan de actuación, la modificación de los Estatutos, la fusión y la liquidación de la fundación ni aquellos actos que requieran la autorización del Protectorado”* (16.1 LF).

administrador delegado individual, la comisión colectiva de administración, los administradores delegados conjuntos y los administradores solidarios (Jiménez Escobar, J., 2013).

La LF declara que el Patronato, tendrá que estar conformado por un mínimo de tres patronos: teniendo un presidente, un secretario y un tercer patrono de distinta designación a las anteriores⁷⁰ (art.15 LF). Podrán ser patronos tanto personas naturales como jurídicas, siendo necesario que las primeras ostenten la *“plena capacidad de obrar y no estén inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos”* y que las segundas designen *“a la persona o personas físicas que las representen en los términos establecidos en los Estatutos”* (art.15.2 LF). Decididamente controvertido es el hecho de que los patronos desempeñen sus funciones de forma gratuita puesto que el art.27.2 LF, discretamente, concreta que sí que existirá una contraprestación económica por gastos de representación que habrá de serles satisfecha: *“hasta que reglamentariamente no se determine otra cosa, el diez por ciento de las rentas e ingresos de la fundación”* (Cuscó, M., 2004). Del Campo Arbulo, J.A. (1997) opina que pueden darse casos en los que las costosas tareas de representación superen el umbral máximo marcado legalmente y en los que, por tanto, los patronos no tendrán la oportunidad de resarcirse⁷¹. Dado el elevado contenido de responsabilidad que envuelve a la figura del patrono fundacional es acuciante que se comporte, como clama el art.17.1 LF, *“con la diligencia de un representante legal”*. La naturaleza de esta responsabilidad, dice el art.17.2 LF, es solidaria⁷² lo que encaja adecuadamente con el art.1101 CC y añade especial importancia al tipo de responsabilidad contractual o extracontractual que se determine porque, como advierten Salelles Climent, J.R. & Verdera Server, R. (1997), la prescripción de las acciones contra los patronos penderá de esta circunstancia.

El segundo organismo relevante en la fundación es el Protectorado. Dicho organismo se incardina dentro de la Administración General del Estado (AGE), bajo los departamentos ministeriales establecidos y se encarga de velar *“por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones”* (art.34 LF) estatales a las que aplica directamente la LF. La naturaleza pública del Protectorado queda justificada por los fines de interés general que persiguen las fundaciones. La jurisprudencia del TC en numerosas ocasiones considera que el Protectorado será guardián de *“los fines de la Fundación y la recta administración de los bienes que la forman”* (STC 48/1988). El Protectorado se erige de este modo como el organismo administrativo de ayuda y control de las fundaciones para que éstas puedan

⁷⁰ No se establece un número máximo de patronos pues es comprensible que las fundaciones precisarán de muy variados patronatos debido a la magnitud de sus propósitos.

⁷¹ Siguiendo esta idea, el art.28 LF menciona la posibilidad que tienen los propios patronos de ser contratados por su fundación para la realización de actividades diferentes a las que les correspondería por su calidad de patrono. A este potencialmente peligroso fenómeno se le denomina auto-contratación. La LF comprende el plausible ilícito que pueden cometer los patronos, al pretender sacar lucro injustificado, y es por ello que sitúa al Protectorado como órgano autorizante previo.

⁷² *“Frente a la fundación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos, o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo. Quedarán exentos de responsabilidad quienes hayan votado en contra del acuerdo, y quienes prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél”*.

alcanzar sus propósitos más fácilmente, y bajo el control público de legalidad. La doctrina discute sobre si el Protectorado agrede al propio derecho fundamental de fundación del art.34 CE al limitar el despliegue espontáneo y voluntario social de tales personas jurídicas o, si este organismo público fomenta las fundaciones y sus actividades. Piñar Mañas, J.L. (1999), en este sentido, se posiciona en un punto moderado al explicar que las determinadas actividades y funciones que la Ley confiera al Protectorado condicionarán su pertinencia y adecuación social.

Las funciones del Protectorado (art.34.2 LF), siguiendo a Cuscó, M. (2004), pueden categorizarse en función de cinco bloques: “*a. fase de constitución, b. Patronato, c. patrimonio fundacional, d. modificación, fusión y extinción fundacional, y e. impulso y asesoramiento*”. En el primer bloque, durante la fase de constitución, el Patronato se preocupa por: vigilar que el derecho fundamental del art.34 CE se respete, prestar apoyo normativo a las fundaciones en proceso de formación y conceder la escritura pública de creación de la fundación. En segundo término, las funciones que realiza en cuanto al Patronato son: designación de nuevos patronos si los que los patronos originarios no hubieran inscrito a la fundación en el Registro de Fundaciones oportuno; elección de las personas que han de conformar temporalmente el órgano de gobierno y representación cuando se proceda a la modificación de Estatutos; desempeño temporal de las funciones del órgano de gobierno cuando se encuentre vacío; otorgamiento de su consentimiento para que los patronos contraten por su nombre o a cuenta de terceros; ejercicio de la acción de responsabilidad por daños y perjuicios contra los miembros de la fundación que hayan actuado en contra de la Ley o de los Estatutos; promover la dimisión de los patronos que no actúen con la diligencia debida (Garzón, C. C., 2008) cuando haya recaído decisión judicial; y, manifestarse en contra de las decisiones del Patronato que vayan en contra de la Ley o de los Estatutos. A su vez, las funciones del Protectorado relativas al control patrimonial de la fundación son: la comprobación de las cuentas anuales de cada ejercicio fiscal, el consentimiento para enajenar y gravar el patrimonio fundacional cuando este sea la dotación o las partidas destinadas a la consecución de los fines de interés general fijados en los Estatutos, el conocimiento acerca de determinadas transacciones que la fundación realice involucrando el patrimonio fundacional ajeno a la dotación y a los fines de interés general fijados en los estatutos, la conciencia sobre las liberalidades económicas que recaigan en las fundaciones a modo de donaciones y legados, la auditoria de que el patrimonio destinado a los fines fundacionales se empleó efectivamente en ellos, el asesoramiento financiero de las fundaciones, el conocimiento de las relaciones jurídicas entre las fundaciones y sociedades mercantilistas. El cuarto bloque de funciones del Protectorado abarca las modificación, fusión y extinción de las fundaciones (STS 2871/2016). En este particular, el Protectorado se encarga de: cerciorarse de que el Patronato actualiza los fines fundacionales cuando los Estatutos hayan cambiado, ser notificado cuando se modifiquen los Estatutos, comprobar los contratos de fusión entre fundaciones (STC 98/2013), favorecer las fusiones entre

fundaciones para que estas puedan cumplir sus fines, ratificar la extinción de la fundación, y supervisar la liquidación patrimonial de las fundaciones⁷³.

Por último, las fundaciones pueden extinguirse o disolverse (arts.31 y 32 LF). Las causas son: “a) *Cuando expire el plazo por el que fue constituida. b) Cuando se hubiese realizado íntegramente el fin fundacional. c) Cuando sea imposible la realización del fin fundacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la presente Ley. d) Cuando así resulte de la fusión a que se refiere el artículo anterior. e) Cuando concurra cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los Estatutos. f) Cuando concurra cualquier otra causa establecida en las leyes*”. La consecuencia lógica de la extinción es la liquidación del patrimonio (art.33 LF) por el Patronato con la supervisión del Protectorado (González Cueto, T., & España, 2003). Los destinos de los bienes y derechos de la fundación, explican Olavarría Iglesia, J., et al. (2008), aparecen en los arts.33.2 y 33.3 LF⁷⁴.

⁷³ Finalmente, y de forma genérica, el Protectorado tendrá como función apoyar a las fundaciones en todo lo que pueda. De manera que, mediante su asesoramiento y promoción, acerca a las fundaciones a la consecución de sus fines estatutarios.

⁷⁴ “2. *Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquéllos, y que hayan sido designados en el negocio fundacional o en los Estatutos de la fundación extinguida. En su defecto, este destino podrá ser decidido, en favor de las mismas fundaciones y entidades mencionadas, por el Patronato, cuando tenga reconocida esa facultad por el fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al Protectorado cumplir ese cometido. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las fundaciones podrán prever en sus Estatutos o cláusulas fundacionales que los bienes y derechos resultantes de la liquidación sean destinados a entidades públicas, de naturaleza no fundacional, que persigan fines de interés general*”.

Capítulo 4. COMPARACIÓN ENTRE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

4.1. Ventajas competitivas e inconvenientes de la Asociación como ONG

I. Objeto, principios y ámbito de aplicación: un aspecto decididamente ventajoso es la puntualización de la LA en cuanto a las actividades económicas que pueden desempeñar las asociaciones. A primera vista, se podría pensar que las asociaciones, al ser entidades del Tercer Sector sin ánimo lucrativo, están vetadas para llevar a cabo actividades productivas de bienes y servicios a cambio de contraprestaciones monetarias. No obstante, el art.13.2 LA suprime las dudas sobre el binomio ánimo de lucro y actividad económica (Muro, I. T., 1999) al indicar que toda asociación tendrá derecho a participar de actividades económicas siempre que los beneficios obtenidos se destinen únicamente a la satisfacción de los fines de interés general que dan sentido a la asociación (García Inda, A., 2003); y que el desarrollo de actividades productivas de reminiscencias mercantiles estén aceptadas por la ética de la asociación en cuestión -hecho que puede ser visto como inconveniente para la salud financiera de la asociación- (STC 218/1989). Bajo ningún concepto, estará permitido distribuir las ganancias derivadas de las actividades económicas entre asociados o cualquier otra persona jurídica o física con ánimo de lucro a título gratuito, puesto que tales acciones serían más propias de sociedades mercantiles que de las asociaciones de las que regula la LA (Villarroya, A. A., 2008). De otra parte, debemos tener en cuenta que el doble carácter del derecho de asociación supone una prerrogativa positiva y negativa al mismo tiempo (Font, J., Gibert, J. R. M., & Lorient, M. T., 2006). La libertad positiva de asociarse o crear asociaciones que obedezcan los mínimos de la LA es clara (art.2.2 LA); sin embargo, no lo es tanto la posibilidad de decidir no formar parte de asociaciones (art.2.3 LA).

II. Ámbito subjetivo de aplicación de la ley: los arts.2.1 y 2.2 LA manifiestan el amplio grado de inclusión permitido; todos los tipos de personas, tanto físicas como jurídicas, tendrán la capacidad de crear y ser parte de asociaciones (De Salas Murillo, S., 1996). Ahora bien, como regla general las personas físicas deberán ostentar la completa capacidad de obrar (arts.30 y 322 CC). Pero, aun así, ciertas personalidades públicas como los miembros de las fuerzas armadas o del poder judicial se tendrán que cernir a lo establecido en su regulación especial (Aguiar de Luque, L. & Elvira Perales, A., 1996-1999). De manera similar, las personas jurídicas también enfrentan ciertas limitaciones (Bustos Gómez-Rico, M., & España, 2012) dado que existe la necesidad de que los órganos internos se pongan de acuerdo para crear la asociación o tomar decisiones que involucren a la asociación. Lo que desemboca en largos diálogos, regidos por el principio democrático inherente a las asociaciones, que demoran la toma ágil de decisiones.

III. La constitución de las asociaciones y su inscripción registral: el Acuerdo de Constitución, el Acuerdo Fundacional, los Estatutos y, finalmente la inscripción de la asociación en el Registro de Asociaciones oportuno son los cuatro pasos que desembocan

en la constitución formal y material de la asociación (Perales, A., & Elvira, A., 2008). El primero, el Acuerdo de Constitución (art.5.1 LA), exige que un mínimo de tres personas físicas o jurídicas se pongan de acuerdo para asociarse y conseguir un fin de interés general; lo cual supone una barrera a la iniciativa privada individual de sujetos que deseen conformar asociaciones, ya que en un primer momento carecen del apoyo de otras dos personas más para asociarse. Es relevante subrayar que el Acuerdo de Constitución también habrá de recoger los Estatutos pactados por los asociados fundadores para más adelante poder formalizarse vía documento público o privado, mediante el llamado Acuerdo o Acta Fundacional (art.5.2 LA). En este momento la asociación ya goza de personalidad jurídica sin necesidad de registro previo (López Noguero, F., 2002), lo cual resulta ventajoso desde una óptica burocrática. Hay también otros extremos de cariz más básico, como los nombres de los promotores o el lugar y fecha del otorgamiento de acta, que deberán incluirse también en el Acta Fundacional para justificar la veracidad de la asociación como personalidad jurídica real (art.6.1 LA).

Con base en el principio democrático de las asociaciones de la LA, se desmarcan los Estatutos como elemento crucial a tener en cuenta para constituir y registrar la personalidad jurídica de la asociación puesto que representan la *norma normarum* de auto-organización interna de la asociación (Orozco, J. D., & Núñez, C. R., 2013). Los arts.7, 8 y 9 LA indican los contenidos que han de ser cubiertos por los Estatutos, aunque como atentamente señalan Durán Rivacoba, R., & Reina Tartièrre, G. (2004) el art.7.2 LA otorga mayor libertad y flexibilidad al contenido que puede ser incluido en los Estatutos haciendo las veces de “*válvula de escape*” para que los asociados puedan realizar ulteriores adiciones. Además, los Estatutos podrán ser modificados a la luz del art.16 LA en función de las necesidades de adaptación que sufra la asociación a lo largo del tiempo.

Una vez consolidados adecuadamente el Acuerdo de Constitución, el Acuerdo Fundacional y los Estatutos; será entonces el momento propicio de acudir al Registro de Asociaciones y proceder con la inscripción (art.10 LA). En palabras de Pallarés Rodríguez, R. (2004), la incorporación formal de la asociación al Registro ofrece las ventajas de publicidad y consecuente seguridad jurídica para el tráfico jurídico de las asociaciones con terceros (art.10.1 LA), a la par que los beneficios de garantía en cuanto a la responsabilidad jurídica de la asociación y sus asociados (arts.10.2 y 10.3 LA) puesto que si la asociación no está efectivamente inscrita en el Registro de asociaciones la responsabilidad en el tráfico jurídico recaerá sobre los miembros de la misma de modo personal y solidario (art.10.4 LA). Paralelamente a la publicidad y garantía registral, señala Reverte Martínez, F. M. (2004), se dan otras consecuencias ventajosas en virtud del art.30 LA que pueden beneficiar a la asociación como el silencio administrativo positivo tras los tres meses de presentar la solicitud de inscripción en el Registro, la limitación de la actividad de la Administración a la verificación del cumplimiento de los requisitos del acta fundacional y Estatutos, o la suspensión del plazo para proceder a la inscripción cuando se adviertan defectos formales.

IV. Funcionamiento y órganos. Régimen de actividades: Los órganos de funcionamiento de la asociación son principalmente dos (art.11 LA): la Asamblea General y el órgano de representación y gestión. El primero de ellos, protagonista absoluto, es la Asamblea General reunida al menos una vez al año, constituyendo el órgano democrático supremo de gobierno de la asociación (art.11.3 LA). Las funciones de este órgano de dirección son inexorablemente, según Anguita Villanueva, L. A. (2016): la aprobación de las cuentas anuales (art.14.3 LA), la modificación estatutaria que afecte al contenido mínimo del art.7 LA (art.16.1 LA), las retribuciones de los miembros del órgano de gestión y representación del art.11.5 LA, y la disolución de la asociación. Como consecuencia directa de la disolución de la asociación, se determinará el destino del patrimonio siguiendo lo establecido en los Estatutos (art.17.2 LA). Dicha acción, asevera Guerrero, E. C. (2015), corresponderá a la Asamblea General mediante acuerdo por mayoría cualificada (art.12.d)). El calado de la Asamblea es crucial pues en ella se urden todas las decisiones, por mayoría democrática, que guiarán el destino de la asociación: la ventaja del principio democrático es evidente pues los asociados tendrá la potestad de pronunciar su parecer; no obstante, la velocidad en la deliberación de las decisiones y la agilidad de la asociación se verá perjudicada debido a que cuantas más personas hayan de estar de acuerdo más tiempo de demora existirá. A su vez, es positivo enfatizar que las actividades que desempeñe la asociación podrán ser económicas. Las asociaciones estarán legitimadas siempre que no se proceda a la división de ganancias derivada de la actividad económica entre asociados o terceras personas a título gratuito (Senent Vidal, M. J., & Fajardo García, G., 2006): *“Los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquellos con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo (art. 13.2 LA)”*. El art.14 LA determina que entre las *“obligaciones documentales y contables”* se contemplarán las actividades económicas para dotar positivamente de ineludible transparencia a las actividades de la asociación.

V. Derechos y deberes de los asociados: El derecho básico de los asociados es el de integración en la asociación (art.19 LA). Toda persona que satisfaga los requisitos de los Estatutos podrá unirse libre y voluntariamente a la asociación (González Pérez, J., Fernández Farreres, G., & España, 2002). Al mismo tiempo, Martín Huertas, A., & España (2009) señalan que el derecho de separación de la asociación del art.23 LA tiene un carácter igualmente libre y voluntario. Y, claro está, aparecen otros tantos derechos y obligaciones intermedios: derecho de participación activa (art.21.1 LA), de información (art.21.2 LA), de garantías disciplinarias (art.21.3 LA) y de impugnación (art.21.4 LA). Finalmente, el art.22 LA reconoce las obligaciones genéricas de compartir los fines de la asociación, y cumplir las obligaciones fijadas por la entidad en los Estatutos o en otros acuerdos válidamente adoptados (Reverte Martínez, F. M., 2004).

4.2. Ventajas competitivas e inconvenientes de la Fundación como ONG

I. Objeto y concepto de fundación: las tres líneas distintivas que caracterizan a las fundaciones, y que pueden ser tildadas tanto de ventajosas como de inconvenientes, son según la LF: “*ánimo no lucrativo*”, “*afectación patrimonial*”, y “*fin de interés general*”. El art.26 LF permite a las fundaciones realizar actividades económicas para subsistir; siempre y cuando los beneficios, al final de cada ejercicio fiscal, no sean divididos y compartidos entre los socios de la fundación (García Añoveros, J., 1997). De modo que, el art.27 LF destina las rentas e ingresos que tiene la fundación a la consecución de los fines de interés general que dan sentido a la existencia de la fundación y, también, al aumento de reservas o de la dotación (Del Campo, J.A., 2000). Por otro lado, y en relación con la afectación del patrimonio, Cuscó, M. (2004) observa que el patrimonio afecto a un interés general constituye la esencia de la propia fundación. Así, prosigue Giménez-Reyna, E. (1995), “*quien constituye una fundación opta de manera definitiva y perpetua por el impuesto total y absoluto de los capitales con los capitales con los que la dota, al afectarlos a fines solidarios*”. En último término, el fin de interés general es un elemento clave por la estrecha conexión que tiene con el derecho fundamental de fundación del art.34 CE. El art.3.1 LF trata de enumerar los fines generales más comunes que pueden perseguir las fundaciones, pero en ningún caso es una lista *numerus clausus*. Gracias a ello la iniciativa privada de los fundadores no se ve coartada en ningún momento y el amplio abanico de posibilidades es inmenso.

II. Ámbito subjetivo de aplicación de la ley: el art.8.1 LF defiende que tanto las personas físicas como las jurídicas, públicas o privadas, podrán constituir fundaciones si respetan los requisitos de los arts.8.2-8.4 LF. Al contrario que las asociaciones de la LA, las personas que deseen incorporarse a una fundación de interés general tendrán que ser previamente aceptadas por los fundadores para poder incorporarse a la causa fundacional. Es decir, el derecho de integración a la fundación está condicionado por la aceptación de los fundadores. Volviendo a la constitución de fundaciones, hay que resaltar que las personas naturales deberán ostentar la capacidad de disponer de sus bienes y derechos de manera gratuita para crear la dotación fundacional (Olavarría Iglesia, J., Cuñat Edo, V., & España, 2008); ya sea *inter vivos* o *mortis causa* (art.8.1 LF). Existen numerosas causas para impedir el derecho a otorgar dotación y crear fundaciones, aunque quizá las más visibles, como regla general, sean las siguientes: minoría de edad (más estricta que en el caso de las asociaciones de la LA), Incapacidad declarada, la reserva de bienes (art.634 CC), el matrimonio (régimen de gananciales), los sujetos en proceso de concurso o quiebra (art.1914 CC y art.878 CCom, respectivamente), los herederos fiduciarios (art.781 CC), y los herederos del ausente (art.196 CC). Por otro lado, las personas jurídicas requerirán del acuerdo expreso del órgano decisor para constituir fundaciones (art.8.3 LF), sean estas privadas o institucionales (García de Enterría, E. y Fernández T. R., 1995); o incluso públicas (art.8.4 LF) cuando sus normas administrativas lo permitan (Raposo Arceo J.J., 1999).

III. La constitución de las fundaciones y su inscripción registral: un factor diferencial con respecto a la LA y que beneficia a la persona que desee constituir fundación es la doble

posibilidad de creación que brinda el art.9.1 LF: *inter vivos* y *mortis causa*. La primera de estas modalidades ha de realizarse mediante escritura pública -requisito ad solemnitatem- (art.9.2 LF), mientras que la segunda precisa de testamento (art.9.3 LF). En ambos casos, se habrán de incluir los aspectos básicos que indica el art.10 LF a los cuales se podrán sumar todos aquellos que se entiendan como apropiados siempre y cuando no entre en contradicción con la letra de la Ley (González Cueto, T., & España, 2003). Los Estatutos, por su lado, son esenciales siempre para constituir y registrar la personalidad jurídica de la fundación (Orozco, J. D., & Núñez, C. R., 2013). En ellos se han de cubrir unos contenidos mínimos a los que se podrán sumar otros que respeten el ordenamiento legal vigente (art.11 LF). Una vez se han conformado la escritura pública (o testamento en el escenario *mortis causa*) y los Estatutos fundacionales es momento propicio de proceder con la inscripción en el Registro de Fundaciones (arts.36 y 37 LF). Los principales efectos de la inscripción son ventajosos para la fundación debido a que se perciben los beneficios de publicidad (Palma Fernández, J.L., 1999) para favorecer las relaciones jurídicas de la fundación con terceros (arts.37.1 y 2 LF), además de la garantía para terceros y también para los miembros de la fundación (Pau Padrón, A., 1997), para así evitar perjuicios a terceros en el tráfico jurídico (art.37.3 LF). Aparte de los efectos de publicidad y garantía, la inscripción registral, a diferencia de los que sucede con la LA, conlleva el significativo efecto de la adquisición de la personalidad jurídica por la fundación constituida; ralentizando la obtención de tal efecto jurídico.

IV. Dotación y patrimonio de la fundación: la dotación de bienes y derechos del art.12 LF supone el fundamento más primitivo de la fundación, puesto que la asignación de esta masa dotacional pasa a pertenecer de manera permanente a la persona jurídica para emplearse en la consecución de los fines fundacionales fijados en los Estatutos (Morillo González, F., 1999). El art.12.1 LF establece el montante mínimo y suficiente para cubrir la dotación inicial, 30.000€; suma vista con recelo por algunos como Cobo Gálvez, P. (1995) por ser exageradamente alta y por condicionar el derecho fundamental de fundación (Díaz Brito, F.J., 1996). El patrimonio fundacional, es decir, el conglomerado total de bienes y derechos adscritos a la consecución de los fines de interés general que motivan a la fundación es el aspecto distintivo de las fundaciones que puede ser provechoso a la vez que desventajoso en función del contexto (Rebollo Álvarez-Amandi, A., 1994). Los actos de enajenación (onerosa o gratuita) y gravamen que pueden afectar a los derechos y bienes del patrimonio son abordados por el art.21 LF (STS 1811/2011). En dichos actos el Protectorado se encarga de la aprobación y apoyo (Carballeira Rivera, M. T., 2009); e incluso de la autorización preceptiva. Finalmente, las herencias y donaciones también son contempladas por la LF como una posibilidad de ampliar el conglomerado patrimonial de la fundación (Serrano Chamorro, M.E., 2000). El art.22.1 LF obliga a aceptar estas liberalidades económicas a beneficio de inventario. Por el contrario, “*La aceptación de legados con cargas o donaciones onerosas o remuneratorias y la repudiación de herencias, donaciones o legados sin cargas*” (art.22.2 LF) habrá de ser reportada al Patronato para su conocimiento. De todo ello, se intuye la sumisión del Patronato al Protectorado en determinadas situaciones, no pudiendo el primero tomar las decisiones patrimoniales de manera autoritaria.

V. Funcionamiento y órganos. Régimen de actividades: en contraposición a las asociaciones, el principio democrático no rige en las fundaciones. Por ello, la jurisprudencia deja claro que *“la fundación implica que el fundador puede imponer las normas por las que ha de regirse la persona jurídica que él crea”* (STC 49/1988). Así la voluntad del fundador prepondera sobre el conjunto de miembros de la fundación en el empleo del patrimonio y dotación fundacional (Nart, I., 1955). El art.14 LF esclarece que el Patronato es el órgano a través del cual el fundador representa y administra diligentemente a la fundación; en esta última faceta el Protectorado también participa (García, M. F., & Carrasco, J. M. R., 2017). El Patronato, entiende el art.15 LF, habrá de ser conformado por un mínimo de tres personas, naturales o jurídicas, suponiendo un obstáculo a la iniciativa fundacional para aquellos que no cumplan el cupo mínimo. Así mismo, los patronos deberán desempeñar sus funciones de forma gratuita (art.27.2 LF), aunque si percibirán remuneraciones por los gastos de representación (Del Campo Arbulo, J.A., 1997). La responsabilidad de los patronos, dice el art.17.2 LF, es solidaria frente a la fundación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o Estatutos (Salelles Climent, J.R. & Verdera Server, R., 1997). Por otro lado, el Protectorado, órgano de control y supervisión de la AGE, velará *“por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones”* (art.34 LF), de lo que se deduce una menor libertad para los fundadores en comparación con la persona jurídica de asociación. La jurisprudencia del TC en numerosas ocasiones señala que el Protectorado será guardián de *“los fines de la Fundación y la recta administración de los bienes que la forman”* (STC 48/1988). Parte de la doctrina concluye que el Protectorado condiciona el derecho de fundación al tratar de delimitar su pertinencia y adecuación social (Piñar Mañas, J.L., 1999). Sin embargo, y de forma genérica, el Protectorado tendrá como función apoyar a las fundaciones en todo lo que pueda. De manera que, mediante su asesoramiento y promoción, acerca a las fundaciones a la consecución de sus fines estatutarios (ver anexo O).

CONCLUSIONES

1. Conclusiones específicas en relación con los objetivos

I. Entender las dimensiones constitucional y civil de la personalidad jurídica en el Tercer Sector.

La personalidad jurídica en el Tercer Sector puede adoptar dos modalidades caracterizadas por la persecución de un interés general y la carencia de ánimo lucrativo: tipo asociación y tipo fundación. Los derechos de asociación (art.22 CE) y fundación (art.34 CE) están recogidos en la CE como derechos fundamentales, dada su posición en el articulado constitucional (Título I, Secciones 1ª y 2ª; respectivamente). Por un lado, el derecho fundamental de asociación actúa como prerrogativa de las personas en el ámbito de la vida social, pero también como capacidad de las propias asociaciones para su funcionamiento (STS 894/2011). Siempre que el propósito de las asociaciones, sus medios y su naturaleza (ej. civil, clandestina, paramilitar) sean lícitos éstas tendrán cabida legítima en el panorama social español y habrán de registrarse en el Registro de asociaciones correspondiente (Canosa Usera, R. y González Escudero, A., 2011), de no ser así se podrán disolver estas personas jurídicas mediante resolución judicial motivada. Además, el recurso de amparo ante el TC se posiciona como la garantía de protección jurisdiccional última de este derecho de gran calado para el progreso social (Marín López, J. J., 2005). Por su lado, el derecho fundamental de fundación reconoce el derecho a constituir fundaciones que tengan como objetivo lograr la consecución de fines de interés general (De Luna, M. A. C., 2003) mediante la asignación de un determinado patrimonio a tal fin (STC 49/1988). Las fundaciones también deberán ostentar propósitos, medios y naturaleza lícitas para poder erigirse legalmente (Alli Turrillas, J., 2010) y, de igual manera, podrán ser disueltas si no cumplen con tales requisitos mediante resolución judicial motivada. Al contrario de lo que sucedía con el derecho de asociación del art.22 CE, el derecho de fundación no tiene aparejado el recurso de amparo en cuanto al ejercicio de la tutela judicial efectiva se refiere, a pesar de que también sea considerado como un derecho fundamental perfecto; aunque no esté protegido de manera especial como se puede apreciar en su localización dentro del articulado constitucional (Piñar Mañas, J. L., 1996).

El CC también menciona las asociaciones y fundaciones en múltiples preceptos. El articulado civil expone en el art.28 CC la remisión al Derecho Privado estatal, conjuntamente con las normas supranacionales, para determinar la nacionalidad de estas dos personas jurídicas del Tercer Sector (Bustos Gómez-Rico, M., & España, 2012). Más adelante, el art.35 CC habla de la identidad de las personas jurídicas en general (incluyendo a las asociaciones y fundaciones en tal categoría), y del nacimiento de su personalidad. En este punto, Bercovitz Rodríguez-Cano, R., & España (2013) describen a los dos tipos de personas jurídicas que motivan este TFG como personas jurídicas de existencia contingente no lucrativas, es decir, *“Su personalidad es independiente de la de los socios que la integran, como también su patrimonio, nombre y domicilio. Se rigen por*

sus Estatutos dados voluntariamente por sus creadores, (no persiguen) finalidades lucrativas, (y) requieren para su constitución procedimientos especiales” (Vázquez Iruzubieta, C., 2016). Inmediatamente después, el art.38 CC a la luz de Díez-Picazo, L. y Gullón, A. (2013), esclarece que las personas jurídicas se asimilan a las naturales en cuanto que pueden ser dueñas de derechos y obligaciones de muy diversos carices (Paz-Ares Rodríguez, C. et al., 1993). El art.39 CC, a continuación, dicta el destino que se le ha de dar a los bienes de la asociación o fundación en cuestión una vez quede extinguida (Domínguez Luelmo, A., 2010). Finalmente, el art.41 CC cierra la temática de la personalidad jurídica de asociaciones y fundaciones estableciendo las reglas de determinación del domicilio para este tipo de entidades jurídicas.

II. Explorar el valor de la personalidad jurídica asociativa en el contexto de las ONG.

La personalidad jurídica de tipo asociación se regula en la Ley Orgánica 1/2002 (LA) y es precisamente dentro de esta Ley donde se llega a vislumbrar el valor de esta modalidad de persona jurídica de modo holístico. Tanto es así que en el articulado de esta Ley Orgánica se define el derecho fundamental de asociación (art.22 CE), a la par que se regula el régimen jurídico de las propias asociaciones como personas jurídicas (Anguita Villanueva, L. A., 2016). La LA regula las asociaciones con objetivos sociales sin fines lucrativos (Muro, I. T., 1999) a las que no aplique una ley específica (López, J., & de la Serrana, G., 2003). No obstante, se permite que las asociaciones realicen actividades económicas para financiar sus fines de interés general (García Inda, A., 2003), siempre que no se proceda al reparto de dividendos (STC 5/1996). De todas formas, el derecho de asociación es libre y voluntario en sentido positivo, pero también en sentido negativo (Font, J., Gibert, J. R. M., & Lorient, M. T., 2006). Lo que significa que los asociados han de estar en línea con la filosofía y ética de la asociación respetando la legislación vigente (STC 104/1999) para perseguir democráticamente los fines de interés general en los que crean; gozando siempre del pleno derecho a disociarse amistosamente (STS 2168/2012) y sin consecuencias perjudiciales (Reverte Martínez, F. M., 2004).

Las asociaciones de la LA pueden ser constituidas por personas físicas y jurídicas con capacidad de obrar (De Salas Murillo, S., 1996) -con la excepción de los menores de edad y de los funcionarios del Estado sometidos a su regulación específica (Aguiar de Luque, L. & Elvira Perales, A., 1996-1999)-. Tanto la creación de la asociación como la toma de sus decisiones han de guiarse por el principio democrático liderado por la Asamblea General (Bustos Gómez-Rico, M., & España, 2012). Una vez se decida, en primer término, la constitución de la asociación corresponderá proceder a su inscripción en el Registro de Asociaciones oportuno (Perales, A., & Elvira, A., 2008), previa redacción de Estatutos (STS 663/2013) y Acuerdo de Constitución entre tres o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas (España, 2013). Los Estatutos sirven de norma fundamental de auto-organización interna de la asociación y los asociados (Orozco, J. D., & Núñez, C. R., 2013). Por su parte, es especialmente relevante destacar que tras el Acuerdo de Constitución (o Acta Fundacional) se puede considerar que la asociación goza de personalidad sin necesidad de registro previo (López Noguero, F., 2002), si bien es

cierto que convendrá registrar la asociación a meros efectos de publicidad y garantía con respecto a sus asociados y terceras partes.

En última instancia, el valor individual y personal que aportan las asociaciones de la LA a sus asociados se materializa en los derechos y obligaciones recogidos en sus Estatutos (González Pérez, J., Fernández Farreres, G., & España, 2002). Los deberes son eminentemente el respeto a las normas de organización interna y el cumplimiento de la legislación estatal en materia de asociaciones, mientras que sus derechos se pueden dividir “*en cuatro grandes áreas: derecho de participación activa, de información, de garantías disciplinarias y de impugnación*” (Reverte Martínez, F. M., 2004).

III. Explorar el valor de la personalidad jurídica fundacional en el contexto de las ONG.

La personalidad jurídica de tipo fundación se regula en la Ley 50/2002 (LF) y es precisamente dentro de esta Ley donde se llega a vislumbrar el valor de esta modalidad de persona jurídica. La LF se preocupa por regular el derecho fundamental de fundación (art.34 CE) y recoge los preceptos de aplicación a las fundaciones como personas jurídicas (STC 49/1988), además de atajar cuestiones prácticas relativas a las fundaciones de competencia estatal (Tomás y Valiente, F., 1995). Las fundaciones son definidas, dentro de este articulado, como organizaciones no lucrativas con patrimonio afecto a la consecución de fines de interés general que habrán de ser guiadas por la voluntad de sus fundadores (Raposo Arceo, J.J., 1999). Las fundaciones de la LF pueden ser constituidas por personas físicas y jurídicas con capacidad de obrar; siempre y cuando las primeras gocen de la capacidad de disponer gratuitamente de sus bienes *-inter vivos o mortis causa-* (Olavarría Iglesia, J., Cuñat Edo, V., & España, 2008) y las segundas hayan consensuado vía acuerdo grupal la constitución de la fundación en consonancia con sus Estatutos (Cuscó, M., 2004). En relación con este último punto, valga decir que las sociedades mercantiles y las asociaciones son las principales personalidades jurídicas que suelen optar por la creación de fundaciones (Petitbò, A., 2017). Una vez se decida, en primer término, la constitución de la fundación corresponderá proceder con el otorgamiento *ad solemnitatem* de escritura pública o testamento y la redacción de Estatutos para su inscripción posterior en el Registro de Fundaciones oportuno (González Cueto, T., & España, 2003). Es en este momento, tras la inscripción registral, cuando se dotará a la organización de plena personalidad jurídica (Palma Fernández, J.L., 1999), además de obtener efectos de publicidad y garantía con respecto a sus miembros y terceras partes (Pau Padrón, A., 1997).

El factor más relevante, o cuando menos distintivo, de las fundaciones es el patrimonio afecto entregado por el fundador a la consecución del fin de interés general que se haya propuesto (Morillo González, F., 1999). Para constituir una fundación es obligatorio aportar una dotación patrimonial inicial -30.000€- de manera duradera en el tiempo para así contar con medios suficientes para perseguir los fines fundacionales (Serrano Chamorro, M.E., 2000). Dado que la fundación posee un patrimonio propio, necesita una estructura que la haga funcionar con propósito y determinación (Nart, I., 1955). El cuerpo organizativo de la fundación, que gestionará los bienes y derechos patrimoniales, se

denomina Patronato -formado por un mínimo de tres patronos- y se guiará por los Estatutos que la voluntad del fundador haya definido (STC 49/1988). Este organismo fundacional velará por la representación colectiva de la fundación (STS 4397/2012) y la leal administración patrimonial de la fundación conjuntamente con el Protectorado (García, M. F., & Carrasco, J. M. R., 2017). Y, este es un aspecto realmente significativo puesto que el Protectorado se desmarca como organismo público protector del derecho de fundación y de la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones (STC 48/1988). Se erige, de este modo, como el organismo administrativo de ayuda y control de las fundaciones para que éstas puedan alcanzar sus propósitos más fácilmente, y bajo el control de legalidad público (Piñar Mañas, J.L., 1999).

IV. Sugerir la modalidad de personalidad jurídica idónea para constituir una ONG universitaria que fomente el emprendimiento entre estudiantes preuniversitarios.

Tras haber analizado las ventajas y desventajas de cada una de las dos personas jurídicas por excelencia dentro del Tercer Sector español, la asociación y la fundación⁷⁵, se puede concluir que la personalidad jurídica de tipo asociación es la que más certeramente se ajusta a las necesidades de la ONG universitaria para el fomento del emprendimiento entre alumnos de colegios e institutos. Son cuatro las razones principales que sitúan a la asociación, frente a la fundación, como la forma de personalidad jurídica idónea para la ONG de educación emprendedora que justifica este TFG:

i. Miembros requeridos para la creación de la ONG: la asociación exige inicialmente un mínimo de 3 personas asociadas para constituirla como persona jurídica (art.5.1 LA). Estas tres personas deberán concordar el Acuerdo de Constitución, el Acuerdo Fundacional, los Estatutos y, finalmente la inscripción de la asociación en el Registro de Asociaciones oportuno para la constituir formal y materialmente a la asociación (Perales, A., & Elvira, A., 2008). Dicha premisa asociativa de constitución irradia el afán colectivo y cooperativo que posteriormente nutrirá los intereses generales educativos por los que luche la ONG universitaria de la manera más democrática y social posible. Por el contrario, ante el silencio de la LF, la fundación únicamente requeriría de un mínimo de un sólo fundador que destinará sus bienes y/o derechos a la educación emprendedora de alumnos preuniversitarios. Obviamente, esta no sería la modalidad más adecuada dado que la filosofía de la ONG universitaria es “*desde los alumnos para los alumnos*” no “*desde un alumno para los alumnos*”, entendiendo por ello el valor del colectivo que prima sobre cualquier ventaja patrimonial.

ii. Documento requerido para la creación de la ONG e inscripción registral de la ONG: la asociación precisa del llamado Acuerdo o Acta Fundacional (art.5.2 LA) para poder ostentar la personalidad jurídica plena. Este es un documento público o privado que habrá de recoger el Acuerdo de Constitución y los Estatutos de la asociación, entre otros (art.6.1 LA), para ya poder gozar de personalidad jurídica previamente al registro de carácter declarativo (López Noguero, F., 2002). La ONG universitaria se vería beneficiada dada

⁷⁵ Referencia al capítulo “4. Comparación entre asociaciones y fundaciones” de este mismo TFG.

la eficiencia burocrática en cuanto al nacimiento de la personalidad jurídica como asociación (Reverte Martínez, F. M., 2004). Sin embargo, para el caso de la fundación haría falta escritura pública (arts.9.1, 9.2 y 9.3 LF) como requisito *ad solemnitatem* que recogiese aspectos básicos y todos aquellos que dice el art.10 LF no entren en contradicción con la Ley (González Cueto, T., & España, 2003), además de los Estatutos (Orozco, J. D., & Núñez, C. R., 2013). Una vez se hubiera otorgado la escritura pública habría que proceder inexcusablemente al registro constitutivo de la fundación para que esta se viera dotada de personalidad jurídica (arts.36 y 37 LF). Así, se ralentizaría la obtención del privilegio de la personalidad jurídica, lo cual no beneficiaría el presto arranque de la ONG para el fomento del emprendimiento preuniversitario.

iii. Patrimonio mínimo inicial de la ONG: Dado que la ONG estará integrada por alumnos universitarios se considera que el factor más valorado dentro de la organización será el capital humano, pues será este la base piramidal sobre la que se apoyen todos los esfuerzos encaminados a la satisfacción de la educación emprendedora de alumnos de colegios e institutos. De esta suerte, la aportación de un patrimonio inicial mínimo puede suponer un gran obstáculo y más si se trata de la imponente suma de 30.000€ impuesta por el art.12.1 para la creación de las fundaciones (Gálvez, P., 1995). Por ello, y debido a que la LA no exige dotación alguna, la asociación se desmarca como figura preferida para la constitución de la ONG universitaria también desde un plano patrimonial.

iv. Órganos mínimos necesarios de la ONG. Funcionamiento y control: la independencia de la actuación social de la ONG de emprendimiento es crucial para el correcto cumplimiento de sus fines y es por esta razón que un funcionamiento democráticamente orquestado de sus órganos de gobierno será el escenario deseable. La Junta Directiva y el Asamblea General de las asociaciones (art.11 LA) se regirán imperativamente por el principio democrático (Guerrero, E. C., 2015) y se bastarán ellas mismas para tomar las decisiones que consideren sin intervención exterior por parte entidades administrativas (Anguita Villanueva, L. A., 2016). No obstante, la personalidad jurídica de tipo fundación es mucho menos ventajosa en relación con las características imaginadas para la ONG de este TFG (ver anexo P), ya que su órgano directivo, el Patronato (art.14 LF), se guiará por la voluntad del fundador (Nart, I., 1955) y además se verá vigilado por un organismo público externo auditor (García, M. F., & Carrasco, J. M. R., 2017), el Protectorado (art.34 LF).

2. Futuras líneas de investigación

Existen numerosos escenarios en los que se podría aplicar el análisis jurídico expuesto en esta investigación para reflexionar legalmente sobre la personalidad jurídica de distintas ONG con variados propósitos fundacionales y tomar decisiones en consecuencia que se traduzcan en beneficio directo para la organización interesada. Sin embargo, la siguiente vertiente que despierta un mayor interés en el autor tiene que ver específicamente con las personas naturales “*juveniles*” que desean conformar ONG universitarias, o incluso escolares, para el fomento del emprendimiento, u otros fines de educación similares, a tenor del art.48 CE y de la Convención de los Derechos del Niño, de 1989. En este

particular, la aplicación del racional de este TFG a las ONG de carácter juvenil (miembros de 14-29 años de edad) resultaría interesante puesto que se presentarían matices diferenciadores con respecto a la legislación básica en materia de asociaciones y fundaciones (no-juveniles) de ámbito estatal; esto es, las opciones clásicas de personalidad jurídica de las ONG en España. El objetivo, en este caso, sería nuevamente medir la influencia de la forma de personalidad jurídica elegida y comprobar si existen ventajas relevantes teniendo en consideración las menciones que la legislación nacional realiza a propósito de las ONG de cariz juvenil (ej. Ley orgánica 1/ 1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor). Merece destacarse que en este respecto se han realizado investigaciones en torno a la persona jurídica de asociación (véanse: Reverte Martínez, F. M., 2017, Rodríguez Pérez, J. F., 2015, o Comas Rubí, F., 2010) y que sobre la persona jurídica de fundación no se ha abordado la temática juvenil de manera plena. Por ello, convendría adentrarse en esta línea de investigación en los futuros trabajos académicos que desarrolle el autor de este TFG para arrojar luz sobre la materia.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

Aguiar de Luque, L. & Elvira Perales, A. (1996-1999). *El derecho de asociación: artículo 22º en Comentarios a la Constitución española de 1978*, dirigidos por Óscar Alzaga Villaamil. -- [Madrid]: Cortes Generales [etc.]. -- T. II.

Alberich, T., Juana Minguez, A., Trías, C., Coordinadora de Asociaciones Culturales de Madrid, & Federación Española de Municipios y Provincias (2006). *Guía fácil de asociaciones: Manual de gestión: Para la creación, desarrollo y dinamización de entidades no lucrativas* (4ª act. y amp. ed.). Madrid: Dykinson.

Alli Turrillas, J. (2010). *Fundaciones y derecho administrativo*. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales.

Anguita Villanueva, L. A. (2016). *Elementos, organización y funcionamiento de las asociaciones*. Madrid: Reus.

Aranda Rodríguez, R., Díaz Romero, M.R., Goñi Rodríguez de Almeida, Mondéjar Peña, M.I. & Pérez Álvarez, M.P. (2013). *Guía de derecho civil: Teoría y práctica. T. I, Fundamentos de Derecho Civil: Derecho Civil General y Derecho de la Persona*. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters.

Arguedas, R., González, J., & Oliver, M. (2001). Introducción a la gestión financiera en entidades sin ánimo de lucro. *Madrid, Editorial Universidad Nacional de Educación a Distancia. Primera edición*.

Asociación de Academias de la Lengua Española. (2014). *Diccionario de la Lengua Española*. Madrid: Espasa.

Barea, J., & Pulido, A. (2001). El sector de instituciones sin fines de lucro en España. *CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa*, (37).

Bercovitz Rodríguez-Cano, R., & España (2013). *Comentarios al Código civil*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Berenguer Martínez, J. F., & Reverte Martínez, F. M. (1997). *Guía Práctica para Asociaciones Juveniles*. Ayuntamiento de Murcia.

Bustos Gómez-Rico, M., & España (2012). *Código civil: Comentarios y jurisprudencia* (18ª ed.). Madrid: Colex.

Cabanas Trejo, R., Prats Albentosa, L., & Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España (2009). *Inscripción y personalidad jurídica: Una lectura mercantil a la luz de la Constitución y la legislación de asociaciones*. Madrid: Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España.

Cabrero, G. R., & Carpio, C. C. (2003). *Las entidades voluntarias de acción social en España* (Vol. 9). Cáritas Española.

Caffarena Laporta, J. (1991). Artículos 35 y sig. *Comentarios del Código civil, 1*.

Caffarena Laporta, J. (1995). Comentarios a los artículos 6, 7, 8, 9, 11 y 27 a 31. *Comentarios a la ley de Fundaciones y de incentivos fiscales*, T. I, Escuela Libre. Fundación ONCE.

Caffarena Laporta, J., & España. Ministerio de Asuntos Sociales. (1991). *El régimen jurídico de las fundaciones: Estudio para su reforma*. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.

Campetella, A., Bombal, I. G., & Roitter, M. (1998). *Defining the nonprofit sector: Argentina*. Johns Hopkins University Center for Civil Society.

Canosa Usera, R. -autoría- y González Escudero, A. -actualización- (enero, 2011). Sinopsis artículo 22 [Mensaje en apartado de la Constitución Española dentro del sitio web del Congreso de los Diputados]. Recuperado de <http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=22&tipo=2>.

Capilla Roncero, F. (1984). *La persona jurídica: funciones y disfunciones*. Tecnos.

Carballeira Rivera, M. T. (2009). *Fundaciones y Administración Pública*. Barcelona: Atelier.

Carpió Mateos, F. (1972). El patrimonio de la asociación y los derechos de los asociados. *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, (491).

Cobo Gálvez, P. (1995). Comentario al artículo 10 de la LF, *Comentarios a la Ley de Fundaciones y de incentivos fiscales*. Marcial Pons.

Comas Rubí, F. (2010). Bibliografía sobre asociaciones juveniles en España. *Historia De La Educación*, 22.

Cossío, A. D. (1954). Hacia un nuevo concepto de la persona jurídica. *Anuario de Derecho civil*, 7(III).

Cuscó, M. (2004). *Comentarios a la nueva ley de fundaciones (ley 50/2002)*. S.l.: Dijusa. Recuperado de <https://app-vlex-com.biblioteca5.uc3m.es/#ES/vid/212955>.

De Castro y Bravo, F. (1972). *Temas de derecho civil*. Madrid.

De Castro y Bravo, F. (1985). *EL negocio Jurídico*, Madrid: Civitas.

De Luna, M. A. C., & De Lorenzo, R. G. (2005). El tercer sector en España: ámbito, tamaño y perspectivas. *Revista española del tercer sector*, (1).

De Luna, M. A. C. (2003). El derecho de fundación en la constitución. *CIRIEC-España, Revista De Economía Publica, Social y Cooperativa*, (47).

De Prada González, J. M^a. (1994). Aspectos Notariales de la Ley de Fundaciones, *Revista Jurídica del Notariado*, julio –septiembre 1994, núm. 11.

De Prada González, J. M^a. (1996). Los estatutos y su modificación. *Derecho Privado y Constitución*, (8).

De Priego Fernández, V., Pérez de Vargas Muñoz, J. & Universidad Rey Juan Carlos. Servicio de publicaciones. (2004). *El negocio fundacional y la adquisición de personalidad jurídica de las fundaciones*. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de Publicaciones.

De Salas Murillo, S. (1996). Notas sobre el nuevo régimen de las asociaciones de utilidad pública. *Derecho privado y Constitución*, (9).

Del Campo Arbulo, J.A. (1995). Temas polémicos del título I de la Ley y soluciones posibles, *Las Fundaciones. Su nuevo régimen jurídico, fiscal y contable*, Fundación Futuro.

Del Campo Arbulo, J.A. (1997). El destino de rentas e ingresos: Los gastos de administración. *Las fundaciones. Desarrollo Reglamentario de la ley*. Fundación Alfonso Martín Escudero. Dykinson.

Del Campo Arbulo, J.A. (2000). *La Fiscalidad de las Fundaciones y el mecenazgo*, Temas de Fundaciones, Tirant lo Blanch.

Delgado, R. A. E. (2010). Las ONG como organizaciones sociales y agentes de transformación de la realidad: Desarrollo histórico, evolución y clasificación. *Diálogos de saberes: investigaciones y ciencias sociales*, (32).

Díaz-Aguado Jalón, C. (2006). La fundación: Fines y dotación inicial. *Revista Vasca De Economía Social = Gizarte Ekonomiaren Euskal Aldizkaria*, (2).

Díaz Brito, F. J. (1996). El desarrollo del artículo 34 de la Constitución por la Ley de Fundaciones Canarias, *Derecho Privado y Constitución*, n.8, Centro de Estudios Constitucionales.

Dibós, B. B. (1988). La persona jurídica sin fin de lucro: ¿Entidades meramente altruistas o filantrópicas? (Primera Parte). *THEMIS: Revista de Derecho*, (11).

Díez Picazo, L. (1980). *Notas sobre la reforma del Código Civil en materia de patria potestad*, ADC.

Díez-Picazo, L., & Gullón, A. (2001). *Sistema de derecho civil*, vol. I, 10^a ed., Madrid: Tecnos.

Díez-Picazo, L. y Gullón, A. (2013). *Sistema de derecho civil. Volumen I. Parte general del Derecho civil y personas jurídicas*. Madrid: Tecnos.

Domínguez Luelmo, A. (2010). *Comentarios al Código civil*. Valladolid: Lex Nova.

Durán Rivacoba, R. (1996). *El negocio jurídico fundacional*. Pamplona: Aranzadi.

Durán Rivacoba, R., & Reina Tartièrre, G. (2004). *Código de asociaciones*. Pamplona: Thomson-Aranzadi.

Elvira Perales, A. (2008). A vueltas con el derecho de asociación (Comentario a las Sentencias 133 y 135/2006, ambas de 27 de abril). *Revista Española de Derecho Constitucional*, (83).

España (2013). *Asociaciones y fundaciones* (7^{ed.}, cerrada a 16 de abril de 2013 ed.). Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters.

Fernández Andrade, R. (1999). Escenarios presentes y futuros para las ONG: ¿Qué terminaremos siendo? *Desde la región*, 29.

Fernández Farreres, G. (1987). Asociaciones y constitución. *Estudio específico del artículo*, 22.

Ferrara, F. (1929). *Teoría de las personas jurídicas*. Madrid: Reus.

Ferrer Riba, J. (1984). *El procés constitutiu d'una fundació en la Llei de 3 de març de 1982 de Fundacions privades catalanes*. RJC.

Font, J., Gibert, J. R. M., & Lorient, M. T. (2006). Ciudadanos, asociaciones y activistas. En *Ciudadanos, asociaciones y participación en España* (pp. 25-46). Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Galgano, F. (2004). Concepto de Persona Jurídica, El. *Rev. Derecho del Estado*, 16.

García Añoveros, J. (1997). *La participación de la sociedad civil en la promoción de actividades de interés general. Lo público y lo privado*. Durante su ponencia en las Jornadas sobre Fundaciones organizadas por la Universidad de Cádiz en marzo de 1997.

García-Andrade, J. (1997). *La fundación: Un estudio jurídico*. Madrid: Escuela Libre Editorial.

García-Andrade Gómez, J. (2001). Algunas acotaciones al concepto formal de fundación en la constitución española. *Revista De Administración Pública*, (155).

García de Enterría, E. y Fernández T. R. (1995). *Curso de Derecho Administrativo I*, 7^a ed., Civitas.

García Inda, A. (2003). El voluntariado: recursos y normativas. *Voluntariado: la lógica de la ciudadanía*.

García, M. F., & Carrasco, J. M. R. (2017). Gobernanza en fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro. *Boletín De Estudios Económicos*, 72(220).

Garzón, C. C. (2008). Deberes en los actos de gestión al interior de una persona jurídica. *Rev. E-Mercatoria*, 7.

Gil, C. G. (2005). *Las ONG en España: de la apariencia a la realidad* (Vol. 201). Los libros de la Catarata.

Giménez-Reyna, E. (1995). *Desarrollo reglamentario de la LF*. Ponencia desarrollada en las Jornadas organizadas por la Confederación Española de Fundaciones en Madrid, 31 de mayo de 1995.

Gluck, D. G. (2010). Asociación, discriminación y constitución: Los límites entre la autonomía asociativa y el derecho de los socios -y aspirantes a serlo- a no ser discriminados. *Revista De Derecho Político*, (79).

Gómez-Montoro, Á. J. (2004). *Asociación, constitución, ley: sobre el contenido constitucional del derecho de asociación*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Gómez Gil, C. (2005). *Las ONG en España: de la apariencia a la realidad* (Vol. 201). Los libros de la Catarata.

González Cueto, T., & España (2003). *Comentarios a la ley de fundaciones: Ley 50/2002, de 26 de diciembre*. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi.

González Pérez, J., Fernández Farreres, G., & España. (2002). *Derecho de asociación: Comentarios a la ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo*. Madrid: Civitas.

Guerrero, E. C. (2015). *Manual práctico de sociedades y asociaciones civiles*. S.l.: s.n.

Huertas, A. M. (2009). El contenido esencial del derecho de asociación. Congreso de los Diputados. Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones de la Secretaría General. Departamento de Publicaciones.

Jerez, A., & Blanco, M. R. (2012). El tercer sector. Una revisión introductoria a un concepto polémico. *Sociedade em Debate*, 4(2).

Jiménez Escobar, J. (2013). Nuevas realidades en el tercer sector: Las aportaciones juridico-organizativas de las fundaciones cívicas. *REVECO. Revista De Estudios Cooperativos*, (110), 163. 10.5209/revREVE.2013.v110.

Korten, D. (1990). *Getting to the 21th century: Voluntary action and the global agenda*. West Hartford: Kumarian Press.

Lluís y Navas, J. (1967). *Derecho de asociaciones*. Barcelona: Bosch.

López-Nieto y Mallo, F. (2000). *La ordenación legal de las asociaciones: doctrina, jurisprudencia, formularios, legislación*. Dykinson.

López, J., & de la Serrana, G. (2003). Novedades introducidas por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. *Aranzadi civil-mercantil. Boletín mensual*, (49).

López Noguero, F. (2002). *Las asociaciones: Ciudadanía y participación juvenil*. Almería: Ayuntamiento de Almería. Concejalía de juventud, políticas para la igualdad y deportes.

Lucas Murillo De La Cueva, E. (1996). El derecho de asociación. *Tecnos, Madrid*.

Mañas, J. L. P. (1996). El derecho de fundación como derecho constitucional. *Revista de Derecho Privado y Constitución*, (9).

Marín López, J. J. (1994). *Legislación sobre asociaciones*, Tecnos.

Marín López, J. J. (2005). Personalidad jurídica, capacidad y responsabilidad de las asociaciones. *Asociaciones y Fundaciones. XI Jornadas de la Asociación de Profesores de derecho Civil*.

Márquez, L. M. M. (2016). El impacto de la regulación estatal en las ONG de desarrollo en España. *Revista de estudios políticos*, (171).

Márquez Márquez, A. (2003). Las fundaciones privadas y los principios constitucionales de justicia tributaria. *Crónica Tributaria*, (108).

Martín, D. (1984). La persona jurídica hoy. *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*.

Martín-Retortillo Baquer, L. (1996). *Los colegios profesionales a la luz de la Constitución*. Madrid: Civitas.

Martín Huertas, A., & España. Cortes Generales. Congreso (2009). *El contenido esencial del derecho de asociación*. Madrid: Congreso de los Diputados.

Martos, J. A. M. (1996). La inscripción registral de asociaciones en la Constitución. *Revista de estudios políticos*, (92).

Mato Pacín, M. N. (2012). Propuesta de reglamento del Consejo de la Unión Europea por el que se aprueba el estatuto de la Fundación Europea (FE). *Revista española del Tercer Sector*, (21).

Mora Alarcón, J. A. (2005). *Asociaciones civiles: Adaptado a las leyes nacionales y autonómicas (doctrina, jurisprudencia y formularios)*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Moreno Fuentes, R. (2000). Derechos fundamentales y relaciones laborales de alta dirección en una fundación constituida por una entidad pública: (ATC 206/1999, de 28 de abril). *Revista Española De Derecho Constitucional*, (60).

Morillo González, F. (1999). *El proceso de creación de una fundación*, Aranzadi.

Muro, I. T. (1999). Ley Autonómica y Derecho de Asociación. *Revista Española de Derecho Constitucional*, (55).

Nart, I. (1955). *La fundación*. RDP.

Nistal, T. A., & De Juana Mínguez, A. (2003). *Guía fácil de asociaciones*. Dykinson.

Olavarría Iglesia, J., Cuñat Edo, V., & España (2008). *Comentarios a la ley de fundaciones*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Olmedo, P., & Daniel, J. (2007). El derecho de asociación en la historia constitucional española, con particular referencia a las leyes de 1887 y 1964. *Historia constitucional*, (8).

Orozco, J. D., & Núñez, C. R. (2013). *Sociedades y asociaciones civiles*. S.l.: Ediciones Fiscales ISEF.

Pallarés Rodríguez, R. (2004). *Las asociaciones: Régimen contable y régimen fiscal*. Cizur Menor: Thomson Aranzadi.

Palma Fernández, J.L. (1999). *El registro de Fundaciones: Inscripción y dinámica registral. Manual de Fundaciones. Régimen Jurídico, fiscal y contable*. Civitas.

Pau Padrón, A. (1997). El Registro de Fundaciones, *Revista Crítica de derecho Inmobiliario*, (638).

Paz-Ares Rodríguez, C., Díez-Picazo L., Bercovitz, R, Salvador Coderch, P & España. (1993). *Comentario del Código Civil. Tomo I*, Madrid: Ministerio de Justicia.

Perales, A., & Elvira, A. (2008). A vueltas con el derecho de asociación (Comentario a las Sentencias 133 y 135/2006, ambas de 27 de abril). *Revista Española de Derecho Constitucional*, (83).

Pérez Ortega, G., Arango Serna, M. D., & Sepulveda Atehortua, L. Y. (2011). Las organizaciones no gubernamentales-ONG-: hacia la construcción de su significado. *Ensayos de Economía; Vol. 21, núm. 38 (2011); 243-260 0121-117x*.

Petitbò, A. (2017). Estructura, conducta y resultados de las fundaciones españolas. *Boletín De Estudios Económicos*, 72(220).

Piñar Mañas, J.L. (1992). *Régimen jurídico de las Fundaciones: Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo*. Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid.

Piñar Mañas, J.L. (1995). Comentarios a los artículos 32 al 39 de la LF dentro de *Comentarios a la Ley de Fundaciones y de incentivos fiscales*. Marcial Pons.

Piñar Mañas, J. L. (1996). El derecho de fundación como derecho fundamental. *Derecho Privado y Constitución*, (9).

Piñar Mañas, J.L. (1999). El Protectorado de fundaciones: situación actual y Propuestas de reforma. *Manual de Fundaciones. Régimen Jurídico, fiscal y contable*. Civitas.

Puig Ferriol, L. (1983). *El patrimonio fundacional en la ley de fundaciones catalanas*, Anuario de Derecho Civil.

Raposo Arceo J.J. (1999). La Constitución de Fundaciones en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre: Análisis del Capítulo II del Título I (arts.6-11)", *Manual de Fundaciones. Régimen Jurídico, fiscal y contable*. Civitas.

Real Pérez, A. (1997). Modificación, fusión y extinción de las fundaciones. *Las fundaciones. Desarrollo Reglamentario de la ley*. Fundación Alfonso Martín Escudero. Dykinson.

Rebollo Álvarez-Amandi, A. (1994). *La nueva Ley de Fundaciones*, Centro de Estudios Financieros.

Reverte Martínez, F. M. (2004). *La nueva Ley reguladora del Derecho de Asociación y su incidencia sobre las Asociaciones Juveniles* (Tesis doctoral, Universidad de Murcia). Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=564426>.

Reverte Martínez, F. M. (2017). Las asociaciones juveniles en España. Una aportación innovadora al panorama jurídico internacional como herramienta para el fomento de la participación de los jóvenes. *Cuadernos de Investigación en Juventud*, (2).

Roca Sastre, R. M. (1976). *Libro-homenaje a Ramón M^a roca sastre*. Madrid: Junta de Decanos de los Colegios Notariales.

Rodríguez Pérez, J. F. (2015). Munilla petreña, I. et al. (2014): ¿Y si no estuvieran? las asociaciones juveniles en la superación de contextos de riesgo social, madrid: Fundación sociedad protectora de los niños. *Foro De Educación*, 13(18).

Roitter, M. M. (2005). El tercer sector como representación topográfica de la sociedad civil. *Democracia post liberal*.

Ruiz, V. (2004) *Organizaciones comunitarias y gestión asociada. Una estrategia para el desarrollo de ciudadanía emancipada*. Buenos Aires: Paidós. Tramas Sociales.

Ruiz-Navarro, J.L. -autoría-, Sieira, S. -1ª actualización- y Rastrollo, A. -2ª actualización- (febrero, 2017). Sinopsis artículo 34 [Mensaje en apartado de la Constitución Española dentro del sitio web del Congreso de los Diputados]. Recuperado de <http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=34&tipo=2>. Sajardo Moreno, A., & Chaves, R. (2006). Balance y tendencias en la investigación sobre Tercer Sector no lucrativo. Especial referencia al caso español. *Ciriec-España, revista de economía pública, social y cooperativa*, (56).

Ruiz Olabuénaga, J. I. (2006). *El sector no lucrativo en España*. Red CIRIEC.

Salamon, L. M. (1993). *The global associational revolution: The rise of the third sector on the world scene*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University, Institute for Policy Studies.

Salamon, L. M., & Anheier, H. K. (1996). *Defining the Nonprofit Sector: The United States*. Johns Hopkins Institute for Policy Studies.

Salas Carceller, A. (2009). *Código civil: Comentarios y jurisprudencia*. Madrid: Sepín.

Salleles Climent, J.R. & Verdera Server, R. (1997). *El Patronato de la Fundación*. Aranzadi.

Sánchez Saudinós, J. M. (1996). *Los colegios profesionales en el ordenamiento constitucional: Colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas en el derecho público español*. Madrid: Boletín Oficial del Estado.

Santamaría Pastor, J. A. (2001). Comentario al art.22. *Comentarios a la Constitución, Civitas, Madrid*.

Senent Vidal, M. J., & Fajardo García, G. (2006). Aspectos relevantes de la investigación jurídica en economía social. *CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa*, (56).

Serrano Chamorro, M.E. (2000). *Las Fundaciones: Dotación y Patrimonio*.

Steinberg, R. (1997). Overall evaluation of economic theories. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 8(2).

Theunis, S. (1992). *Non-governmental Development Organizations of Developing Countries. And the South Smiles*. Holanda: Kluwe Academic Publishers.

Tomás y Valiente, F. (1995). *Estudios previos* en la obra colectiva *Comentarios a la ley de Fundaciones y de incentivos fiscales*, Colección Solidaridad, Fundación ONCE, Marcial Pons.

Ubillos, J. M. B. (1997). *Libertad de asociación y derechos de los socios*. Universidad, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico.

Vaittier Fuenzalida, C. (1997). *Las nuevas liberalidades de mecenazgo*, ADC julio-septiembre 1997.

Valero Agúndez, U. (1969). *La fundación como forma de empresa*. Universidad de Valladolid.

Vázquez Iruzubieta, C. (2016). Comentario al artículo 28 del Código Civil. *Comentarios a los artículos del Código Civil*.

Vidal, I. (febrero, 2006). *Las Entidades Sin Ánimo de Lucro en el Siglo XXI* (Lección impartida por la Profesora Isabel Vidal en el marco de la I Sesión Presencial de la sexta edición en modalidad a distancia del Master en Economía Social y Dirección de las Entidades sin ánimo de lucro de la Universidad de Barcelona). Recuperado de http://files.practicasdeclase.webnode.es/200000152-37d2638ccb/Empresas_sin_%20animo_lucro.pdf.

Villarroya, A. A. (2008). Articulación del tercer sector en España. *Revista Española del Tercer Sector*, (10).

Weber, M. (1964). *Economía y Sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica.

Weisbrod, B. A. (1975). *Toward a theory of the voluntary non-profit sector in a three-sector economy*.

Portales de Derecho y buscadores de jurisprudencia

Aranzadi Instituciones

Aranzadi-Portal de Revistas

Dialnet

Dialnet-UC3M

Google Académico

International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)

ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades

La Ley. Portal de Revistas-e

La Ley - Smarteca. Portal de revistas

Tirant Asesores

Tirant Libros-e

Tirant Online

vLex Global - General Edition

ANEXO

Índice de abreviaturas

Art.	Artículo
Arts.	Artículos
AGE	Administración General del Estado
CC	Código Civil
CCom	Código de Comercio
CP	Código Penal
CE	Constitución Española
Ej.	Ejemplo
LA	Ley vigente de Asociaciones
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LF	Ley vigente de Fundaciones
Núm.	Número
OSAL	Organización Sin Ánimo de Lucro
ONG	Organización No Gubernamental
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TFG	Trabajo de Fin de Grado
TFM	Trabajo de Fin de Máster
TC	Tribunal Constitucional
TS	Tribunal Supremo

Normativa

Código Civil («BOE» núm. 206, de 25 de julio de 1889).

Constitución española (BOE núm.311, de 29 de diciembre de 1978).

Dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley de Fundaciones de 9 de julio de 2002 (1636/2002, Presidencia).

Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 («BOE» núm. 313, de 31 de diciembre de 1990).

Ley 7/1997, de 18 de junio, de Asociaciones («BOE» núm. 176, de 24 de julio de 1997).

Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud («BOE» núm. 100, de 26 de abril de 1997).

Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio («BOE» núm. 136, de 7 de junio de 1991).

Ley 23/1982, de 16 de junio, del Patrimonio Nacional («BOE» núm. 148, de 22 de junio de 1982).

Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias («BOE» núm. 311, de 28 de diciembre de 2013).

Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general («BOE» núm. 282, de 25 de noviembre de 1994).

Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 («BOE» núm. 307, de 24 de diciembre de 1987).

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones («BOE» núm. 276, de 18 de noviembre de 2003).

Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. («BOE» núm. 247, de 15 de octubre de 2015).

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo («BOE» núm. 307, de 24 de diciembre de 2002).

Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal («BOE» núm. 11, de 13 de enero de 1982).

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social («BOE» núm. 313, de 31 de diciembre de 1998).

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones («BOE» núm. 310, de 27 de diciembre de 2002).

Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 («BOE» núm. 310, de 27 de diciembre de 2007).

Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, para su ejercicio en los ámbitos penal y civil («BOE» núm. 3, de 3 de enero de 1979).

Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones («BOE» núm. 311, de 28 de diciembre). Derogada.

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil («BOE» núm. 15, de 17 de enero de 1996).

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación («BOE» núm. 73, de 26 de marzo de 2002).

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («BOE» núm. 157, de 2 de julio de 1985).

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («BOE» núm. 281, de 24 de noviembre de 1995).

Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio («BOE» núm. 289, de 16 de octubre de 1885).

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil («BOE» núm. 206, de 25 de julio de 1889).

Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, por el que se establecen los requisitos y procedimiento para solicitar ayudas para fines de interés social, derivadas de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas («BOE» núm. 48, de 25 de febrero de 1989).

Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, por el que se regulan los fines de interés social de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas («BOE» núm. 180, de 28 de julio de 1988).

Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de asociaciones («BOE» núm. 306, de 23 de diciembre de 2003).

Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública («BOE» núm. 11, de 13 de enero de 2004).

Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades («BOE» núm. 252, de 21 de octubre de 1982).

Jurisprudencia

Sentencia del Tribunal Constitucional 98/2013, de 23 de abril de 2013.

Sentencia del Tribunal Constitucional 120/2011, de 6 de julio de 2011.

Sentencia del Tribunal Constitucional 135/2006, de 27 de abril de 2006.

Sentencia del Tribunal Constitucional 341/2005, de 21 de diciembre de 2005.

Sentencia del Tribunal Constitucional 104/1999, de 14 de junio de 1999.

Sentencia del Tribunal Constitucional 173/1998, de 23 de julio de 1998.

Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1996, de 16 de enero de 1996.

Sentencia del Tribunal Constitucional 56/1995, de 6 de marzo de 1995.

Sentencia del Tribunal Constitucional 218/1989, de 21 de diciembre de 1989.

Sentencia del Tribunal Constitucional 218/1988, de 22 de noviembre de 1988.

Sentencia del Tribunal Constitucional 49/1988, de 22 de marzo de 1988.

Sentencia del Tribunal Constitucional 48/1988, de 22 de marzo de 1988.

Sentencia del Tribunal Constitucional 148/1987, de 28 de septiembre de 1987.

Sentencia del Tribunal Constitucional 85/1986, de 25 de junio de 1986.

Sentencia del Tribunal Constitucional 67/1985, de 24 de mayo de 1985.

Sentencia del Tribunal Constitucional 18/1984, de 7 de febrero de 1984.

Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981, de 13 de febrero de 1981.

Sentencia del Tribunal Supremo 1641/2017, de 26 de abril de 2017.

Sentencia del Tribunal Supremo 116/2017, de 20 de enero de 2017.

Sentencia del Tribunal Supremo 2871/2016, de 15 de junio de 2016.

Sentencia del Tribunal Supremo 2137/2016, de 18 de mayo de 2016.

Sentencia del Tribunal Supremo 967/2016, de 15 de marzo de 2016.

Sentencia del Tribunal Supremo 663/2013, de 5 de febrero de 2013.

Sentencia del Tribunal Supremo 4397/2012, de 18 de junio de 2012.

Sentencia del Tribunal Supremo 2168/2012, de 26 de marzo de 2012.

Sentencia del Tribunal Supremo 7323/2011, de 14 de noviembre de 2011.

Sentencia del Tribunal Supremo 6576/2011, de 27 de septiembre de 2011.

Sentencia del Tribunal Supremo 1811/2011, de 7 de marzo de 2011.

Sentencia del Tribunal Supremo 5977/2009, de 29 de septiembre de 2009.

Sentencia del Tribunal Supremo 894/2011, de 23 de febrero de 2009.

Sentencia del Tribunal Supremo 596/2009, de 17 de febrero de 2009.

Sentencia del Tribunal Supremo 5306/1995, de 26 de octubre de 1995.

Sentencia del Tribunal Supremo 2532/1992, de 24 de marzo de 1992.

Sentencia del Tribunal Supremo 1288/1983, de 22 de marzo de 1983.

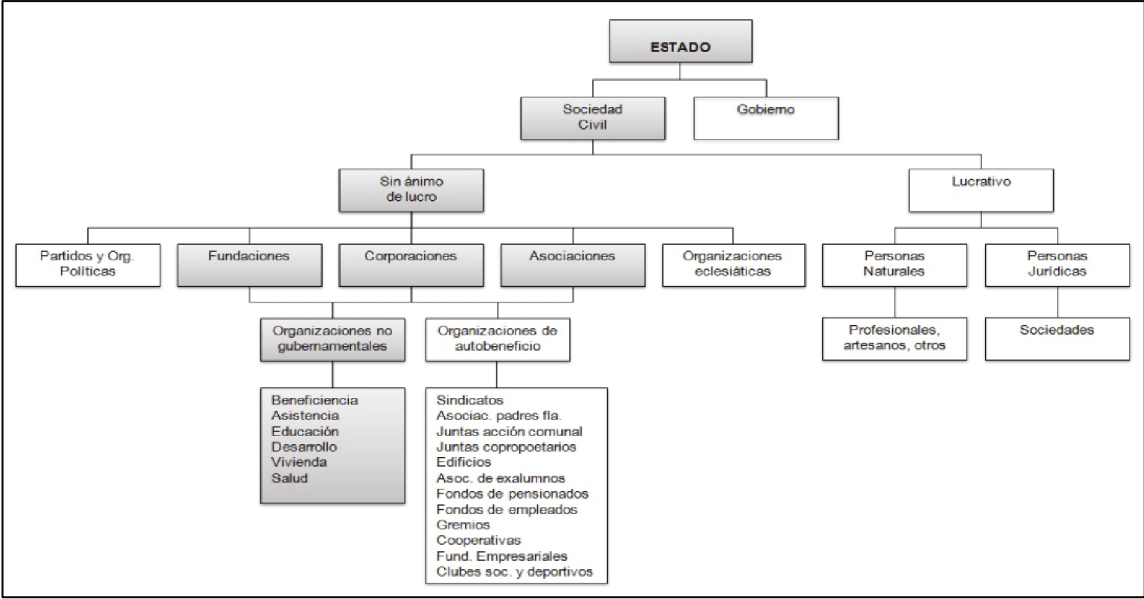
Misceláneo

Anexo A: Tabla sobre tipos empíricos de ONG.

Tabla 1. Tipos empíricos de ONG			
Origen	Actividades	Generaciones	Financiación
Religiosas	Acción directa	Primera generación o asistencialistas	Fondos particulares
Político-sindicales	Intermediarias	Segunda generación o desarrollistas	Fondos públicos
Solidarias	Estudio, análisis e investigación	Tercera generación o de paternariado y denuncia Social	Fondos de empresas privadas
Internacionales	Defensa de los derechos humanos	Cuarta generación o de empoderamiento	Fondos de ONG u organizaciones sin ánimo de lucro
Universitarias			
Culturales			
Ambientalistas			

Fuente: Delgado, R.A.E. (2010), a partir de Korten, D. (1990), y Theunis, S. (1992).

Anexo B: Esquema de las ONG y OSAL en el entramado público-administrativo.



Fuente: Pérez Ortega, G., Arango Serna, M. D., & Sepulveda Atehortua, L. Y. (2011).

Anexo C: Explicación del marco del Tercer Sector mediante contraposición.

QUE SI SOMOS	QUE NO SOMOS
Organización Civil	Grupos espontáneos Gubernamentales
Afán de servicios a terceros	Instituidos para servir a los asociados u obtener beneficios para ellos (cooperativas o grupos de base)
Reinvertimos las ganancias en las actividades (sin ánimo de lucro)	Empresas cuyo objetivo es producir incremento patrimonial para los dueños
Motivación abierta, solidaria o altruista	Organización de fachada de otros

Fuente: Fernández Andrade, R. (1999).

Anexo D: Regulación de asociaciones y fundaciones de ámbito estatal.

Objeto	Normativa
<i>Legislación básica de derechos y obligaciones</i>	— Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones (BOE 311 de 28 de diciembre). Derogada. — Ley 30/1994, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general. — Ley del Voluntariado de 1996 (6/1996). — Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (BOE 73 de 26 de marzo de 2002). — Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
<i>Incentivos para su creación y su consolidación (estímulos fiscales, subvenciones y fomento del voluntariado)</i>	— Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. — Ley 33/1987 de Presupuestos del Estado para 1988, disposición adicional Quinta. — Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, por el que se regulan los fines de interés social a los que puede afectarse la asignación tributaria. — Real Decreto 195/1989, por el que se establecen los requisitos y procedimientos para fines de interés social, derivados de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. — Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, 19/1991 de 6 de junio. — Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo. — Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 276 de 18 de noviembre de 2003). — Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos. — Generales del Estado para el año 2008.
<i>Desarrollo del marco normativo sobre derechos y obligaciones</i>	— Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de asociaciones (BOE 306 de 23 de diciembre de 2003). — Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública (BOE 11 de 13 de enero de 2004).

Fuente: Márquez, L. M. M. (2016).

Anexo E: Modelo de acta fundacional de asociaciones para personas físicas y jurídicas.

ACTA FUNDACIONAL

(Acta válida para la constitución de asociaciones cuyos promotores sean personas físicas)

Reunidos en _____, el día _____ de _____ de _____, a las _____ horas, las personas ⁽¹⁾ que a continuación se detallan:

1.- Nombre _____, Apellidos _____
Nacionalidad _____, N.I.F. _____, con domicilio en
Código Postal _____ Municipio/Localidad _____,
Provincia _____ c/ _____
_____, n.º _____,

2.- Nombre _____, Apellidos _____
Nacionalidad _____, N.I.F. _____, con domicilio en
Código Postal _____ Municipio/Localidad _____,
Provincia _____ c/ _____
_____, n.º _____,

3.- Nombre _____, Apellidos _____
Nacionalidad _____, N.I.F. _____, con domicilio en
Código Postal _____ Municipio/Localidad _____,
Provincia _____ c/ _____
_____, n.º _____,

4.- _____

Acuerdan:

1º Constituir una asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación que se denominará ⁽²⁾: _____

2º Aprobar los Estatutos que se incorporan a este Acta Fundacional como anexo, por los que se va a regir la entidad, que fueron leídos en este mismo acto y aprobados por unanimidad de los reunidos.

3º Designar a la Junta Directiva de la entidad, cuya composición de cargos es la siguiente ⁽³⁾:

- Presidente/a: _____
- Secretario/a: _____
- _____
- _____

4º Consentir a la Administración encargada de la inscripción registral para que sean comprobados los datos de identidad de los firmantes (RD 522/2006, de 28 de abril) ⁽⁴⁾

(1) Mínimo tres personas físicas

(2) La denominación deberá coincidir exactamente con la que conste en los Estatutos

(3) Los cargos de Presidente y Secretario son obligatorios y deberán designarse de entre los promotores. Podrán añadirse otros cargos.

(4) Si no se presta el consentimiento, debe aportarse fotocopia del Documento Nacional de Identidad

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las _____ horas del día de la fecha.

1.- D./DÑA.

2.- D./DÑA.

3.- D./DÑA.

N.I.F.

N.I.F.

N.I.F.

FDO.:

FDO.:

FDO.:

ACTA FUNDACIONAL

(Acta válida para la constitución de asociaciones cuyos promotores sean personas jurídicas)

Reunidos en _____, el día _____ de _____ de _____,
a las _____ horas, las personas ⁽¹⁾ que a continuación se detallan:

Denominación _____
Nacionalidad _____, N.I.F. _____, con domicilio en
Código Postal _____ Municipio/Localidad _____,
Provincia _____ c/ _____
_____, nº _____, representada por:
Nombre _____, Apellidos _____
Nacionalidad _____, N.I.F. _____, con domicilio en
Código Postal _____ Municipio/Localidad _____,
Provincia _____ c/ _____
_____, nº _____,

1.- Denominación _____
Nacionalidad _____, N.I.F. _____, con domicilio en
Código Postal _____ Municipio/Localidad _____,
Provincia _____ c/ _____
_____, nº _____, representada por:
Nombre _____, Apellidos _____
Nacionalidad _____, N.I.F. _____, con domicilio en
Código Postal _____ Municipio/Localidad _____,
Provincia _____ c/ _____
_____, nº _____,

2.- Denominación _____
Nacionalidad _____, N.I.F. _____, con domicilio en
Código Postal _____ Municipio/Localidad _____,
Provincia _____ c/ _____
_____, nº _____, representada por:
Nombre _____, Apellidos _____
Nacionalidad _____, N.I.F. _____, con domicilio en
Código Postal _____ Municipio/Localidad _____,
Provincia _____ c/ _____
_____, nº _____,

3.- _____.

Acuerdan:

1º Constituir una asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación que se denominará ⁽²⁾: _____

2º Aprobar los Estatutos que se incorporan a este Acta Fundacional como anexo, por los que se va a regir la entidad, que fueron leídos en este mismo acto y aprobados por unanimidad de los reunidos.

(1) Mínimo tres personas jurídicas

(2) La denominación deberá coincidir exactamente con la que consten en los Estatutos

3º Designar a la Junta Directiva de la entidad, cuya composición ⁽³⁾ cargos es la siguiente
(4):

- **Presidente/a:**

Denominación: _____

Representada por: _____

- **Secretario/a:**

Denominación: _____

Representada por: _____

- _____

- _____

4º Consentir a la Administración encargada de la inscripción registral para que sean comprobados los datos de identidad de los firmantes (RD 522/2006, de 28 de abril) (4)

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las _____ horas del día de la fecha.

1.- D./DÑA.

2.- D./DÑA.

3.- D./DÑA.

N.I.F.

N.I.F.

N.I.F.

FDO. :

FDO.:

FDO.:

(3) Los cargos de Presidente y Secretario son obligatorios y deberán designarse de entre los promotores. Podrán añadirse otros cargos.

(4) Si no se presta el consentimiento, debe aportarse fotocopia del Documento Nacional de Identidad

Fuente: Ministerio del Interior. Registro de Asociaciones. Formularios.

La Asociación tiene como fines: _____

Artículo 8. Convocatorias.

Artículo 9. Adopción de acuerdos.

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurren a ella un tercio de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto.

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones.

Será necesaria la mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de estas, para la:

- a) Disolución de la entidad.
- b) Modificación de Estatutos, incluido el cambio de domicilio social.
- c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.
- d) Remuneración de los miembros de la Junta Directiva.

Artículo 10. Facultades.

Son facultades de la Asamblea General:

- a) Aprobar la gestión de la Junta Directiva.
- b) Examinar y aprobar las cuentas anuales.
- c) Elegir a los miembros de la Junta Directiva.
- d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.
- e) Aprobar la disolución de la Asociación.
- f) Modificar los Estatutos, incluido el cambio de domicilio social.
- g) Disponer o enajenar los bienes.
- h) Aprobar, en su caso, la remuneración de los miembros de la Junta Directiva.
- i) Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social.

CAPITULO III JUNTA DIRECTIVA

Artículo 11. Composición.

La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada necesariamente por un Presidente/a y un Secretario/a.

También podrán formar parte de la Junta Directiva el Vicepresidente, el Tesorero y los Vocales que se determinen.

(Sólo podrán formar parte de la Junta Directiva los asociados, siempre que sean mayores de edad, estén en pleno uso de los derechos civiles y no estén incurso en motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. Iguaes requisitos, excepto la condición de socio, deberán reunir las personas físicas que actúen en representación de los cargos que sean personas jurídicas)

Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Éstos serán designados y revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá una duración de _____ años.

(En caso de recibir retribuciones en función del cargo, se hará constar expresamente tal circunstancia en los Estatutos)

Artículo 12. Reuniones.

La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente/a y a iniciativa o petición de _____ de sus miembros. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos. En caso de empate, el voto del Presidente/a será de calidad.

Artículo 13. Facultades.

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general, a todos los actos propios de las finalidades de la Asociación, siempre que no requieran, según estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.

Son facultades particulares de la Junta Directiva:

- a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos.
- b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
- c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y las cuentas anuales.
- d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.
- e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación.
- f) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General de socios.

Artículo 14. Presidente/a.

El Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones: representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o privados; convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra; ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia; adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.

Artículo 15. Vicepresidente/a.

El Vicepresidente/a sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá sus mismas atribuciones.

Artículo 16. Secretario/a.

El Secretario/a tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los libros de la Asociación legalmente establecidos y el fichero de asociados, y custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen las comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles a los Registros correspondientes, así como el cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que legalmente correspondan.

Artículo 17. Tesorero/a.

El Tesorero/a recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente/a.

Artículo 18. Vocales.

Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta les encomiende.

Artículo 19. Régimen de bajas y suplencias.

Los miembros podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva y por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas. Las vacantes que por estos motivos se produzcan serán cubiertas provisionalmente por los demás miembros hasta la elección definitiva por la Asamblea General convocada al efecto.

También podrán causar baja por expiración del mandato. En este caso continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la aceptación de los que les sustituyan.

CAPITULO IV SOCIOS/AS

Artículo 20. Requisitos.

Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas con capacidad de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación.

Artículo 21. Clases.

Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios/as:

- a) Promotores o fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la Asociación.
- b) De número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Asociación.
- c) De honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a tal distinción. El nombramiento de los socios de honor corresponderá a la ____ (Junta Directiva o Asamblea General).

Artículo 22. Baja.

Los socios/as causarán baja por alguna de las causas siguientes:

- a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva.
- b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer ____ cuotas periódicas.

(Se podrá indicar un número concreto de cuotas)

Artículo 23. Derechos.

Los socios/as fundadores y de número tendrán los siguientes derechos:

- a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines.
- b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener.
- c) Participar en las Asambleas con voz y voto.
- d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos.
- e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación.
- f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de los fines de la Asociación.

Artículo 24. Deberes.

Los socios/as fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones:

- a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta Directiva.
- b) Abonar las cuotas que se fijen.
- c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.
- d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.

Artículo 25. Derechos y deberes de los socios de honor.

Los socios/as de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y de número a excepción de las previstas en los apartados b) y d), del artículo anterior. Asimismo, tendrán los mismos derechos a excepción de los que figuran en los apartados c) y d) del artículo 23, pudiendo asistir a las asambleas sin derecho de voto.

CAPÍTULO V REGIMEN ECONÓMICO

Artículo 26. Recursos económicos.

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la Asociación serán los siguientes:

- a) Las cuotas de socios/as, periódicas o extraordinarias.
- b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte de los asociados o de terceras personas.
- c) Cualquier otro recurso lícito.

Artículo 27. Patrimonio.

El patrimonio inicial de la Asociación es de _____ euros.

(Se podrá indicar que la Asociación, al momento de la constitución, carece de patrimonio)

Artículo 28. Duración del ejercicio.

El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el _____ de cada año.

(Se indicará el día y mes del cierre del ejercicio económico)

CAPITULO VI DISOLUCIÓN

Artículo 29. Disolución.

La Asociación se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de los presentes Estatutos.

Artículo 30. Liquidación y destino del remanente.

En caso de disolución se nombrará una comisión liquidadora. Una vez extinguidas las deudas, el sobrante líquido, en su caso, se destinará para fines que no desvirtúen la naturaleza no lucrativa de la Asociación.

En _____, a _____ de _____ de _____

(FIRMAS de todos los miembros promotores que figuren como otorgantes del Acta Fundacional. Podrán firmar también en el margen de cada una de las hojas de los Estatutos).

D./DÑA. _____ D./DÑA. _____
NIF: _____ NIF: _____

FDO: _____ FDO: _____

D./DÑA. _____ D./DÑA. _____
NIF: _____ NIF: _____

FDO: _____ FDO: _____

Fuente: Ministerio del Interior. Registro de Asociaciones. Formularios.

Anexo G: Modelo de solicitud de Inscripción en el Registro de Asociaciones.



MINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
ASOCIACIONES, ARCHIVOS Y
DOCUMENTACIÓN
Registro Nacional de Asociaciones

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIONES

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos / Razón Social

DNI/NIF/NIE/PASAPORTE

Nacionalidad

Actúa en calidad de promotor/representante

2. DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES

Avenida/Calle/Plaza

Número Bloque Portal Piso Puerta

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>	Otros datos: urbanización, colonia, barrio, parroquia...
----------------------	--

Municipio

Provincia

Código Postal

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Teléfono

Dirección correo electrónico

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

SOLICITA:

3. DATOS DE LA ASOCIACIÓN A INSCRIBIR

Denominación exacta

Domicilio

Avenida/Calle/Plaza

Número Bloque Portal Piso Puerta

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>	Otros datos: urbanización, colonia, barrio, parroquia...
----------------------	--

Municipio

Provincia

Teléfono

Código Postal

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Dirección de Correo Electrónico

Código de actividad de la asociación (Ver art.24 y Anexo del RD 949/2015, de 23 de octubre). Indique tres dígitos



MINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
ASOCIACIONES, ARCHIVOS Y
DOCUMENTACIÓN
Registro Nacional de Asociaciones

4. DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD (Rellene con una X los documentos que se aportan)

- ☐ Acta Fundacional
- ☐ Estatutos
- ☐ Justificante del abono de la tasa
- ☐ Personas jurídicas: Certificado de acuerdo de voluntad de constituir asociación con designación de representante
- ☐ Fotocopia DNI, NIF, NIE o pasaporte (ver punto 5)
- ☐ Otros

Los documentos destacados en negrita son obligatorios.

Puede obtener modelos orientativos en:

<http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/asociaciones/modelos-para-inscripciones-en-el-registro-nacional>

5. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS IDENTIFICATIVOS (sólo DNI)

☐ AUTORIZO la consulta de mis datos de identificación personal en la Plataforma de Intermediación de Datos, con garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de la Inscripción Registral cuya tramitación se solicita.

En caso de no autorizar la consulta, marque la siguiente casilla ☐ y presente los documentos que acrediten su identidad.

6. AUTORIZO A SER NOTIFICADO POR CORREO ELECTRÓNICO ☐ (Sólo para usuarios dados de alta en el sistema de notificaciones de la Administración General del Estado www.notificaciones.060.es)

Lugar y Fecha

Firma

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES
C/ AMADOR DE LOS RÍOS, 7
28010 - MADRID

Fuente: Ministerio del Interior. Registro de Asociaciones. Formularios.

Anexo H: Registro Nacional de Asociaciones. Guía práctica.



**REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES Y
SERVICIO DE UTILIDAD PÚBLICA
Subdirección General de Asociaciones,
Archivos y Documentación
Secretaría General Técnica**



RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ASOCIACIONES

La Constitución española reconoce en su artículo 22 el derecho de asociación. Este artículo ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (LO 1/2002), el Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones, el Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción registral de asociaciones juveniles, y el Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.

CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE LAS ASOCIACIONES

Las asociaciones se constituyen por acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas (en las asociaciones juveniles tanto los promotores como los socios son personas físicas con edades comprendidas entre los 14 y los 29 años).

Las federaciones y uniones se constituyen por acuerdo de tres o más asociaciones. Las confederaciones se constituyen por acuerdo de tres o más federaciones.

El acuerdo de constitución, que incluirá la aprobación de los Estatutos, se formaliza mediante acta fundacional, en documento público o privado.

Las asociaciones (*) deberán inscribirse en el correspondiente Registro, general o especial, a los solos efectos de publicidad.

COMPETENCIAS DEL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES (RNA)

El RNA es un registro general que tiene por objeto la inscripción de las asociaciones de ámbito estatal y de las que desarrollen principalmente sus funciones en un ámbito territorial que exceda al de una comunidad autónoma, siempre que se trate de asociaciones que no tengan fin de lucro y no estén sujetas a regímenes asociativos específicos. También se inscribirán las delegaciones en España de las asociaciones extranjeras que desarrollen actividades en territorio español de forma estable.

Inscripciones en el RNA:

- En el Registro se inscribirán, a solicitud de los interesados, la constitución de asociaciones de federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones; la transformación de las asociaciones; las modificaciones de estatutos; la identidad de los titulares de la junta directiva u órgano de representación; la apertura y cierre de delegaciones y establecimientos; la incorporación y separación de asociaciones a federaciones, confederaciones y uniones, o de cualquiera de ésta a entidades internacionales; la fusión de asociaciones; la disolución de las asociaciones y las delegaciones en España de asociaciones extranjeras.
- Se inscribirán de oficio las inscripciones ordenadas por resolución judicial firme y las relativas a la declaración y revocación de la utilidad pública de las asociaciones de ámbito estatal.

- La inscripción adopta la forma de **Resolución** de la Secretaría General Técnica, que será notificada al solicitante.
- El **plazo** de resolución es de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud.
- La denegación de la inscripción se produce cuando la entidad no cumple los requisitos legales, no está incluida en el ámbito de aplicación de la LO 1/2002 o no tiene la naturaleza de asociación, así como en los casos de ilicitud penal en su constitución o actividad.

<http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones/inscripciones-registrales-de-las-asociaciones>

Denominación de la asociación

- La denominación no puede coincidir o asemejarse de manera que pueda inducir a confusión con ninguna previamente inscrita ni con otras entidades preexistentes:
<http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones/inscripciones-registrales-de-las-asociaciones/normas-sobre-denominaciones-de-las-asociaciones>
- En el **Fichero de denominaciones de asociaciones** se puede verificar si el nombre a inscribir –exacto o similar– ya se encuentra registrado. El contenido del Fichero puede consultarse en la página web del Ministerio del Interior:
<http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones/consulta-del-fichero-de-denominaciones>

CÓMO SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN DE UNA ASOCIACIÓN EN EL RNA

- **Solicitud** firmada, al menos, por uno de sus promotores (o su representante).
- **Justificante** de haber abonado la tasa legalmente prevista.

A la solicitud se acompañará:

- **Acta fundacional**, que ha de contener los datos identificativos de los promotores (nombre y apellidos o denominación si es una entidad, número del documento de identidad, la nacionalidad y el domicilio); la voluntad de constituir la asociación; su denominación; la elección de la Junta directiva; la aprobación de los Estatutos; lugar, fecha y firmas de los promotores o sus representantes.
- **Estatutos** con el contenido que establece el artículo 7 de la LO 1/2002, fecha y firma de los socios promotores o de sus representantes.

CÓMO SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

- **Solicitud** firmada por un representante de la asociación.
- **Justificante** de haber abonado la tasa legalmente prevista.

A la solicitud se acompañará:

- **Acta** de la Asamblea General, o certificado del acta, que acordó la modificación estatutaria firmada por los representantes de la asociación.
- **Nuevos Estatutos** firmados por los representantes de la asociación en los que se haga constar, mediante diligencia extendida al final de los mismos, que han quedado redactados con la inclusión de las modificaciones acordadas en la Asamblea General, indicando la fecha en que acordó la modificación.
- **Certificado** de la composición de la Junta Directiva, si hubiera sufrido alguna modificación con respecto a la anteriormente inscrita.

CÓMO SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La asociación debe comunicar al RNA cualquier incidencia que altere la composición de la Junta Directiva.

Documentos a presentar:

- **Solicitud** firmada por uno de los representantes de la asociación.
- **Acta** de la reunión, o certificado del acta, por la que se haya elegido a los titulares de la Junta directiva, que ha de contener los nombres, apellidos, nacionalidad, domicilio, número de documento de identidad, la fecha de nombramiento y las firmas de los titulares vigentes. También se requerirán las firmas de los titulares salientes o, en su defecto, justificación sobre la imposibilidad de aportarlas.

La inscripción de los titulares de la Junta directiva está exenta del pago de la tasa.

PUBLICIDAD DEL RNA: OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS Y LISTADOS

Documentos a presentar:

- **Solicitud** en la que figuren los datos de identificación del solicitante (nombre, número de identificación fiscal, domicilio, número de teléfono y firma) y los contenidos sobre los que verse la solicitud.
- **Justificante** de haber abonado la tasa legalmente prevista.

DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DE LAS ASOCIACIONES

Requisitos que deben cumplir las asociaciones para ser declaradas de utilidad pública

- Se recogen en el artículo 32 de la LO 1/2002, entre ellos, que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, que su actividad no beneficie exclusivamente a sus asociados y que se encuentren inscritas en el Registro correspondiente al menos desde los dos años anteriores a la presentación de la solicitud.

Documentos a presentar

- Solicitud con los datos de identificación del solicitante (nombre, apellidos, NIF o documento equivalente) y los de la entidad a la que representa (denominación exacta, domicilio social, NIF, número y fecha de inscripción en el registro). También debe incluir las razones de la solicitud y un informe de objetivos que justifiquen la concesión de la mención, con especial referencia a las actividades de interés general.
- Memorias de actividades correspondientes a los dos ejercicios económicos anuales precedentes, firmadas por todos los miembros de la Junta directiva. **Deberán presentarse en el modelo oficial aprobado por Orden INT/1089/2014, de 11 de junio.**
- Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados.
- Certificaciones de estar al corriente de pago de obligaciones fiscales y con la Seguridad Social o autorización para su consulta.
- Copia compulsada, en su caso, del alta en el epígrafe correspondiente del impuesto sobre actividades económicas.
- Certificación del acuerdo del órgano competente para solicitar la declaración.

Resolución

- La declaración de utilidad pública adopta la forma de **Orden** del Ministro del Interior y se publica en el Boletín Oficial del Estado.
- El **plazo** de resolución es de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud.

Beneficios que comporta la declaración de utilidad pública

- Usar la mención "Declarada de Utilidad Pública".
- Disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales, y de los beneficios económicos que las leyes reconozcan a favor de las mismas.
- Disponer de asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la legislación específica.

Rendición de cuentas

Las asociaciones declaradas de utilidad pública están obligadas a rendir cuentas dentro del plazo de seis meses contado desde el cierre del último ejercicio económico.

Revocación

El procedimiento se inicia cuando concurren las causas de revocación (incumplimiento sobrevenido de los requisitos de la declaración, de la obligación de rendir cuentas en plazo o de facilitar los informes requeridos). Adopta la forma de Orden del Ministro del Interior y se publica en el Boletín Oficial del Estado.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Todas las solicitudes se dirigirán a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior (Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación), calle Amador de los Ríos, nº 7, 28010 Madrid, y se podrán presentar:

- En el Registro General del Ministerio del Interior. En los registros de las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno.
- En los registros de cualquier otro órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la Administración de las comunidades autónomas, o a las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.
- En las oficinas de Correos y en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
- A través de la Sede electrónica del Ministerio del Interior.

TASAS

Para el pago de las tasas se utilizará el modelo 790, código 017.

Importes de las tasas: <http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones/tasas>

ENLACES

REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES/SERVICIO DE UTILIDAD PÚBLICA

<http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones>

Este enlace permite obtener información, modelos orientativos de documentación e impresos de liquidación de tasas para los procedimientos que se tramitan en el Ministerio del Interior en materia de asociaciones.

ATENCIÓN PERSONALIZADA:

Teléfono: 060

**Horario: De lunes a viernes laborables de 9:30 a 17:30 horas
Sábados laborables de 9:00 a 14:00 horas.**

Edita: Ministerio del Interior. Secretaría General Técnica
Edición: Julio 2016
NIPO (en línea): 126-16-022-4

Anexo I: Modelo de solicitud de inscripción de la junta directiva para asociaciones.



MINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
ASOCIACIONES, ARCHIVOS Y
DOCUMENTACIÓN
Registro Nacional de Asociaciones

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE TITULARES DE LA JUNTA DIRECTIVA U ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos / Razón Social

DNI/NIF/NIE/PASAPORTE

Nacionalidad

Actúa en calidad de socio/representante

--	--

2. DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES

Avenida/Calle/Plaza

Número Bloque Portal Piso Puerta

--	--	--	--	--	--

Otros datos: urbanización, colonia, barrio,
parroquia...

Municipio

Provincia

Código Postal

--	--	--

Teléfono

Dirección correo electrónico

--	--

SOLICITA:

3. DATOS DE LA ASOCIACIÓN

Denominación exacta

Nº inscripción en el Registro Nacional Asociaciones

Domicilio

Avenida/Calle/Plaza

Número Bloque Portal Piso Puerta

--	--	--	--	--	--

Otros datos: urbanización, colonia, barrio,
parroquia...

Municipio

Provincia

Teléfono

Código Postal

--	--	--	--

Dirección de Correo Electrónico



MINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
ASOCIACIONES, ARCHIVOS Y
DOCUMENTACIÓN
Registro Nacional de Asociaciones

3. DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD (Rellene con una X los documentos que se aportan)

☐ Acta o certificado del acuerdo de designación de los titulares de la Junta Directiva u órgano de representación.

☐ Fotocopia DNI,NIF,NIE o pasaporte (ver punto 4)

☐ Otros

Los documentos destacados en **negrita** son obligatorios.

Puede obtener modelos orientativos en:

<http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/asociaciones/modelos-para-inscripciones-en-el-registro-nacional>

4. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS IDENTIFICATIVOS (sólo DNI)

☐ AUTORIZO la consulta de mis datos de identificación personal en la Plataforma de Intermediación de Datos, con garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de la Inscripción Registral cuya tramitación se solicita.

En caso de no autorizar la consulta, marque la siguiente casilla ☐ y presente los documentos que acrediten su identidad.

5. AUTORIZO A SER NOTIFICADO POR CORREO ELECTRÓNICO ☐ (Sólo para usuarios dados de alta en el sistema de notificaciones de la Administración General del Estado). www.notificaciones.gob.es

Lugar y Fecha

Firma

--	--

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES
C/ AMADOR DE LOS RÍOS, 7
28010 - **MADRID**

Fuente: Ministerio del Interior. Registro de Asociaciones. Formularios.

Anexo J: Modelo de certificado de acta de disolución y liquidación de la asociación.

CERTIFICADO DE ACTA DE ACUERDO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

D./DÑA. _____
con N.I.F. número _____, de nacionalidad _____, con domicilio en la
calle _____/plaza _____, número _____, código postal _____,
municipio _____, provincia _____ en calidad de
Secretario¹ _____ de la asociación
denominada _____
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número _____,

CERTIFICA:

Que reunida la Asamblea General de la referida entidad el día ____ de _____ de _____,
de acuerdo con sus Estatutos y la legislación aplicable, a la que concurrieron un número de _____
socios sobre el total de _____ socios que figuran en el Libro de Socios de la Entidad, en _____ (1ª o
2ª) convocatoria, existiendo quórum suficiente, por mayoría de (%) o unanimidad) _____
de los votos emitidos, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. La disolución de la Asociación.
2. El cese de los órganos de gobierno y representación.

Que la asociación se encuentra actualmente en situación de cese de actividad y funcionamiento y
en el momento de la disolución: *(marcar lo que proceda)*

☐ CARECE de remanente.
☐ EXISTE un remanente de _____ €, que se destinarán según acuerdo de la Asamblea
General a _____.²
☐ EXISTE un remanente pendiente de liquidar y se nombran liquidadores a las siguientes
personas: *(indicar nombre y apellidos y N.I.F.)*³

D./Dª _____
D./Dª _____

Que se consiente a la Administración encargada de la inscripción registral para que sean
comprobados los datos de identidad de los firmantes (RD 522/2006, de 28 de abril)⁴.

En _____, a ____ de _____ de _____

EL/LA SECRETARIO/A
D./DÑA.

N.I.F.

EL/LA PRESIDENTE/A
D./DÑA.

N.I.F.

FDO.:

FDO.:

¹ Presidente, apoderado, etc.

² Se elaborará y acompañará el balance y el escrito justificativo de que la entidad beneficiaria ha recibido el patrimonio remanente.

³ Se harán constar los datos de identificación de los liquidadores y su aceptación.

⁴ Si no se presta el consentimiento, debe aportarse fotocopia del Documento Nacional de Identidad

Fuente: Ministerio del Interior. Registro de Asociaciones. Formularios.

Anexo K: Modelo de Estatutos para fundaciones.

MODELO DE ESTATUTOS DE UNA FUNDACIÓN

CAPÍTULO I CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN

Artículo 1. Denominación, naturaleza, domicilio y ámbito de actuación.

1. La **Fundación** ⁽¹⁾ es una organización sin fin de lucro, que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de los fines de interés general que se detallan en estos Estatutos.
2. El domicilio estatutario de la Fundación se establece en la calle , número , distrito postal del Municipio de ⁽²⁾.
3. La Fundación desarrollará principalmente sus actividades en las siguientes Comunidades Autónomas: ⁽³⁾.

Artículo 2. Personalidad jurídica, comienzo de actuaciones y duración temporal.

1. La Fundación tendrá personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública de su constitución en el correspondiente Registro de Fundaciones y a partir de ese momento comenzará sus actuaciones.
2. La Fundación que se constituye tendrá una duración temporal indefinida. No obstante, si en algún momento los fines propios de la Fundación pudieran estimarse cumplidos o resultaren de imposible realización, el Patronato podrá acordar la extinción de aquella conforme a lo dispuesto en la legislación vigente y en el artículo de estos Estatutos.

CAPÍTULO II FINES Y BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN

Artículo 3. Fines.

Son fines ⁽⁴⁾ de la Fundación:

Artículo 4. Actividades.

Para la consecución de los fines mencionados en el artículo anterior, la Fundación realizará las siguientes actividades ⁽⁵⁾:

Además, con el fin de obtener ingresos, la Fundación podrá realizar actividades mercantiles cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de las anteriores, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia, como las siguientes:

Artículo 5. Beneficiarios.

1. Los fines fundacionales de la Fundación se dirigen, con carácter genérico, a las siguientes colectividades de personas ⁽⁶⁾:
2. El Patronato, a la hora de determinar los beneficiarios de la actividad de la Fundación, actuará con criterios de imparcialidad y no discriminación. Las reglas básicas para la determinación de los beneficiarios son las siguientes ⁽⁷⁾:

Artículo 6. Aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines.

La Fundación destinará efectivamente el patrimonio y sus rentas al cumplimiento de sus fines fundacionales.

1. Deberá ser destinado al cumplimiento de los fines fundacionales, al menos, el 70 por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, en los términos previstos por la legislación vigente.
2. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

Artículo 7. Información.

El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

**CAPÍTULO III
GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN**

Artículo 8. Patronato.

1. El Patronato es el órgano de gobierno y representación de la Fundación.

2. Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos.

Artículo 9. Composición.

1. Estará constituido por ⁽⁸⁾ patronos que adoptarán sus acuerdos por mayoría, en los términos establecidos en los presentes Estatutos.
2. Podrán ser miembros del Patronato las personas físicas que tengan plena capacidad de obrar y no estén inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos.
3. Las personas jurídicas podrán formar parte del Patronato y deberán designar a la persona o personas físicas que las representen.
4. Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione en el ejercicio de su función.

Artículo 10. Reglas para la designación y sustitución de sus miembros.

1. La designación de los miembros integrantes del primer Patronato se hará por los fundadores y constará en la escritura de constitución.
2. La designación de nuevos miembros se hará por el Patronato que figure inscrito en el correspondiente Registro de Fundaciones y por acuerdo de la mayoría de sus miembros ⁽⁹⁾.
3. Los patronos habrán de aceptar sus cargos en la forma prevista en la legislación vigente y su aceptación se notificará formalmente al Protectorado y se inscribirá en el Registro de Fundaciones.
4. El nombramiento de los patronos tendrá una duración de años.
5. La sustitución de los patronos se realizará conforme a las siguientes reglas:

Artículo 11. Presidente.

1. Los patronos elegirán entre ellos un Presidente ⁽¹⁰⁾ al que corresponde ostentar la representación de la Fundación ante toda clase de personas, autoridades y entidades públicas o privadas, convocar las reuniones del Patronato, presidirlas, dirigir sus debates y, en su caso, ejecutar los acuerdos, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin.
2. El Presidente dispone de voto de calidad para dirimir los empates que pudieran producirse en las votaciones que se realicen en el Patronato.

Artículo 12. Secretario.

1. El Patronato nombrará un Secretario, cargo que podrá recaer en una persona ajena a aquél, en cuyo caso tendrá voz pero no voto.
2. Corresponde al Secretario la certificación de los acuerdos del Patronato, la custodia de toda la documentación perteneciente a la Fundación, levantar las actas correspondientes a las reuniones del Patronato, expedir las certificaciones e informes que sean necesarios y todas aquéllas que expresamente se le encomienden. En los casos de enfermedad, ausencia o vacante ejercerá las funciones de Secretario el vocal más joven del Patronato.⁽¹¹⁾

(12)

Artículo 13. Atribuciones del Patronato.

Sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones del Protectorado, serán facultades del Patronato:

- a) Ejercer el gobierno y representación de la Fundación y aprobar los planes de gestión y programas periódicos de actuación de la misma.
- b) Interpretar y desarrollar los Estatutos y, en su caso, acordar la modificación de los mismos, siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundación y a la mejor consecución de sus fines.
- c) Fijar las líneas generales sobre la distribución y aplicación de los fondos disponibles entre las finalidades de la Fundación.
- d) Nombrar apoderados generales o especiales.
- e) Seleccionar a los beneficiarios de las prestaciones fundacionales.
- f) Aprobar el plan de actuación y las cuentas anuales que hayan de ser presentadas al Protectorado.
- g) Acordar la apertura y cierre de sus Delegaciones.
- h) Adoptar acuerdos sobre la extinción o fusión de la Fundación en caso de imposibilidad de cumplimiento de sus objetivos.
- i) Delegar sus facultades en uno o más patronos, sin que puedan ser objeto de delegación la aprobación de las cuentas y del plan de actuación, la modificación de los Estatutos, la fusión y la liquidación de la Fundación, así como aquellos actos que requieran la autorización del Protectorado.

Artículo 14. Obligaciones del Patronato.

En su actuación, el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y a la voluntad del fundador manifestada en estos Estatutos.

Artículo 15. Responsabilidad de los patronos.

1. Los patronos deberán desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal.
2. Los patronos responderán solidariamente frente a la Fundación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a estos Estatutos, o por lo realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo.
3. Los patronos deberán concurrir a las reuniones a las que sean convocados y cumplir en sus actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales vigentes y en los presentes Estatutos.

Artículo 16. Cese y suspensión de patronos.

1. El cese y la suspensión de los patronos de la Fundación se producirán en los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y además ⁽¹³⁾:
2. La renuncia al cargo de patrono podrá llevarse a cabo por cualquiera de los medios y mediante los trámites previstos para la aceptación.
3. La sustitución, el cese y la suspensión de los patronos se inscribirán en el correspondiente Registro de Fundaciones.

Artículo 17. Forma de deliberación y adopción de acuerdos.

1. El Patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso para la buena marcha de la Fundación. Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien cuando lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros.

La convocatoria se hará llegar a cada uno de los miembros, al menos, con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, utilizando un medio que permita dejar constancia de su recepción. En la misma se indicará el lugar, día y hora de celebración de la reunión así como el orden del día.

No será preciso convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por unanimidad la celebración de la reunión.

2. El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran al menos la mitad más uno de sus miembros.

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, excepto cuando los Estatutos o la legislación vigente establezcan mayorías cualificadas.
4. De las reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente acta, que deberá ser sometida a la aprobación de todos los miembros presentes en las mismas. Esta se transcribirá al correspondiente libro y será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.
5. El cargo de patrono que recaiga en persona física deberá ejercerse personalmente. No obstante, podrá actuar en su nombre y representación otro patrono por él designado. Esta actuación será siempre para actos concretos y deberá ajustarse a las instrucciones que, en su caso, el representado formule por escrito.

CAPÍTULO IV RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA FUNDACIÓN

Artículo 18. Patrimonio.

1. El patrimonio de la Fundación está formado por todos los bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica que integren la dotación así como por aquellos que adquiriera la Fundación con posterioridad a su constitución, se afecten o no a la dotación.
2. La Fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos integrantes de su patrimonio, que deberán constar en su inventario anual.
3. El Patronato promoverá, bajo su responsabilidad, la inscripción a nombre de la Fundación de los bienes y derechos que integran su patrimonio, en los Registros públicos correspondientes.

Artículo 19. Financiación.

1. La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio y, en su caso, con aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones o donaciones que reciba de personas o entidades, tanto públicas como privadas.

Asimismo, la Fundación podrá obtener ingresos por sus actividades, siempre que ello no implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.

2. Queda facultado el Patronato para hacer las variaciones necesarias en la composición del patrimonio de la Fundación, de conformidad con lo que aconseje la coyuntura económica de cada momento y sin perjuicio de solicitar la debida autorización o proceder a la oportuna comunicación al Protectorado.
3. El ejercicio económico coincidirá con el año natural ⁽¹⁴⁾.

4. La Fundación llevará una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad que permita un seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevará necesariamente un libro Diario y un libro de Inventarios y de Cuentas Anuales y aquellos otros libros obligatorios que determine la legislación vigente.
5. En la gestión económico-financiera, la Fundación se regirá por los principios y criterios generales determinados en la normativa vigente.

Artículo 20. Cuentas anuales y plan de actuación.

1. Las cuentas anuales serán aprobadas por el Patronato en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio, sin que pueda delegar esta función en otros órganos de la Fundación, y se presentarán al Protectorado dentro de los diez días hábiles siguientes a su aprobación.
2. El Patronato aprobará y remitirá al Protectorado, en los últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación, en el que quedarán reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar en el ejercicio siguiente. El Patronato no podrá delegar esta función en otros órganos de la Fundación.

**CAPÍTULO V
MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN**

Artículo 21. Modificación.

1. El Patronato podrá modificar los presentes Estatutos siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundación. En cualquier caso, procederá modificar los Estatutos cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la Fundación hayan variado de manera que ésta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a los Estatutos en vigor.
2. Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, será preciso el voto favorable de la mayoría de los miembros del Patronato.
3. La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se comunicará al Protectorado y habrá de ser formalizada en escritura pública e inscrita en el correspondiente Registro de Fundaciones.

Artículo 22. Fusión.

1. El Patronato de la Fundación podrá acordar la fusión de ésta con otra Fundación siempre que resulte conveniente en interés de la misma.
2. Para la adopción de acuerdos de fusión, será preciso el voto favorable de la mayoría de los miembros del Patronato.

Artículo 23. Extinción.

1. La Fundación se extinguirá por las causas y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislación vigente.
2. La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará por el Patronato bajo el control del Protectorado.
3. La totalidad de los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquellos, y que estén consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo, de acuerdo con la legislación vigente, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general. Queda expresamente autorizado el Patronato para realizar dicha aplicación.

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTATUTOS

- ⁽¹⁾ Art. 1.1. Deberá figurar necesariamente en la denominación la palabra Fundación así como el nombre específico de la misma que no podrá coincidir o asemejarse con ninguna otra previamente inscrita en los Registros de Fundaciones. Para establecer la denominación deberán tenerse en cuenta las reglas recogidas en el artículo 5 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y en el artículo 3 del Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.
- ⁽²⁾ Art. 1.2. El domicilio estatutario debe situarse en el lugar donde se encuentre la sede de su Patronato o en el lugar en que se desarrollen principalmente sus actividades.
- ⁽³⁾ Art. 1.3. La Fundación habrá de realizar principalmente sus actividades, de modo estable y permanente, en el territorio de más de una Comunidad Autónoma. En caso de no ser así, deberá solicitar su inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma correspondiente.
- ⁽⁴⁾ Art. 3. Los fines de interés general que va a realizar la Fundación deben definirse de modo concreto y determinado.
- ⁽⁵⁾ Art. 4. Respecto de las actividades que, en cumplimiento de los fines fundacionales, va a realizar la Fundación, se enumerarán todas las que se consideren precisas, e incluso puede existir una cláusula residual donde se establezca la posible realización de otras actividades similares o análogas. Asimismo, deberán separarse claramente las actividades de interés general que se realizarán en cumplimiento directo de los fines fundacionales (propias), de aquellas otras de carácter económico para la obtención de recursos (mercantiles).
- ⁽⁶⁾ Art. 5.1. Las prestaciones no pueden destinarse al fundador o a los patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad o a sus parientes hasta el cuarto grado inclusive o a personas jurídicas singularizadas que no persigan fines de interés general.
- ⁽⁷⁾ Art. 5.2. Estas reglas establecerán, por ejemplo, la composición del órgano de selección, sus criterios de actuación, los requisitos, los méritos a valorar, medios a través de los que se dará publicidad a las convocatorias que se realicen, periodicidad de las mismas, e incluso la facultad al Patronato para acordar los requisitos específicos de cada convocatoria y otras reglas que se consideren oportunas.
- ⁽⁸⁾ Art. 9.1. El número mínimo de patronos será, en todo caso, de tres.
- ⁽⁹⁾ Art. 10.2. El fundador podrá reservarse el nombramiento de patronos o establecer otras reglas distintas a la del nombramiento por el Patronato.
- ⁽¹⁰⁾ Art. 11.1. El fundador podrá establecer en los Estatutos otro sistema de nombramiento del Presidente.
- ⁽¹¹⁾ Art. 12.2. Podrá establecerse otro sistema de sustitución para esos casos.
- ⁽¹²⁾ Pueden preverse otros cargos dentro del Patronato y otras funciones, siempre que no se opongan a la legislación vigente, así como otros órganos de gobierno distintos del Patronato.
- ⁽¹³⁾ Art. 16.1. El fundador podrá establecer otras causas para el cese y la suspensión de los patronos, siempre que éstas sean objetivas.
- ⁽¹⁴⁾ Art. 19.3. También podrá establecerse que no coincida con el año natural, siempre que su duración sea anual.

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Protectorado de Fundaciones. Formularios.

Anexo L: Registro Único de Fundaciones.



Tras la entrada en funcionamiento, el día 2 de diciembre de 2015, del [Registro único de Fundaciones de competencia estatal](#) y la implantación del [Protectorado único de fundaciones de competencia estatal](#), se traslada la siguiente información sobre dónde presentar la documentación referente a los siguientes trámites:

PROCEDIMIENTOS cuya solicitud de inicio debe presentarse **ante el REGISTRO ÚNICO DE FUNDACIONES** (plaza de Jacinto Benavente, nº 3 - Madrid-28012):

- **CONSTITUCIÓN Y CERTIFICACIONES**
 - ✓ Expedición de certificado negativo de denominación.
 - ✓ Inscripción de la Fundación.
 - ✓ Inscripción de delegaciones de fundaciones extranjeras.
 - ✓ Expedición de certificaciones y notas.
- **MODIFICACIONES ESTATUTARIAS**
 - ✓ Solicitud de inscripción de modificaciones estatutarias (previamente se deben de comunicar al Protectorado dichas modificaciones estatutarias, ver página 2).
- **ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN**
 - ✓ Solicitud de inscripción de modificaciones en el Patronato.
 - ✓ Solicitud de inscripción de cambios en otros órganos.
 - ✓ Solicitud de inscripción de delegaciones y apoderamientos.
- **ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN**
 - ✓ Legalización de libros.



- ✓ Designación de expertos independientes y auditores de cuentas.
- ✓ Solicitud de copias de cuentas.

- FUSIÓN Y EXTINCIÓN

- ✓ Solicitud de inscripción de la fusión de fundaciones.
- ✓ Solicitud de inscripción de la extinción de una fundación.

- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LOS DESEMBOLSOS PENDIENTES, AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL.

PROCEDIMIENTOS cuya solicitud de inicio debe presentarse ante el **PROTECTORADO ÚNICO DE FUNDACIONES** (Plaza del Rey, nº 6 - Madrid-28004)

- COMUNICACIÓN DE MODIFICACIONES ESTATUTARIAS
- Presentación de las CUENTAS ANUALES y PLANES DE ACTUACIÓN
- Solicitud de AUTORIZACIONES Y COMUNICACIONES
 - ✓ Autorización para contratar con la fundación por parte de patronos.
 - ✓ Autorización para realizar actos de disposición (enajenación y/o gravamen) de la dotación.
 - ✓ Autorización anual para la enajenación de valores cotizados.
 - ✓ Comunicación trimestral de valores cotizados.
 - ✓ Comunicación de la enajenación de bienes y derechos que no formen parte de la dotación.
 - ✓ Comunicación del gravamen de bienes y derechos que no formen parte de la dotación.
 - ✓ Comunicación de herencias y donaciones.
 - ✓ Comunicación de adquisición de participaciones en sociedades mercantiles.



- FUSIONES Y EXTINCCIONES

- ✓ Comunicación del acuerdo de fusión entre fundaciones.
- ✓ Ratificación del acuerdo de extinción de una fundación.

El presente documento contiene información de carácter general, sin que constituya
opinión profesional ni asesoramiento jurídico.

Anexo M: Modelo de solicitud de primera inscripción en el registro de fundaciones.



MINISTERIO
DE JUSTICIA

SUBSECRETARÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS
REGISTROS Y DEL NOTARIADO
Subdirección General del Notariado
y de los Registros

SOLICITUD DE PRIMERA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE FUNDACIONES

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Fundación solicitante:
Representada por: Nombre y apellidos
Nº del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte: En su condición de:

2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD

DOCUMENTOS
<input type="checkbox"/> Escritura pública otorgada ante Notario (copias autorizada y simple).
<input type="checkbox"/> Justificación de haber presentado la escritura a la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (modelo 400 de autoliquidación).
<input type="checkbox"/> CIF (fotocopia).
<input type="checkbox"/> Primer plan de actuación, si el desembolso inicial de la dotación es inferior a 30.000 €.
OTROS DOCUMENTOS
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN

A efectos de notificación, el interesado señala los siguientes datos:		
Nombre y apellidos		
Domicilio de notificación (Avda., calle o plaza y número)	Localidad	Código Postal
Provincia	País	Teléfono

De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, solicito la **primera inscripción**.

Lugar y fecha	Firma

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO
Subdirección del Notariado y de los Registros
Pza. de Jacinto Benavente, 3, 28071

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Protectorado de Fundaciones. Formularios.

Anexo N: Modelo de comunicación de desembolsos y aumentos de la dotación para fundaciones.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SUBSECRETARÍA

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General del
Protectorado de Fundaciones

COMUNICACIÓN DE DESEMBOLOS Y AUMENTOS DE DOTACIÓN

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Fundación solicitante:	Nº REGISTRO
Representada por: Nombre y apellidos	CIF
Nº del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte: en su condición de:	

2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD

	Copia de la escritura pública otorgada ante Notario
	Justificación de haber presentado la escritura a la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (Modelo 600 de autoliquidación).
	En los casos de aumento de dotación por asignación contable de efectivo, mediante un traspaso de cuentas, certificación del acuerdo del Patronato, con las firmas legitimadas notarialmente, acompañada del balance que haya servido de base al acuerdo adoptado.

3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN

A efectos de notificación, el interesado señala los siguientes datos:		
Nombre y apellidos		
Domicilio de notificación (Avda., calle o plaza y número)	Localidad	Código Postal
Provincia	País	Teléfono
Correo electrónico:		

De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal, aprobada por real decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, se comunica al Protectorado y se solicita su remisión al Registro a efectos de inscripción del **desembolso pendiente de la dotación y/o el aumento de dotación**.

Lugar y fecha	Firma

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SUBSECRETARÍA. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES
Plaza del Rey, 6
Madrid 28004

Consultas:
juridico@fundaciones@mecd.es

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Protectorado de Fundaciones.
Formularios.

Anexo Ñ: Modelo de hoja de firma de los patronos de fundación.

HOJA DE FIRMAS DE LOS PATRONOS	
Las cuentas anuales que contiene el presente documento, correspondientes al ejercicio económico / / - / / de la Fundación , han sido aprobadas por el Patronato en la reunión celebrada el día / / y se firman por los patronos <u>asistentes</u> :	
Firma:	Firma:
Nombre y apellidos:	Nombre y apellidos:
N.I.F.:	N.I.F.:
Firma:	Firma:
Nombre y apellidos:	Nombre y apellidos:
N.I.F.:	N.I.F.:
Firma:	Firma:
Nombre y apellidos:	Nombre y apellidos:
N.I.F.:	N.I.F.:
Firma:	Firma:
Nombre y apellidos:	Nombre y apellidos:
N.I.F.:	N.I.F.:
Firma:	Firma:
Nombre y apellidos:	Nombre y apellidos:
N.I.F.:	N.I.F.:
Firma:	Firma:
Nombre y apellidos:	Nombre y apellidos:
N.I.F.:	N.I.F.:

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Protectorado de Fundaciones. Formularios.

Anexo O: La evolución jurídica de la personalidad de las ONG.

Forma jurídica	2004	2006	2008	2010
Asociación	52	45	46	37
Fundación	35	45	45	54,3
Federación	7	6	6	4,9
Confederación	1	0	0	0
Otras	5	4	3	3,7

Fuente: Márquez, L.M. M. (2016).

Anexo P: Visión general de las diferencias entre la asociación y la fundación.

CONDICIONES	ASOCIACIÓN	FUNDACIÓN
Miembros necesarios para su constitución:	Mínimo 3 personas	1 o más fundadores
Tipo de documento:	Documento público o privado	Escritura pública
Tipo de inscripción:	Inscripción de carácter declarativo	Inscripción de carácter constitutivo
Patrimonio mínimo inicial:	0 euros	30.000 euros
Órganos mínimos:	2 órganos mínimos: Junta Directiva y Asamblea General	1 órgano mínimo: Patronato
Tipo de funcionamiento:	Funcionamiento democrático	El fundador decide el funcionamiento
Retribución cargos directivos/patronos:	Cargos directivos gratuitos o retribuidos	Patronos gratuitos
Control:	Sometimiento de la Junta a la Asamblea	Sometimiento del Patronato al Protectorado
Cargos directivos:	Cargos directivos elegidos por la Asamblea	Patronos designados por el fundador

Fuente: recuperado de <https://www.asesoriafundacionesyasociaciones.es/diferencias-entre-una-asociacion-y-una-fundacion/> (23 de marzo de 2018).